

Benito Juárez
Documentos,
Discursos y Correspondencia

Tomo 2, capítulo XIII

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Luis Alberto Arriola Díaz Viruell

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 2, capítulo XIII

**Anotado y revisado por
Luis Alberto Arrijo Díaz Viruell
(UAM – Azcapotzalco)**

Capítulo XIII

Se expiden las Leyes de Reforma

Año de 1859

CAPÍTULO XIII

SE EXPIDEN LAS LEYES DE REFORMA

1859

Ha transcurrido el primer semestre y la situación continúa siendo adversa a la causa liberal por falta de recursos económicos, no obstante que la mayor parte de las entidades federativas apoyaban al gobierno constitucional.

Se continúa negociando el tratado con los Estados Unidos pero no se adelanta en su discusión.

El gobierno estadounidense en vísperas de elecciones presidenciales y buscando la reelección de Buchanan estaba dispuesto a dar una compensación a cambio de la cesión de Baja California; por otra parte, los bienes del clero, generosamente puestos al servicio de los conservadores, podrían resolver el problema si se incorporaban al patrimonio de la nación. “Entre el futurismo del mandatario americano y el porvenir de su patria, entre la enajenación del territorio y la nacionalización de los bienes del clero, no era dudosa la alternativa”.¹ Juárez optó por la nacionalización de las Leyes de Reforma, después de arduos estudios en que Lerdo de Tejada, Ocampo y Manuel Ruiz fueron los consejeros y de hecho coautores de tan importantes disposiciones.

La lucha aun dentro del gobierno fue dura y Lerdo por dos veces intento renunciar. Seguramente las crisis fueron producidas por la impaciencia de Lerdo de Tejada y el deseo de Juárez de que esta reforma tuviese base legal, fuese operante y oportuna.

No cabe duda que la aseveración que dice que estas reformas sean obra exclusiva de Miguel Lerdo de Tejada, es inexacta. Era un viejo

¹ Ralph Roeder, *Juárez y su México*, México, Imprenta Nuevo Mundo, 1952, p. 246.

anhelo de Ocampo desde 1850, de Juárez externado en 1857, de Santos Degollado, de Guillermo Prieto, de Manuel Ruiz, etcétera [etc.]

Manuel Ruiz, en funciones de ministro de Justicia, en importante comunicación presentada al Congreso de la Unión dos años después, explica con detalle el proceso que culminó, finalmente, con la redacción de tan importantes leyes. Reproducimos a continuación párrafos selectos de esa comunicación.²

En vista de tan marcada y clara exigencia, el gobierno, que no podía ni debía demorar por más tiempo la ejecución de un pensamiento asentado ya en conciencia de la nación, se decidió a expedir las leyes que lo contenían y de antemano tenía preparados, acordando que las precediera un manifiesto en que se consignara la nueva marcha administrativa que debía seguir, desde el momento en que se dejaba llevar por el torrente de la opinión nacional.

Desde que por primera vez tuve el honor de encargarme de la cartera de Justicia, conocí que era preciso e indispensable dar principio a la Reforma. La nación, de varias maneras, se había manifestado interesada en alcanzar esta importante mejora y yo creía que no debía demorarla sin grave responsabilidad. Quise entonces que el supremo gobierno la iniciara al soberano Congreso; formé desde luego el proyecto de ley, lo consulté con varios de los señores diputados del Soberano Congreso, en todos encontró el pensamiento la mejor acogida; pero el señor [Sr.] Comonfort, sin repugnarlo, estuvo aplazando su discusión para una mejor oportunidad. Antes que llegara, el soberano Congreso quedó disuelto por el golpe de estado y el proyecto de ley referido no pudo elevarse a su conocimiento y sabia deliberación.

En Guadalajara y bajo la presidencia del Sr. Juárez, la cuestión de Reforma se tomó en consideración en el seno del gabinete

² *Exposición que el C. Manuel Ruiz, ministro que fue de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, presentó al Soberano Congreso de la Unión, para dar cuenta de su conducta oficial*, México, Imprenta de Nicolás Pizarro, 1861.

constitucional, pero los azares y reveses de aquella época y la inesperada y horrible derrota de Salamanca, obligaron al gobierno a ocupar toda su atención en proporcionarse elementos y medios de defensa para reparar tan terrible desgracia. Por tales embarazos, la cuestión volvió a aplazarse. En Veracruz, muchas veces el mismo pensamiento de Reforma fue objeto de conferencias y discusiones particulares, que día a día ilustraban la materia y mejoraban la idea.

Muy especialmente nos consagramos a este trabajo, por orden del Excmo. señor Presidente, los ministros que lo acompañábamos en la época en que fundadamente se creyó y esperó un feliz resultado de la batalla de Ahualulco. El Excmo. señor Presidente quería que, preparados estos importantes decretos, se llenara el voto de la nación en los momentos en que la suerte propicia concediera a nuestras armas un espléndido triunfo. La fortuna caprichosa nos negó sus favores muchas veces; acaso para que el tamaño de los esfuerzos y sacrificios nos hiciera más cautos en lo sucesivo y nos obligara a estimar el inmenso valor del triunfo de nuestra causa. La realización del pensamiento regenerador se reservó, por los motivos expresados, para un día oportuno.

En julio de 1859 era ya irresistible el clamor público. Toda la nación pedía la Reforma. Los estados del interior se uniformaron en la opinión y no era menos poderosa y la voz de los demás pueblos que la reclamaban., Ella, por fin, llegó con todo su prestigio a oídos de los encargados del poder público, decididamente apoyada por el Excmo. Sr. general [Gral.] en jefe del ejército federal don Santos Degollado.

El 12 de julio se dio a conocer en amplio manifiesto la justificación de este paso, que convertía en realidad los anhelos de los auténticos liberales. Ese mismo día se expidieron las leyes de nacionalización de los bienes del clero, de separación de la Iglesia y del Estado; el 23 de julio la

del matrimonio civil, el 31 de ese mes la secularización de cementerios y el 11 de agosto la que fija el calendario de fiestas públicas laicas.

Miguel Lerdo de Tejada salió de inmediato a los Estados Unidos el 12 de julio, para conseguir un empréstito con la hipoteca de los bienes nacionalizados. Pero McLane no podía permitir que el gobierno liberal resolviera sus problemas financieros y escribió al departamento de Estado: "Si logra un empréstito en los Estados Unidos con la hipoteca de la propiedad eclesiástica, hay pocas probabilidades de que él o sus colegas estén dispuestos a ceder la Baja California en la condición actual del gobierno constitucional. En cambio, si fracasa, estoy convencido de que no contrariará la cesión, sino que la sostendrá".³ Lerdo de Tejada fracasó, no se cumplió el oráculo del ministro estadounidense.

Los altos dignatarios de la Iglesia prodigaron sus críticas y anatemas contra las Leyes de Reforma. El Arzobispo de México expide cuatro pastorales que se les calificaron "de mérito".⁴

Murió repentinamente el obispo de Oaxaca, José Agustín Domínguez, y se dijo que ello era causado "por la sensación profunda que le causaron las leyes de Veracruz".⁴

Las armas liberales, melladas acaso de tantas batallas, fracasan en noviembre en diversos frentes: Oaxaca es ocupada por el cruel Marcelino Cobos; Tepic es tomada por Manuel Lozada. Finalmente, el día 13 Miramón derrota en Estancia de las Vacas a un ejército numeroso y bien equipado que comandan Degollado y Manuel Doblado. Les arrebataron 30 piezas de artillería, parque, armamento y dejaron en poder del enemigo 300 prisioneros.

Las derrotas se suceden: Woll ocupa Zacatecas, Miramón vence a los constitucionalistas Pedro Ogazón y Leandro Valle en las Barrancas de Atenquique; Colima cae en poder de los reaccionarios.

Santos Degollado lanza desde Tampico un manifiesto en donde considera que "la Constitución de 1857, fue un paso preparatorio que dio México para destruir los abusos y comenzar su regeneración".

³ Roeder, *Juárez y su México*, p. 253.

⁴ *Colección de efemérides publicadas en el calendario del más antiguo Galván* desde su fundación hasta el 30 de junio de 1950, primera parte, México, p. 73, 1950.

Oseguera, desde París, comunica a Mata que se empieza a gestar la idea de instaurar un imperio en México con ayuda de los franceses, y con gran visión comenta que ese imperio podría ser ofrecido a uno de los príncipes austriacos.

Las medidas anticonstitucionales dictadas por Vidaurri en Nuevo León, originan que un grupo de ciudadanos de ese estado desconozcan su gobierno; entre los firmantes del acta levantada a ese efecto encontramos a Ignacio Zaragoza, Bruno Lozano, Francisco Garza Treviño, etcétera [etc.].

El sagaz Matías Acosta sigue enviando a Juárez informes de los sucesos del interior, dándole cuenta, en carta del 19 de noviembre de 1859, de la derrota que sufre Degollado por las fuerzas de Miramón. Además, en otra comunicación de la misma fecha, pide que Ocampo exija a McLane el reconocimiento inmediato de la legitimidad del gobierno constitucional.

Tras seis meses de largo discutir, el 14 de diciembre se firmó el tratado McLane Ocampo, convenio oneroso para México, pero que representaba un progreso sobre el tratado de la Mesilla, y que la publicidad política convirtió desde ese momento en una presunta mancha para el partido liberal y sobre todo para Ocampo. Injusticia que en nuestros días Agustín Cué Canovas⁵ ha estudiado, ofreciéndonos una explicación y una justificación, mientras José Fuentes Mares insiste en considerar a este fracasado tratado "un crimen en grado de tentativa". Además, se olvida que el tratado para ponerse en vigor necesitaba dos ratificaciones: del senado estadounidense y de Juárez. Ninguno de los dos lo hizo. Es decir, el tratado no se aplicó.

En el tomo 3 de esta obra se presentará un gran acopio de materiales que permitirán examinar en forma objetiva y prolija, a la vista de documentos inéditos unos, pocos conocidos otros, el tratado McLane-Ocampo. Ello facilitará la revisión de juicios ligeros o poco fundados y llegar a conclusiones más acertadas.

⁵ El Tratado McLane-Ocampo.

En este capítulo se incluyen dos discursos del Presidente James Buchanan, pronunciados ante el Congreso estadounidense, donde se muestra que desde su llegada a la presidencia planeaba invadir México.

Mal terminó el año para el gobierno de Juárez, entre la grito que el tratado produjo; pero también fue mal año para Ocampo, porque se inició la controversia sobre su actuación.

DOCUMENTOS

Año de 1859

JUSTIFICACIÓN DE LAS LEYES DE REFORMA

El gobierno constitucional, a la nación

En la difícil y comprometida situación en que hace 18 meses se ha encontrado la república, a consecuencia del escandaloso motín que estalló en Tacubaya a fines de 1857, y en medio de la confusión y del desconcierto introducidos por aquel atentado, tan injustificable en sus fines como en sus medios, el poder público, que en virtud del código político del mismo año, tiene el imprescindible deber de conservar el orden legal en casos como el presente, había juzgado oportuno guardar silencio acerca de los pensamientos que abriga para curar radicalmente los males que afligen a la sociedad, porque una vez entablada la lucha armada entre una inmensa mayoría de la nación y los que pretenden oprimirla, creía llenar su misión apoyando los derechos de los pueblos por los medios que estaban a su alcance, confiado en que la bondad misma de una causa que tiene a su favor la razón y la justicia y los repetidos desengaños que de su impotencia para sobreponerse a ella debían recibir a cada paso sus adversarios, harían desistir a éstos de su criminal intento, o sucumbir prontamente en tal contienda.

Más cuando, por desgracia, no ha sido esto así; cuando a pesar de la prolongada resistencia que la sociedad está oponiendo al triunfo de aquel motín, los autores de éste continúan empeñados en sostenerlo, apoyados únicamente en la decidida protección del alto clero y en la fuerza de las bayonetas que tienen a sus órdenes; cuando, por resultado de esa torpe y criminal obstinación, la república parece condenada a seguir sufriendo aún por algún tiempo los desastres y las calamidades que forman la horrible historia de tan escandalosa rebelión, creería el gobierno faltar a uno de los primeros deberes que la misma situación le impone, si suspendiera por más tiempo la pública manifestación de sus ideas, no ya sólo acerca de las graves cuestiones que hoy se ventilan en el

terreno de los hechos de armas, sino también sobre la marcha que se propone seguir en los diversos ramos de la administración pública.

La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha, que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir. En momento tan supremo, el gobierno tiene el sagrado deber de dirigirse a la nación y hacer escuchar en la voz de sus más caros derechos e intereses, no sólo porque así se uniformará más y más la opinión pública en el sentido conveniente, sino porque así también apreciarán mejor los pueblos la causa de los grandes sacrificios que están haciendo al combatir con sus opresores, y porque así, en fin, se logrará que en todas las naciones civilizadas del mundo se vea claramente cuál es el verdadero objeto de esta lucha que tan hondamente conmueve a la república.

Al cumplir hoy este deber, nada tiene que decir el gobierno respecto de sus pensamientos sobre la organización política del país, porque siendo él mismo una emanación de la Constitución de 1857, y considerándose, además, como el representante legítimo de los principios liberales consignados en ella, debe comprenderse naturalmente que sus aspiraciones se dirigen a que los ciudadanos todos, sin distinción de clases ni condiciones, disfruten de cuantos derechos y garantías sean compatibles con el buen orden de la sociedad; a que unas y otras se hagan siempre efectivas por la buena administración de justicia; a que las autoridades todas cumplan fielmente sus deberes y atribuciones, sin excederse nunca del círculo marcado por las leyes y, finalmente, a que los estados de la federación de las facultades que les corresponden para administrar libremente sus intereses, así como promover todo lo conducente a su prosperidad, en cuanto no se oponga a los derechos e intereses generales de la república.

Mas como quiera que esos principios, a pesar de haber sido consignados ya, con más o menos extensión, en los diversos códigos políticos que ha tenido el país desde su independencia, y, últimamente, en la Constitución de 1857, no han podido ni podrán arraigarse en la nación, mientras que en su modo de ser social y administrativo se

conserven los diversos elementos de despotismo, de hipocresía, de inmoralidad y de desorden que los contrarían, el gobierno cree que sin apartarse esencialmente de los principios constitutivos, está en el deber de ocuparse muy seriamente en hacer desaparecer esos elementos, bien convencido ya por la dilatada experiencia de todo lo ocurrido hasta aquí, de que entretanto que ellos subsistan, no hay orden ni libertad posibles.

Para hacer, pues, efectivos el uno y la otra dando unidad al pensamiento de la reforma social por medio de disposiciones que produzcan el triunfo sólido y completo de los buenos principios, he aquí las medidas que el gobierno se propone realizar.

En primer lugar, para poner un término definitivo a esa guerra sangrienta y fratricida, que una parte del clero esta fomentando hace tanto tiempo en la nación, por sólo conservar los intereses y prerrogativas que heredó del sistema colonial, abusando escandalosamente de la influencia que le dan las riquezas que ha tenido en sus manos y del ejercicio de su sagrado ministerio, y despojar de una vez a esta clase de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio, cree indispensable:

1°. Adoptar, como regla general invariable, la más perfecta independencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos.

2°. Suprimir todas las corporaciones de regulares del sexo masculino, sin excepción alguna, secularizándose los sacerdotes que actualmente hay en ellas.

3°. Extinguir igualmente las cofradías, archicofradías, hermandades y, en general, todas las corporaciones o congregaciones que existen de naturaleza.

4°. Cerrar los noviciados en los conventos de monjas, conservándose las que actualmente existen en ellos, con los capitales o dotes que cada una haya introducido y con la asignación de lo necesario para el servicio del culto en sus respectivos templos.

5°. Declarar que han sido y son propiedad de la nación todos los bienes que hoy administra el clero secular y regular con diversos títulos, así como el excedente que tengan los conventos de monjas, deduciendo

el monto de sus dotes y enajenar dichos bienes, admitiendo en pago de una parte de su valor títulos de la deuda pública y de capitalización de capitalización e empleos.

6°. Declarar, por último, que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes así por la administración de los sacramentos como por todos los servicios eclesiásticos y cuyo producto anual, bien distribuido, basta para atender ampliamente al sostenimiento del culto y de sus ministros, es objeto de convenios, libres entre unos y otros, sin que para nada intervenga en ellos la autoridad civil.

Además de estas medidas, que en concepto del gobierno, son las únicas que pueden dar por resultado la sumisión del clero a la potestad civil en sus negocios temporales dejándolo, sin embargo, con todos los medios necesarios que pueda consagrarse exclusivamente, como es debido, al ejercicio de su sagrado ministerio, cree también indispensable proteger en la república, con toda su autoridad, la libertad religiosa, por ser necesario su prosperidad y engrandecimiento, a la vez que una exigencia de la civilización actual.

En el ramo de justicia, el gobierno comprende que una de las más urgentes necesidades de la república es la formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y sobre procedimientos, porque sólo de esta manera se podrá sacar a nuestra legislación del embrollado laberinto en que actualmente se encuentra, uniformándola en toda la nación, expeditando la acción de los tribunales y poniendo el conocimiento de las leyes al alcance de todo el mundo; y como quiera que para la ejecución de este importante trabajo bastará que se dediquen a él con empeño los jurisconsultos a quienes se les encomienda, el gobierno se propone hacer un esfuerzo para que no quede aplazada por más tiempo esta mejora, a fin de que la sociedad comience a disfrutar de los numerosos beneficios que ella ha de producirle.

El establecimiento de los jurados de hecho para todos los delitos comunes, es también una de las exigencias de la nación y el gobierno hará cuanto esté de su parte para plantear tan interesante reforma.

Entretanto que se realiza esta innovación y se promulgan los códigos, el gobierno se propone expedir sin demora aquellas medidas que

juzgue urgentes para hacer efectivas las primeras garantías de los ciudadanos, y destruir los errores o abusos que se oponen a la libre circulación de la riqueza pública.

Respecto de que la justicia sea administrada gratuitamente, la Constitución de 1857 ha establecido ya este principio como un precepto fundamental; más como para que tal precepto produzca los buenos efectos que se propuso el legislador, es indispensable que se provea muy puntualmente al pago de los sueldos de los magistrados, jueces y empleados del ramo judicial, el gobierno se propone atenderlo con la preferencia que merece, porque está convencido de que faltando esta circunstancia, aquel precepto, en vez de bienes causaría grandes males a la sociedad. Sobre este punto se propone también el gobierno dictar la providencia que sea más conveniente para impedir la multiplicación de pleitos a que puede dar lugar esta importante reforma.

Sobre abolición de fueros de clases en delitos comunes, nada tiene el gobierno que decir, porque ella está ya expresamente prevenida en la Constitución, y no será por cierto la actual administración la que piense jamás en restablecer tan injustas como odiosas distinciones.

En materia de instrucción pública, el gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y moralidad que se requieren para desempeñar con acierto el cargo de preceptores de la juventud, porque tiene el convencimiento de que la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposibles los abusos del poder.

Con ese mismo objeto, el gobierno general por sí y excitando a los particulares de los estados, promoverá y fomentará la publicación y circulación de manuales sencillos y claros sobre los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, así como sobre aquellas ciencias que más directamente contribuyen a su bienestar y a ilustrar su entendimiento, haciendo que esos manuales se estudien aun por los niños que concurran a los establecimientos de educación primaria, a fin de que desde su más tierna edad vayan adquiriendo nociones útiles y formando

sus ideas en el sentido que es conveniente para bien general de la sociedad. Respecto de la instrucción secundaria y superior, el gobierno se propone formar un nuevo plan de estudios, mejorando la situación de los preceptores que se emplean en esta parte de la enseñanza pública, así como el sistema que para ella se sigue actualmente en los colegios, y, ajustándose al principio que sobre eso contiene la Constitución, se adoptará el sistema de la amplia libertad respecto de toda clase de estudios, así como del ejercicio de las carreras o profesiones que con ellos se forman, a fin de que todo individuo, nacional o extranjero, una que demuestre en el examen respectivo la aptitud y los conocimientos necesarios, sin indagar el tiempo y lugar en que los hayan adquirido, pueda dedicarse a la profesión científica o literaria para sea apto.

En las relaciones del gobierno general con los particulares de los estados, la actual administración, lejos de contrariar los intereses y las justas exigencias de estos, está por el contrario resuelta a apoyarlas en cuanto estén sus facultades, auxiliándolos además en todo aquello de alguna manera conduzca a mejorar su situación, a fin de estrechar así los vínculos de unión que deben existir entre las localidades y el centro de la república.

Una de las primeras necesidades de ésta, es hoy la de atender a la seguridad en los caminos y poblaciones, para extinguir los malhechores que se encuentran en unos y otras, no sólo por los inmensos males de la subsistencia de esa plaga causa interiormente a la nación, paralizando el movimiento de su población y riqueza y manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los intereses de sus habitantes, sino porque ella desconceptúa al país cada día más y más en el exterior, e impide que vengan a radicarse en él multitud de capitales y de personas laboriosas que por esa causa van a establecerse en otros puntos. Por tales razones, el gobierno está firmemente resuelto a trabajar sin descanso en remediar este grave mal por todos los medios que estén a su alcance.

En cuanto al odioso sistema de exigir pasaportes a los viajeros o caminantes, inútil es decir que quedará abolido, cuando lo está ya por la Constitución; y mal podría el gobierno actual pensar en restablecerlo, cuando sus ideas se encaminan precisamente a destruir todos los

obstáculos que se oponen al libre tránsito de las personas e intereses en el territorio nacional.

La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre, como es libre en el hombre la facultad de pensar, y el gobierno no cree que deben imponérsele otras trabas que aquellas que tiendan a impedir únicamente la publicación de escritos inmorales, sediciosos o subversivos, y de los que contengan calumnias o ataques a la vida privada.

El registro civil es, sin duda, una de las medidas que con urgencia reclama nuestra sociedad, para, quitar al clero esa forzosa y exclusiva intervención que hasta ahora ejerce en los principales actos de la vida de los ciudadanos y, por lo mismo, el gobierno tiene la resolución de que se adopte esa reforma, conquistando definitivamente el gran principio que tal medida debe llevar por objeto, esto es, estableciendo que una vez celebrados esos actos ante la autoridad civil, surtan ya todos sus efectos legales.

Respecto de las relaciones de la república con las naciones amigas, el gobierno se propone cultivarlas siempre con el mayor esmero, evitando, por su parte, todo motivo de desavenencia: para esto cree bastante observar fielmente los tratados celebrados con ellas y los principios generales del derecho de gentes e internacional y abandonar, sobre todo, para siempre, como lo ha hecho hasta aquí ese sistema de evasivas y moratorias que, con grave daño de la nación, se ha seguido frecuentemente en el despacho de los negocios de este ramo; atendiendo, por el contrario, con el mayor empeño, toda reclamación en el acto que se presente, y resolviéndola sin demora, en vista, de las circunstancias del caso, según los principios de recta justicia y de mutua conveniencia que forman la base sólida de las relaciones de amistad entre los pueblos civilizados del mundo.

También cree el gobierno que será muy conveniente fijar con claridad por una disposición general y, conforme con las reglas y prácticas establecidas en otros países, la intervención que hayan de tener los cónsules y vicecónsules extranjeros en la república, tanto en los negocios de sus respectivos nacionales, como en sus relaciones con las

autoridades, a fin de evitar así la repetición de las cuestiones que más de una vez se han suscitado ya sobre este punto.

En cuanto al nombramiento de legaciones en los países extranjeros con quienes nos ligan relaciones de amistad, cree el gobierno que el estado actual de éstas con dichos países está muy lejos de exigir un ministro residente en uno de ellos y su opinión es que por ahora deben limitarse a dos; una en los Estados Unidos de América y otra en Europa, fijando esta última su residencia en París o en Londres, de donde podrá trasladarse, en caso necesario, al punto que se le designe. En las demás capitales de Europa y América, mientras que no ocurra algún negocio que por su misma gravedad demande la presencia de un ministro plenipotenciario, bastará que haya cónsules generales con el carácter de encargados de negocios. Estos agentes, según la nueva ley que al efecto debe expedirse, serán precisamente nacidos en la república.

Acerca de la Hacienda nacional, la opinión del gobierno es que deben hacerse reformas muy radicales, no sólo para establecer un sistema de impuestos que no contrarie el desarrollo de la riqueza y que destruya los graves errores que nos dejó el régimen colonial, sino para poner un término definitivo a la bancarrota que en ella han introducido los desaciertos cometidos después en todos los ramos de la administración pública y, sobre todo, para crear grandes intereses que se identifiquen con la reforma social, coadyuvando eficazmente a la marcha liberal y progresista de la nación.

En primer lugar, deben abolirse para siempre las alcabalas, los contrarregistros, los peajes y, en general, todos los impuestos que se recaudan en el interior de la república sobre el movimiento de la riqueza, de las personas y de los medios de transportes que conducen unas y otras, porque tales impuestos son, bajo todos aspectos, contrarios a la prosperidad de la república.

En igual caso, aunque sin todas sus funestas consecuencias, se encuentra el derecho sobre la translación de dominio en fincas rústicas y urbanas, y por tal razón debe también ser extinguido del todo.

El derecho de 3% sobre el oro y la plata que se extraen de las minas, y el de un real por marco, llamado de minería, son unos impuestos

verdaderamente injustos y odiosos en su base, porque no recaen sobre las utilidades del minero, sino sobre el producto bruto de las minas, que las más veces no representa sino una pequeña parte de lo que se emplea en esas negociaciones antes de encontrar la codiciada riqueza. Por esta razón y porque verdaderamente estos impuestos están en abierta contradicción con la protección que en el estado actual de la república debe dar el gobierno a esa clase de industria, la presente administración cree que conviene reformarlos de manera que los especuladores en las aventuradas negociaciones de minas no sufran gravamen alguno, sino cuando comiencen a recibir utilidades de ellas, y con tal objeto puede adoptarse como base fija e invariable la de que en dividendos o reparto de utilidades que se hagan en cada negociación de minas, tenga el gobierno lo correspondiente a dos barras de las 24 en que se dividen con forme a ordenanza, aboliéndose todos los demás gravámenes que hoy pesan sobre ellas.

Respecto del comercio exterior, el gobierno tiene la resolución de hacer cuanto esté de su parte para facilitar el desarrollo de este elemento de riqueza y de civilización en la república, ya simplificando los requisitos que para él se exigen por las leyes vigentes, ya moderando sus actuales gravámenes. Una de las medidas que con el mismo objeto se propone dictar, es la de establecer en las costas del golfo y del pacífico, algunos puertos de depósito, con la facultad de reexportar las mercancías, cuando así convenga a los interesados, como se practica en todos los países donde hay puertos de esta clase.

Las diferentes leyes que hasta ahora se han expedido sobre clasificación de rentas, para señalar las que pertenecen a los estados y al gobierno general, adolecen del defecto de no descansar en una base segura que marque bien la separación de unas y otras, porque más que la naturaleza de los impuestos se ha atendido a sus productos, lo cual ha dado lugar, por otra parte, a cuestiones y disgustos que deben evitarse entre las autoridades del centro y de los estados. Por estas razones y para fijar sobre un principio de justicia conveniencia notorias la perfecta separación de las rentas de los estados y del centro, el gobierno cree que debe adoptarse, como base invariable, la de que todos los impuestos

directos sobre las personas, las propiedades, los establecimientos de giro o industria, las profesiones y demás objetos imponibles, pertenecen a los primeros, y los indirectos al segundo. La razón fundamental de esta separación no puede ser más clara y perceptible, porque ella se apoya en el principio cierto de que sólo el gobierno supremo, que es quien atiende a los gastos y obligaciones de la nación, es también quien tiene el derecho de recaudar impuestos que graven en general a todos sus habitantes, mientras que los de los estados no lo tienen sino para gravar a los de sus respectivos territorios, supuesto que sólo atienden a los gastos de éstos. Además de esta razón, hay otras muchas de conveniencia general que sin duda comprenderá todo aquel que examine detenidamente la cuestión, y también es fácil comprender que sólo adoptando este pensamiento, es como los estados se verán realmente libres del poder del centro en materia de recursos, que es la base de la libertad en todos los demás ramos de su administración interior. Adoptando este sistema, no habrá ya tampoco la obligación, por parte de los estados, de contribuir con un contingente de sus rentas para los gastos del gobierno general

Uno de los más graves males que hoy sufre el tesoro de la nación, a consecuencia de las disposiciones del gobierno español durante el régimen colonial y del desorden con que posteriormente se ha abusado de ellas, es esa multitud de pensionistas de los ramos civil y militar, que pretenden vivir sobre el erario, con los títulos de retirados, cesantes, jubilados, viudad y otras denominaciones. El tamaño a que progresivamente ha llegado este mal y las perniciosas consecuencias que a cada paso está produciendo, exigen un pronto remedio, y éste no puede ser otro que el de capitalizar de una vez esos derechos, que bien o mal adquiridos, no pueden desconocerse, siempre que hayan sido otorgados conforme a las leyes y por autoridades competentes. El gobierno, pues, se propone proceder sin demora a la capitalización, no ya sólo de los derechos de cuantos pensionistas existen en los ramos civil y militar, sino también de los empleados que resulten excedentes en virtud del nuevo arreglo que se haga en las oficinas de uno y otro ramo, y aun de los de aquellos que conforme a las leyes que regían antes de la de mayo de

1852, tengan los individuos que queden empleados en dichas oficinas, para cortar así el mal, de modo que no pueda reaparecer jamás. Esta capitalización será representada por títulos que llevarán el nombre de títulos de capitalización, y se expedirán según las bases y con las circunstancias y requisitos que fijará una ley.

Extinguido por esa medida el sistema de los descuentos que sufrían los empleados y militares en sus respectivos sueldos, con la mira de asegurar una pensión casi siempre ilusoria para su vejez, o un auxilio para su familia en caso de muerte, podrán en lo sucesivo, unos y otros, conseguir, con mayor seguridad, aquel resultado, depositando sus economías en las cajas de ahorros y de socorros mutuos que sin duda se establecerán en toda la república, teniendo el gobierno, como tiene, en efecto, la resolución de favorecer a esos establecimientos y a los fondos que en ellos se reúnan, con todas las franquicias que estén a su alcance. Estos establecimientos, además de ser un medio muy eficaz para asegurar el patrimonio de las familias de los empleados, así como el de todas las clases de escaso recursos, producirán a la sociedad inmensas ventajas bajo otros aspectos, porque los capitales acumulados sucesivamente en ellos servirán para la ejecución de multitud de empresas útiles y provechosas para toda la nación.

La enajenación de las fincas y capitales del clero que, según lo ya dicho en otro lugar, deberán ser declarados propiedad de la nación, se hará admitiendo en pago de tres quintas partes en títulos de capitalización o de deuda pública interior o exterior, sin distinción alguna, y las dos quintas partes restantes en dinero efectivo, pagadero en abonos mensuales distribuidos en 40 meses a fin de que la adquisición de esos bienes pueda hacerse aun por aquellas personas menos acomodadas dando los compradores o redentores, por la parte de dinero efectivo, pagares a la orden del portador, con hipoteca de la finca vendida, o de, aquella que reconocía el capital redimido y entregando la parte de títulos o bonos en el acto de formalizarse el contrato de venta o redención.

También se aplicarán a la amortización de la deuda interior y exterior los terrenos baldíos o nacionales que existen actualmente en la república, enlazando estas operaciones con proyectos de colonización.

El gobierno cree que, aplicados prácticamente estos dos grandes medios de amortización para todas las obligaciones pendientes del erario, desaparecerá una gran parte de los títulos de capitalización, así como de la deuda pública en general. Respecto de la deuda exterior y de la que se halla reducida a convenciones diplomáticas, el gobierno procurará con empeño su extinción, ya con la enajenación de los bienes nacionales, ya con la de terrenos baldíos; pero si esto no se lograra, seguirá respetando, como lo hace hoy, lo pactado con los acreedores, entregándoles puntualmente la parte asignada al pago de intereses y amortización de capitales, porque tiene la convicción de que sólo de esta manera podrá la nación ir recobrando el crédito y buen nombre que ha perdido por no observar fielmente esa conducta.

Para completar las reformas mas urgentes respecto de la Hacienda nacional, y como quiera que por la realización de los pensamientos ya indicados, llegará a verificarse el deseado arreglo de este importante ramo de la administración pública, es indispensable que al mismo tiempo se proceda también al de sus oficinas y empleados; y esta operación tan llena de en otras épocas, se encontrará ahora facilitada por la capitalización de todos los empleados excedentes, cuyos derechos y aspiraciones formaban aquellos tropiezos. Sobre este punto, el gobierno, tiene la idea de disminuir el número de oficinas y empleados a lo puramente necesario, ni más ni menos, simplificando cuanto sea posible el actual sistema de contabilidad. Respecto a dotaciones, se propone adoptar el sistema del tanto por ciento en todas las oficinas recaudadoras, y en las de pura contabilidad, el de dotar los empleos con sueldos que estén en relación con las necesidades comunes de la vida en nuestras poblaciones, porque sólo así se podrán tener pocos y buenos empleados. Para la provisión de los empleos, el gobierno atenderá, sobre todo a la aptitud y honradez y no al favor o al ciego espíritu de partido, que tan funesto han sido y serán siempre en la administración de las rentas públicas.

En el ramo de guerra, el gobierno se propone arreglar al ejército de manera que, mejorado en su personal, y destruidos los vicios que se notan en su actual organización, pueda llenar dignamente su misión.

La guardia nacional es una de las instituciones de que el gobierno cuidará, porque comprende que ella es también el sostén de las libertades públicas y, por lo mismo, procurará con empeño que se organice del modo más a propósito para corresponder cumplidamente a su objeto.

En cuanto a la marina, careciendo México de todos los elementos que se necesitan para formarla, y estando ya bien demostrado por la experiencia que los gastos hechos en este ramo constituyen un verdadero despilfarro, cree el gobierno que todas nuestras fuerzas navales en ambas deben reducirse, por ahora, a unos pequeños buques armados, cuyo principal objeto sea el de servir de resguardos y correos marítimos.

Acerca de los diversos ramos de que está encargado el ministerio de Fomento, como quiera que todos ellos tienden al progreso material de la sociedad, el gobierno actual se propone emplear todos los medios que estén en su posibilidad para atender como merece esta parte de la administración pública.

Los caminos generales que dependen directamente del gobierno exigen, no solamente que se hagan desde luego obras importantes para ponerlos en buen estado, sino un cuidado incesante para conservarlos bien en lo sucesivo. A fin de conseguir el primero de estos objetos, cree el gobierno que debe abandonarse el sistema de ejecutar trabajos por los agentes del mismo gobierno, y adoptarse el de contratos con empresas particulares, limitándose a cuidar de su exacto cumplimiento, por los ingenieros que intervendrán en las obras y vigilarán sobre su ejecución. En cuanto a los caminos vecinales, aunque ellos están bajo la inmediata dirección de los gobiernos de los estados, el gobierno general tomará empeño en que se mejoren los que actualmente existen, y en que se abran otros nuevos, auxiliándolo por su parte en cuanto pueda, facilitar así el aumento de nuevas vías de comunicación, que como las arterias en el cuerpo humano, son las que han de dar vida y movimiento a nuestro desierto país.

Respecto de ferrocarriles, debe procurarse, a toda costa, que con cuanta brevedad sea posible se construya el que ya está proyectado desde Veracruz a uno de los puertos del mar pacífico, pasando por México; y como ésta es una obra de incalculable importancia para el porvenir de la

república, no hay esfuerzo que el gobierno no dispuesto a hacer para acelerar su ejecución y allanar las dificultades que a ella se oponen. Además, para promover eficazmente que se hagan otros caminos de hierro en diversos puntos, y sacar estas empresas de las manos de los arbitristas que han estado especulando con los títulos o concesiones parciales hechas por el gobierno para determinadas líneas, se abandonará ese sistema de decretos especiales sobre esta materia y se expedirá una ley que sirva de regla general para todas las vías de esta clase que puedan construirse en el país, haciéndose en ellas las concesiones más amplias y generosas, a fin de estimular así a los capitales nacionales y extranjeros a entrar en esas útiles especulaciones.

Sobre obras públicas de utilidad y ornato, el gobierno procurará activar la conclusión de todas aquellas que se encuentren comenzadas y la ejecución de otras, porque está convencido de que así cumplirá uno de los deberes que hoy tiene todo gobierno en un pueblo civilizado. Entre las que por concluirse, atenderá de preferencia a las penitenciarías de Guadalajara, Puebla y Morelia, abandonadas mucho tiempo ha por los trastornos políticos y cuya terminación ha de influir tan eficazmente en la mejora de nuestro sistema penal y carcelario, que es una de las grandes necesidades de la república, para atender bien a los trabajos de los caminos y a la ejecución de las obras públicas, se organizará en el ministerio de Fomento un cuerpo de ingenieros civiles, que servirá también para todas las comisiones que el gobierno le encargue

La inmigración de hombres activos e industriosos de otros países, es, sin duda una de las de la república, porque del aumento de su población depende no ya únicamente el progresivo desarrollo de su riqueza y el consiguiente bienestar interior, sino también la conservación de su nacionalidad. Por estas razones el gobierno se propone trabajar muy empeñosamente en hacer la efectiva; y para que ella se ejecute del modo que es conveniente, mas que en formar o de colonización, con estériles ofrecimientos de terrenos y excepciones más o menos amplias a los colonos, cuidará de allanar las dificultades prácticas que se oponen a su ingreso y a su permanencia en el país, estas dificultades consisten principalmente en la falta de ocupación inmediata y lucrativa para los

nuevos colonos, y en la seguridad que se encuentra en nuestros en nuestros y aun en nuestras mismas poblaciones. Para hacer desaparecer este ultimo obstáculo, ya queda indicada en otro lugar la resolución de organizar buena policía preventiva y de seguridad; y para destruir el primero, el gobierno, por sí, y estimulando a los hombres acaudalados y especuladores, hará que se emprendan trabajos públicos y privados, de esos que, como los caminos, canales y otros de diversa naturalezas, demandan muchos brazos para que vengan a emplearse en ellos multitud de emigrados, los cuales, una vez establecidos por cierto tiempo en la república, se radicarán en ella, para dedicarse a algún género de ocupación o industria, y atraerán sucesivamente, con su ejemplo y con sus invitaciones, a otros muchos individuos y familias de sus respectivos países. Además, se harán desde luego arreglos con algunos propietarios de vastos terrenos en la parte central y más poblada de la república, para que por su propio interés, y por el bien general de la nación, cedan algunos a los emigrados que vengan a establecerse en ellos, celebrando al efecto contratos de venta o arrendamiento, mutuamente provechosos. Sólo con estas y otras medidas de igual naturaleza, con la consolidación de la paz pública, con el arreglo de la administración de justicia, con la libertad de cultos y con las facilidades que al mismo tiempo debe dar el gobierno para la traslación de los emigrados a nuestros puertos, es como se conseguirá que vaya aumentándose y mejorándose prontamente nuestra población, porque mientras que no se obre así, el negocio de la colonización continuará siendo, como lo ha sido 38 años ha, un motivo de vana declamación para todos los traficantes políticos que brotan de nuestras revueltas, y que con el único objeto de embaucar a la nación, le hablan siempre de sus más graves males, sin tener la inteligencia ni la voluntad que se requieren para remediarlos.

Otra de las grandes necesidades de la república es la subdivisión de la propiedad territorial; y aunque esta operación no puede llegar a hacerse en la extensión que es de desear, sino por los estímulos naturales que produzca la mejora progresiva que irá experimentando nuestra sociedad, a consecuencia de las reformas que en ella tienen que ejecutarse, así como de las mejoras de sus actuales vías de comunicación, y del aumento

de su población y consumo, el gobierno procurará allanar desde luego el grande obstáculo que para tal subdivisión presentan las leyes que rigen sobre hipotecas de fincas rústicas, expidiendo una nueva ley por la cual se faculte a los propietarios de estas para subdividirlas en las fracciones que les convengan, a fin de facilitar su venta, distribuyéndose proporcionalmente, en casos, el valor de la hipoteca que tenga cada finca entre las partes en que se subdivida. Además de esta medida, que ha de contribuir eficazmente a fraccionar la propiedad territorial, con provecho de toda la nación, el gobierno promoverá también con los actuales dueños de grandes terrenos el que por medio de ventas o arrendamientos, recíprocamente ventajosos, se mejore la situación de los pueblos labradores.

Respecto de los negocios en que el gobierno general tiene que entender acerca de la agricultura, de la industria fabril, de las artes, del comercio, de medios de transporte y, en general, de todo género de trabajo u ocupación útil a la sociedad, la actual administración dará a esos objetos cuanta protección esté a su alcance, obrando en ello siempre con la mira de favorecer su incremento y progresivo desarrollo, bien convencido, como lo está de que proteger a ramos es trabajar por la prosperidad de la nación, favoreciendo y aumentando por ese medio el número de intereses legítimos que se identifican con la conservación del orden público.

En la formación de la estadística, el gobierno general, obrando de acuerdo con el de los estados, reunirá constantemente cuantos informes le posibles, para conocer bien el verdadero estado que guarda la nación en todos sus ramos; y no parece necesario recomendar la importancia de este trabajo, porque nadie ignora que, sin conocimientos, es imposible que un gobierno proceda con acierto en sus determinaciones. Estos datos se publicarán periódicamente por medio de la prensa, porque su conocimiento no importa únicamente al gobierno, sino a todos y a cada uno de los individuos de la sociedad.

Tales son, en resumen, las ideas de la actual administración sobre la marcha que conviene seguir, para afirmar el orden y la paz en la república, encaminándola por la senda segura de la libertad y del

progreso, a su engrandecimiento y prosperidad; y al formular todos sus pensamientos del modo que aquí los presenta, no cree hacer más que interpretar fielmente los sentimientos, los deseos y las necesidades de la nación.

En otro tiempo, podría acaso haberse estimado imprudente la franqueza con que el gobierno actual manifiesta sus ideas para resolver algunas de las graves cuestiones que ha tanto tiempo agitan a nuestra desgraciada sociedad; pero hoy que el bando rebelde ha desafiado descaradamente a la nación, negándole hasta el derecho de mejorar su situación; hoy que ese mismo bando, dejándose guiar únicamente por sus instintos salvajes para conservar los errores y abusos en que tiene fincado su patrimonio, ha atropellado los más sagrados derechos de los ciudadanos, sofocando toda discusión sobre los interés públicos, y calumniando vilmente las intenciones de todos los hombres que no se prestan a acatar su brutal dominación; hoy que ese funesto bando ha llevado ya sus excesos a un extremo de que no se encuentra ejemplo en los anales del más desenfrenado despotismo, y que con insolente menosprecio de los graves males que su obstinación está causando a la sociedad, parece resuelto a continuar su carrera de crímenes y maldades, el gobierno legal de la república, lo mismo que la numerosa mayoría de los ciudadanos cuyas ideas representa, no pueden sino ganar en exponer claramente a la faz del mundo entero cuáles son sus miras y tendencias.

Así logrará desvanecer victoriosamente las torpes imputaciones con que a cada paso procuran desconceptuarlo sus contrarios, atribuyéndole ideas disolventes de todo orden social. Así dejará ver a todo el mundo que sus pensamientos sobre todos los negocios relativos a la política y a la administración pública, no se encaminan sino a destruir los errores y abusos que se oponen al bienestar de la nación, y así se demostrará, en fin, que el programa de lo que se intitula el partido liberal de la república, cuyas ideas tiene hoy el gobierno la honra de representar, no es la bandera de una de esas facciones que en medio de las revueltas intestinas aparecen en la arena política para trabajar exclusivamente en provecho de los individuos que la forman, sino el símbolo de la razón,

del orden, de la justicia y de la civilización, a la vez que la expresión franca y genuina de las necesidades de la sociedad.

Con la conciencia del que marcha por un buen camino, el gobierno actual se propone ir dictando, en el sentido que ahora manifiesta, todas aquellas medidas que sean más oportunas para terminar la sangrienta lucha que hoy aflige a la república, y para asegurar, en seguida, el sólido triunfo de los buenos principios. Al obrar así, lo hará con la ciega confianza que inspira una causa tan santa como la que está encargado de sostener; y si por desgracia de los hombres que hoy tienen la honra de personificar como gobierno el pensamiento de esa misma causa, no lograsen conseguir que sus esfuerzos den por resultado el triunfo que ella ha de alcanzar un día infaliblemente, podrán consolarse siempre con la convicción de haber hecho lo que estaba de su parte para lograrlo; y cualquiera que sea el éxito de sus afanes, cualesquiera que sean las vicisitudes que tengan que sufrir en la prosecución de su patriótico y humanitario empeño, creen al menos tener derecho para que sean de algún modo estimadas sus buenas intenciones y para que todos los hombres honrados y sinceros que, por fortuna, abundan todavía en nuestra desgraciada sociedad, digan siquiera al recordarlos: esos hombres deseaban el bien de su patria y hacían cuanto les era posible para obtenerlo.

Heroica Veracruz, julio 7 de 1859

Benito Juárez
Manuel Ruiz

Melchor Ocampo
Miguel Lerdo de Tejada

LEY DE NACIONALIZACIÓN DE BIENES ECLESIASTICOS Y DE SEPARACION DE LA IGLESIA Y EL ESTADO

Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública

El Excelentísimo [Excmo.] señor Presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes hago saber, que con acuerdo unánime del consejo de ministros y

considerando:

Que el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir el sustraerse de la dependencia a la autoridad civil.

Que cuando ésta ha querido, favoreciendo al mismo clero, mejorar sus rentas, el clero, por sólo desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aun el propio beneficio.

Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos del clero sobre obvenciones parroquiales, quitar a éste la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus emolumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes que sujetarse a ninguna ley.

Que como la resolución mostrada sobre esto por el metropolitano, prueba que el clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin que la ley civil arregle sus cobros y convenios con los fieles.

Que si otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta revolución contra el soberano.

Que dilapidando el clero los caudales que los fieles le habían confiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió en desconocimiento de la legítima y negando que la república pueda constituirse como mejor crea que a ella convenga.

Que habiendo sido inútiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie por terminar una guerra que va arruinando la república, el dejar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recursos de que tan gravemente abusan sería volverse su cómplice y

Que es un imprescindible deber poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la sociedad,

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos y acciones en que consisten, el nombre y aplicación que hayan tenido.

Artículo 2º.- Una ley especial determinará la manera y forma de hacer ingresar al tesoro de la nación todos los bienes de que trata el artículo anterior.

Artículo 3º.- Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquiera otra.

Artículo 4º.- Los ministros del culto, por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio, podrán recibir las ofrendas que se les ministren, y acordar libremente con las personas que los ocupen la indemnización que deban darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrán hacerse en bienes raíces.

Artículo 5º.- Se suprime en toda la república las órdenes de los religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así como también todas las archicofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comunidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias.

Artículo 6º.- Queda prohibida la fundación o erección de nuevos conventos de regulares, de archicofradías, cofradías, congregaciones o hermandades religiosas, sea cual fuere la forma o denominación que quiera dárseles. Igualmente queda prohibido el uso de los hábitos o trajes de las órdenes suprimidas.

Artículo 7º.- Quedando por esta ley los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas reducidos al clero secular, quedarán sujetos como éste, al ordinario eclesiástico respectivo, en lo concerniente al ejercicio de su ministerio.

Artículo 8º.- A cada uno de los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas que no se oponga a lo dispuesto en esta ley, se le ministrará por el gobierno la suma de 500 pesos por una sola vez. A los mismos eclesiásticos regulares, que por enfermedad o avanzada edad estén físicamente impedidos para el ejercicio de su ministerio, a más de los 500 pesos, recibirán un capital, fincado ya, de 3,000 pesos para que atienda a su congrua sustentación. De ambas sumas podrán disponer libremente como cosa de su propiedad.

Artículo 9º.- Los religiosos de las órdenes suprimidas podrán llevarse a sus casas los muebles y útiles que, para su uso personal, tenían en el convento.

Artículo 10.- Las imágenes, paramentos y vasos sagrados de las iglesias de los regulares suprimidos, se entregarán por formal inventario a los obispos diocesanos.

Artículo 11.- El gobernador del distrito y los gobernadores de los estados, a pedimento del muy reverendo [M. R.] arzobispo y de los reverendos [R. R.], obispos diocesanos, designarán los templos de los regulares suprimidos que deban quedar expeditos para los oficios divinos, calificando previa y escrupulosamente la necesidad y utilidad del caso.

Artículo 12.- Los libros, impresos, manuscritos, pinturas, antigüedades y demás objetos pertenecientes a las comunidades religiosas suprimidas, se aplicarán a los museos, liceos, bibliotecas y otros establecimientos públicos.

Artículo 13.- Los eclesiásticos regulares de las órdenes suprimidas, que después de 15 días de publicada esta ley en cada lugar, continúen usando el hábito, o viviendo en comunidad, no tendrán derecho a percibir la cuota que se les señala en el artículo 8º y si pasado el término de 15 días que fija este artículo, se reunieren en cualquier lugar para aparentar que siguen la vida común, se les expulsará inmediatamente fuera de la república.

Artículo 14.- Los conventos de religiosas que actualmente existen, continuarán existiendo y observando el reglamento económico de sus claustros. Los conventos de estas religiosas que estaban sujetos a la jurisdicción espiritual de alguno de los regulares suprimidos, quedan bajo la de sus obispos diocesanos.

Artículo 15.- Toda religiosa que se exclaustre, recibirá en el acto de su salida la suma que haya ingresado al convento en calidad de dote, ya sea que proceda de bienes parafernales, ya que la haya adquirido de donaciones particulares, o ya, en fin, que la haya obtenido de alguna fundación piadosa. Las religiosas de órdenes mendicantes que nada hayan ingresado a sus monasterios recibirán, sin embargo, la suma de 500 pesos en el acto de su exclaustación. Tanto de la dote como de la pensión podrán disponer libremente como de cosa propia.

Artículo 16.- Las autoridades políticas o judiciales del lugar, impartirán a prevención toda clase de auxilios a las religiosas exclaustradas, para hacer efectivo el reintegro de la dote o el pago de la cantidad que se les designa en el artículo anterior.

Artículo 17.- Cada religiosa conservará el capital que en calidad de dote haya ingresado al convento. Este capital se le afianzará en fincas rústicas o urbanas por medio de formal escritura, que se otorgará individualmente a su favor.

Artículo 18.- A cada uno de los conventos de religiosas se dejará un capital suficiente, para que con sus réditos se atienda a la reparación de fábricas, y gastos de las festividades de sus patronos, natividad de nuestro señor Jesucristo [N. S. J. C.], semana santa, corpus, resurrección y todos santos, y otros de comunidad. Las superioras y capellanes de los conventos respectivos, formarán los presupuestos de estos gastos, que

presentados dentro de 15 días de publicada esta ley, al gobernador del distrito o a los gobernadores de los estados respectivos para su revisión y aprobación.

Artículo 19.- Todos los bienes sobrantes de dichos conventos ingresarán al tesoro general de la nación, conforme a lo prevenido en el artículo 1º. de ley.

Artículo 20.- Las religiosas que se conserven en el claustro, pueden disponer de sus respectivas dotes, testando libremente en la forma que para toda persona lo prescriben las leyes. En caso de que no hagan testamento o de que no tengan ningún pariente capaz de recibir la herencia *ad intestato*, la dote ingresará al tesoro público.

Artículo 21.- Quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados en los conventos de señoras religiosas. Las actuales novicias no podrán profesar, y al separarse del noviciado se les devolverá lo que hayan ingresado al convento.

Artículo 22.- Es nula y de ningún valor toda enajenación que se haga de los bienes que se mencionan en esta ley, ya sea que se verifique por algún individuo del clero, o por cualquiera persona que no haya recibido expresa autorización del gobierno constitucional. El comprador, sea nacional o extranjero, queda obligado a reintegrar la cosa comprada, o su valor, y satisfará además una multa de cinco por ciento regulado el valor de aquélla. El escribano que autorice el contrato será depuesto e inhabilitado perpetuamente en su ejercicio público, y los testigos, tanto de asistencia como instrumentales, sufrirán la pena de uno a cuatro años de presidio.

Artículo 23.- Todos los que directa como indirectamente se opongan, o de cualquiera manera enerven el cumplimiento de lo mandado en esta ley, serán, según que el gobierno califique la gravedad de su culpa, expulsados fuera de la república o consignados a la autoridad judicial. En este caso serán juzgados y castigados como conspiradores. De la sentencia que contra estos reos pronuncien los tribunales competentes, no habrá lugar al recurso del indulto.

Artículo 24.- Todas las penas que impone esta ley se harán efectivas por las autoridades judiciales de la nación o por las políticas de los estados, dando éstas cuenta inmediata al gobierno general.

Artículo 25.- El gobernador del distrito y los gobernadores de los estados a su vez consultarán al gobierno las providencias que estimen convenientes al puntual cumplimiento de esta ley.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

Dado en el Palacio del gobierno general en Veracruz, a 12 de julio de 1859.

Benito Juárez

Melchor Ocampo,
Presidente del gabinete, ministro de
Gobernación, encargado del despacho de
Relaciones y del de Guerra y Marina

Licenciado [Lic.] Manuel Ruiz,
ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos
e Instrucción Pública

Miguel Lerdo de Tejada,
ministro de Hacienda y Encargado del
Ramo de Fomento

Y lo comunico a vuestra excelencia [V. E.] para su inteligencia y cumplimiento.

Palacio del Gobierno General en Veracruz, julio 12 de 1859

Es copia, México, abril 30 de 1861

Miguel Ruiz

SE EXPLICA LA NACIONALIZACIÓN DE BIENES
ECLESIAÍSTICOS Y LA SEPARACION DE LA
IGLESIA Y EL ESTADO

Excmo. señor:

Tengo el honor de acompañar a V. E. ejemplares del supremo decreto que en esta fecha se ha servido expedir el Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, de acuerdo con el consejo unánime de sus ministros.

La importancia de este decreto, da lugar de que al remitirlo a V. E. me extienda por acuerdo del mismo Excmo. señor Presidente, a indicarle algunos de los graves y poderosos motivos que el gobierno ha tenido para expedirlo, y las principales razones en que se fundan los artículos relativos a la reforma que contiene, para que V. E. más íntimamente convencido de todo, lo ponga en práctica con la energía y justificación que corresponde.

Treinta y ocho años ha, señor Excmo., que el esfuerzo heroico de nuestros libertadores rompió para siempre la cadena de oprobio que nos ligaba al trono de Carlos V, y si atentamente registramos las páginas tristes de nuestra historia en este largo período, no podremos señalar un hecho, en la continua y dolorosa lucha que la razón y la justicia han sostenido contra la violencia y la fuerza, que no esté marcado con caracteres de sangre, escritos por la mano del clero mexicano. Éste, valiéndose de su influjo sobre las conciencias, derrochando las ofrendas destinadas al culto y al alivio de la indigencia y pagando con ellas la perfidia y la traición, conmovió por primera vez los cimientos de nuestra naciente sociedad, allá en el año de 1822, y selló con sangre la conquista de sus privilegios y preponderancia. En 1833, en 1836, en 1842, en 1847, el clero y siempre el clero aparece insurreccionando al país, intentando

de diversas maneras contra la autoridad, oprimiendo al pueblo y derramando su en los combates fratricidas que arteramente preparaba.

En 1852 se afianzó del poder público mientras sirvió a sus miras, y él mismo impulsó el movimiento que espantó a su caudillo, que lo hizo huir abrumado por el grito de su conciencia, y horrorizado con el rastro de sangre que dejaba marcado el período de su administración.

En 1856 combinó la más formidable de las revoluciones que hasta entonces había preparado, y V. E. no olvidará que en los campos de Ocotlán y en las calles de la ciudad de Puebla se derramó a torrentes la sangre de nuestros hermanos, lanzados al combate por los ministros de Dios de la paz.

Últimamente en 1857, después de mantener en constante inquietud a la república, valiéndose aun del vandalismo y audacia de espúreos mexicanos y de aventureros españoles, se elevó hipócritamente hasta las regiones del poder. Allí explotó la debilidad y la poca fe del encargado del poder público, lo obligó a ser perjuro, y lo comprometió a arrojarse al fango del baldón y de la ignominia, manchando con este sello oprobioso la frente del mismo hombre que hasta entonces estaba cubierto de gloria.

Por medio de semejante infamia combinó los elementos que necesitaba para conspirar, y descansando en la impunidad que le ofreciera la complicidad del primer magistrado de la república, dio a la nación el golpe formidable que aún la tiene conmovida. Desde entonces, escandalosamente y sin disimulo, ha sostenido con los tesoros destinados a otro objeto, la fuerza armada que lanzó al combate. Desde entonces, olvidando lo sagrado de su ministerio y faltando a la conciencia de su deber, ha alentado el espíritu fanático de algunos ilusos, enseñándoles el funesto error de que, sosteniendo con las armas los fueros, los privilegios y los intereses materiales del clero, defendían un principio religioso. V. E. ha visto el sacrílego abuso que se ha hecho del confesionario y del pulpito, para propagar esta falsa doctrina, esencialmente contraria a la doctrina santa del cristianismo. V. E. ha sentido los formidables efectos de esta conducta impía, y aún verá el suelo de ese estado manchado con la sangre de los mexicanos, profusamente derramada en casi todo el territorio nacional. Acaso no hay un solo pueblo donde la reacción no

haya sacrificado alguna víctima. Aun están insepultos en muchos lugares los huesos descarnados de nuestros hermanos, y en Tacubaya y otros sitios todavía humea la sangre de ilustres víctimas, cuyos nombres eran para la sociedad un timbre de honor, un título de gloria para la humanidad.

De todos estos males terribles, de todos estos fúnebres sucesos, que no han permitido la estabilidad de ningún gobierno, que han empobrecido y empeñado a la nación, que la han detenido en el camino de su progreso, y que más de una vez la han humillado ante las naciones del mundo, hay un responsable, y este responsable es el clero de la república. El ha fomentado este constante malestar con el gran elemento de los tesoros que la sociedad confió a su cuidado, y que ha malversado en la serie de tantos años, con el fin de sobreponerse y aun de oprimir a la nación y a los legítimos depositarios de su poder. Ha sido inquieto, constantemente ha maquinado en favor de sus privilegios, porque ha contado con recursos suficientes para premiar la traición y el perjurio, para sostener la fuerza armada y seducir algunos miserables que se han dado a sí mismos el derecho de gobernar a la república. Es, pues, evidente y de todo punto incuestionable, que segando la fuente de los males, éstos desaparecerán, como desaparece el efecto luego que cesa la causa que lo produce. Cuando el clero, siguiendo las huellas de su divino maestro, no tenga en sus manos los tesoros de que ha sido tan mal depositario; cuando por su conducta evangélica tenga que distinguirse en la sociedad, entonces y sólo entonces, imitará las virtudes de aquél y será lo que conforme a su elevado carácter debe de ser; es decir, el padre de los creyentes, y la personificación de su providencia en la tierra.

Es tan innegable esta verdad, señor Excmo., que las naciones más dispuestas a favorecer los intereses temporales del clero, se han visto obligadas, por la necesidad de su propia conservación, a reprimir sus abusos, quitando de sus manos los bienes con que los sostenían. La España misma se puede citar como un perentorio ejemplo. Tuvo un tiempo de revueltas intestinas, acaso menos aciago que el que nosotros atravesamos, y sólo alcanzó los beneficios de la paz, cuando fue bastante enérgica para reprimir los avances de su clero y el despilfarro de los

bienes que administraba. Entre nosotros está demostrado por una bien larga y dolorosa experiencia, que mientras no adoptemos el mismo remedio, nos aquejarán constantemente las cruentas desgracias que ya nos precipitan al abismo.

Sensible es que nada haya bastado para satisfacer las exigencias del clero de la república y que por el solo deseo de preponderar y de deprimir al poder supremo de la nación, haya comprometido y puesto en inminente riesgo, hasta los principios de la religión que predica con la palabra, pero que nunca ha enseñado con el ejemplo.

Cuando la autoridad suprema de la nación ha dictado algunas providencias en beneficio del clero, la circunstancia sola de emanar de la autoridad civil, ha bastado para que las resista, ha sido suficiente para que se ponga en contradicción abierta con ellas, aun cuando sólo se haya tratado de estrecharlo a cumplir los cánones y determinaciones dadas por la Iglesia; y como si nada debiera esperar de la razón, de la justicia y hasta del buen sentido, en vez de seguir la senda trazada por el divino maestro se ha lanzado, con infracción de su propia doctrina, al campo de las revoluciones. Esta conducta antievangélica, este comportamiento indigno de los ministros de cristo obediente y humilde, los ha puesto en evidencia ante los ojos de todos los hombres.

Ya no hay quien de buena fe crea que se defienda la religión cuando se sostienen los abusos del clero.

Toda la nación se levanta denunciando a éste, como el principal autor de sus lamentables desgracias, y a los tesoros de que ha dispuesto hasta hoy, como al recurso abundante que ha sostenido la fuerza armada que la reacción emplea para oprimirla.

De todas partes se lanza un grito de desesperación, reclamando del gobierno las medidas convenientes para salvar la triste situación a que hemos llegado, y el gobierno, consecuente con su deber, ha escuchado ese grito. Por todas partes la mano extenuada, pero poderosa del pueblo, que sufre por la tiranía de la fuerza, está señalando al autor de su infortunio y al elemento con que se le procura, y el gobierno no debe ser indiferente a tan solemne designación.

En vano esperó el gobierno que el clero, aunque enemistado con la paz pública, abjurara sus errores, conociera su propia conveniencia, respetara el principio de la justicia, y horrorizado por los estragos formidables de su propia obra y comprometido por el estímulo de su conciencia, acatará los derechos de la autoridad suprema y pusiera término a su intervención en la contienda actual, contienda funesta para la nación; pero muy más funesta para sus intereses. Más en vez de vislumbrar esperanza, todos los días se percibe claramente la constancia y el empeño con que lucha por conservar fueros, inmunidades, prerrogativas y derechos, que ya ninguna nación culta le tolera, y que en muchas expresamente le han retirado sus soberanos, por ser contrarios al espíritu de justicia y libertad que protege los fueros y derechos de la humanidad.

Por estas razones el gobierno constitucional se faltaría a si mismo y sería indigno de la ilimitada confianza con que la nación le honra, si por consideraciones indebidas, se dilatara algún tiempo en obsequiar su voluntad soberana. Todavía más, se haría cómplice de la reacción inutilizando los esfuerzos y los sacrificios solemnes que los verdaderos patriotas han hecho, tocando alguna vez hasta lo sublime del heroísmo, por afianzar perpetuamente en la república el ejercicio eminente y supremo de la autoridad civil en todo lo concerniente a la sociedad humana.

El gobierno, siguiendo el torrente de la opinión pública, manifiesta de mil maneras, consecuente con sus principios y llenando la conciencia de su deber, se ha visto obligado a pronunciar el hasta aquí contra los abusos, y a dictar como remedio eficaz para extirparlos de una vez, las providencias que V. E. verá en el decreto a que me referí al principio de esta nota.

Con la determinación de hacer ingresar al tesoro público de la república los bienes que sólo sirven para mantener a los que la destrozan, se alcanza el importante bien de quitar a la reacción el fondo de que se provee para oprimir, y esta medida de evidente justicia, hará que pronto luzca para México el día .de la paz.

Removida la causa esencial que por tantos años nos ha mantenido en perpetua guerra, es necesario quitar hasta el pretexto que alguna vez pueda dar ocasión a las cuestiones que han perturbado la paz de las familias y con ella la paz de la sociedad. De aquí la necesidad y la conveniencia de independer absolutamente los negocios espirituales de la Iglesia de los asuntos civiles del Estado. En esto hay, además, un principio de verdad y de justicia. La Iglesia es una asociación perfecta, y como tal no necesita del auxilio de las autoridades extrañas; está sostenida y amparada por sí misma y por el mérito de su divino autor. Así lo enseña el cristianismo; así lo sostiene el clero mexicano, ¿Para qué, pues, necesita de la autoridad temporal en materias de conciencia que sólo a ella le fueron encomendadas? ¿Y la autoridad civil, para qué necesita la intervención de la Iglesia en asuntos que no tienen relación con la vida espiritual? Para nada, señor Excmo.; y si hasta hoy, por razones que V. E. conoce, ha subsistido ese enlace que tan funestos resultados ha dado a la sociedad, es preciso que en lo adelante cada autoridad gire independientemente en la órbita de su deber, de modo que, bajo este concepto, el gobierno no intervendrá en la presentación de obispos, provisión de problemas y canonicatos, parroquias y sacristías mayores, arreglo de derechos parroquiales y demás asuntos eclesiásticos, en que las leyes anteriores a la que motiva esta circular, le daban derechos a la autoridad civil.

El gobierno, como encargado de atender al bien de la sociedad, y dispuesto a proteger a todos los habitantes de la nación que le confían sus destinos para mantener a cada uno en los límites de su deber, cuidará de todos con igual solicitud y justicia, y tanto amparará a los individuos de una asociación, como a los de cualquiera otra, a fin de que no se dañen entre sí, ni dañen a la sociedad. Sobre este punto V. E. seguirá en el estado de su mando el ejemplo del gobierno general.

Es evidente y está demostrado que el culto público se sostiene por la sociedad, que la munificencia de esta basta para su esplendor y que ninguna providencia de la autoridad civil reclamará este ramo. A falta de otro testimonio recordaré a V. E. la circular del ilustrísimo [Ilmo.] señor arzobispo expedida con motivo de la promulgación de la ley de 11 de

abril de 1857, que arregló el cobro de derechos y emolumentos parroquiales. Dejar este asunto en perfecta libertad para que los ministros y los fieles se arreglen convencionalmente es no sólo justo y debido, porque la retribución se proporcionara más exactamente a la clase de trabajo, sino también del especial agrado del clero, porque dócil y obediente a la voz paternal de sus prelados, ya ha puesto en práctica este método y ha experimentado sus benéficos resultados.

La extinción de los regulares era una necesidad tan apremiante, tan imperiosa para el estado como para la Iglesia. En la república y en la capital del mundo cristiano se dejaba sentir y conocer el peso de esta medida. Hubo un tiempo en que los regulares fueron benéficos a la sociedad, porque observando severamente sus estatutos, se consagraban a trabajos científicos que legaban a la humanidad; pero relajadas las constituciones monacales, desvirtuado entre los regulares el amor a las ciencias, sustituida la actividad antigua con el actual descanso, degeneró su beneficencia, y los soberanos de los pueblos civilizados y aun el mismo pontífice han secularizado instituciones, cuya época y objeto ha pasado. En la república más de una vez se ha pretendido, más de una vez el sumo pontífice se ha manifestado dispuesto a hacerlo. Consumar el deseo sin perjuicio de las personas, es una prueba de que se tiene voluntad de satisfacer una exigencia del tiempo y las circunstancias. Como V. E. verá, se atiende a las personas de un modo conveniente a su nuevo estado, y aun a la condición de su salud, para que nunca se reproche al gobierno con un acto de injusticia o de inhumanidad.

No militando las mismas razones para extinguir a las religiosas, ni siendo esta extinción una de las exigencias actuales, el gobierno se ha limitado a cerrar los noviciados de los conventos, respetando a las comunidades existentes. Con lo primero, se logra para la sociedad civil un número mayor de personas útiles, que mediante los tiernos vínculos de un amor honesto, formen una virtuosa familia, y con lo segundo, los cristianos gozarán los frutos de la oración en común, y las religiosas los que pretenden gozar en la vida ascética a que se consagraron. Sin embargo, ha cuidado de atenderlas debidamente, y ha declarado que sus dotes y pensiones les pertenecen en propiedad, para que de ellos puedan

disponer libremente y hacer a su vez la felicidad y ventura de alguna persona de su estimación o de algunos de sus parientes. Muy debido sería, y el Excmo. señor Presidente ha acordado lo prevenga a V. E., que de período en período, visite por sí, o haga visitar por persona de respeto y confianza en sus respectivos locutorios públicos, a las religiosas de los conventos que existan en ese estado, para que, impuesto de sus necesidades, les imparta cuanta protección les conceden las leyes.

Expuestas las principales razones que apoyan el decreto a que me he referido, descanso en que V. E. comprenderá su importancia y hará que se cumplan puntualmente cuantas prevenciones contiene. Satisfecho el gobierno de que ha llenado su deber y obsequiado el voto público, no teme ni aun los recuerdos de la posteridad; y si por acaso algunos ilusos quisieren desfigurar la rectitud de sus intenciones, confía en que la historia las juzgará con la misma severidad con que ha juzgado ya a los que lanzaron anatemas contra nuestros libertadores, y poco después han confesado su delirio y honrado la memoria de aquéllos.

Al comunicar a V. E. lo expuesto, cumpliendo así el acuerdo del Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, aprovecho la ocasión para renovarle las sinceras consideraciones de mi aprecio.

Dios y Libertad. Heroica Veracruz, julio 12 de 1859

(Manuel) Ruiz

Es copia, México, abril 30 de 1861.

Manuel Ruiz

COMUNICA A SANTACILIA LA EXPEDICIÓN DE LOS
PRIMEROS DECRETOS DE LAS LEYES
DE REFORMA

Veracruz, julio 12 de 1859

Sr. don Pedro Santacilia
(Nueva Orleáns)

Mi querido amigo:

Tengo el gusto de remitir a usted el decreto (que) acabo de expedir. Lo más importante que contiene, como verá usted, es la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa. Para mí estos puntos eran los capitales que debían conquistarse en esta revolución y si logramos el triunfo me quedará la satisfacción de haber hecho un bien a mi país y a la humanidad.

Remito a usted también el programa que he publicado, en que se ofrecen otras medidas que han de mejorar la condición de esta sociedad.

Deseo que se conserve con buena salud y que ordene lo que guste a su amigo afectísimo y seguro servidor que besa su mano [q. b. s. m.]

Benito Juárez

Aumento:

Es probable que pase el Sr. Lerdo a esa república y tal vez irá en este viaje del Tennessee.

REGLAMENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE NACIONALIZACIÓN

Excmo. señor:

El Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Benito Juárez, Presidente constitucional interino de la República, a los habitantes de ella, sabed:

Que con el objeto de que la enajenación de los bienes de que habla la ley de 12 del actual contribuya eficazmente a la subdivisión de la propiedad territorial y ceda en beneficio general de la nación, que es el gran fin de la reforma que ella envuelve, he tenido a bien decretar, con acuerdo unánime del gabinete, lo siguiente:

Artículo 1º.- La ocupación de los bienes que por la citada ley entran al dominio de la nación, se hará en el Distrito Federal por una oficina especial que al efecto establecerá el gobierno y en los estados por las jefaturas superiores de Hacienda, auxiliadas por las administraciones principales y colecturías de rentas en sus respectivos distritos.

Artículo 2º.- El día siguiente al de la publicación de esta ley en cada lugar donde existan algunos de dichos bienes, la primera autoridad política nombrará el comisionado o comisionados que crea necesarios, para que con un escribano o dos testigos procedan inmediatamente a recoger del procurador, síndico, administrador o mayordomo respectivos, las escrituras, libros de cuentas y demás documentos relativos a los intereses que han tenido a su cargo, en el estado en que se hallen, así como el numerario existente, haciendo el inventario y cortes de caja respectivos, que firmarán el comisionado, el procurador o síndico, mayordomo o administrador y el escribano o testigos.

Artículo 3º.- Si los procuradores, síndicos, mayordomos o administradores no quisieren firmar los inventarios y cortes de caja de que habla el artículo anterior o de cualquier modo rehusaren hacer la entrega que en él se previene, la primera autoridad política mandará aprehenderlos y ponerlos a disposición del juez de Hacienda para que los juzgue por su desobediencia a la ley e injusta detención de los bienes públicos. En los casos que expresa este artículo o en aquellos en que se oponga resistencia, procederá por sí sólo el comisionado con el escribano o testigos, pidiendo el auxilio de la policía o fuerza armada, siempre que fuere necesario.

Artículo 4º.- Los comisionados procederán sin interrupción, dando diariamente a la autoridad que los nombró noticia de lo que practiquen en el desempeño de su encargo; y tan luego como lo terminen, harán entrega de todo, con el inventario y cortes de caja, a la oficina respectiva de que habla el artículo 1º, la cual se hará cargo entonces de lo que reciba por cuenta de la nación, para obrar conforme a lo que esta ley dispone.

Artículo 5º.- Igualmente nombrará la primera autoridad política uno o más peritos, para que dentro del preciso término de ocho días formen planos de división en los edificios que ocupaban las comunidades suprimidas y los sometan a la aprobación de dicha autoridad. En estos planos se excluirán únicamente aquellos templos que se destinen; por el gobierno para que continúen empleándose en el servicio divino, conforme al artículo 14 de la repetida ley del 12 del actual, y una vez aprobados los planos de división, se valuará separadamente cada una de las fracciones que resulten.

Artículo 6º.- Hecho este avalúo, se venderán dichas fracciones en subasta pública, verificándose los remates en el Distrito Federal por el jefe de la oficina que establezca el gobierno o por otras personas que éste nombre al efecto, y en los estados por los jefes superiores de Hacienda, administradores o receptores de rentas.

Artículo 7º.- Para estos remates se publicarán avisos con términos de nueve días, señalando después de ese término tres días que se sucedan con el intervalo de uno en cada uno de ellos, para que se verifiquen las tres almonedas. Estos avisos se publicarán en la cabecera del partido en

que estén situados los edificios, con la designación clara y expresa de lo que ha de enajenarse, su avalúo y el lugar, días y horas en que han de celebrarse las tres almonedas, haciéndose la publicación en los lugares de costumbre y en el periódico oficial, si lo hubiere.

Artículo 8º.- En dichas almonedas se tendrán por buenas las posturas que ofrezcan una tercera parte del avalúo en dinero efectivo y otra tercera parte en créditos de la deuda nacional reconocida, cualquiera que sea su origen o denominación. La base de entregar a la tercera parte en dinero será inalterable y las pujas deberán hacerse únicamente sobre la parte que ha de darse en créditos, admitiéndose como mejor postura la ofrezca mayor cantidad de éstos.

Artículo 9º.- Desde la primera almoneda se hará el remate, si en ella hubiere postura admisible, y si no se presenta esta en las tres almonedas, el jefe de la oficina del Distrito Federal y los jefes de Hacienda o los administradores de rentas en los estados, aceptarán después en lo privado la primera postura admisible que se les presente.

Artículo 10.- El pago de los valores de los remates que se verifiquen con arreglo a los cuatro artículos anteriores, así en la parte de numerario como en la de créditos, deberá hacerse en el acto que se firme la escritura respectiva; pero también podrá el gobierno, en todos los casos en que lo juzgue conveniente, admitir que la parte de numerario quede reconociéndose sobre el mismo edificio o fracción que se enajena, por el término de cinco o nueve años, y con el rédito de seis por ciento anual. Sin embargo, de lo dispuesto en este artículo, se dará preferencia en las almonedas a las posturas en que se ofrezca exhibir de contado la parte de numerario, cuando estén en igualdad de precios, incluyendo la parte de créditos con las que pretendan quedar a reconocer a aquélla, La parte de créditos deberá en todos los casos exhibirse cuando se otorgue la escritura.

Artículo 11.- Todos los capitales que se reconozcan en favor del clero secular y regular, ya sea que procedan de imposiciones hechas antes de la ley de 25 de junio de 1856 o de las adjudicaciones, ventas convencionales o remates que en virtud de ella se hayan celebrado hasta la fecha de la publicación de esta ley, podrán ser redimidos por los

actuales censatarios en esta forma; tres quintas partes en títulos o créditos de la deuda nacional, cualesquiera que sean su origen y denominación y dos quintas partes en dinero efectivo, pagaderos en abonos mensuales y por partes iguales, durante 40 meses, contados desde la en que se haga el contrato de redención.

Artículo 12.- Para que dichos censatarios puedan disfrutar la gracia que se les concede en el artículo anterior, deberán ocurrir a la oficina de Hacienda respectiva, de las que se citan en esta ley, y antes de 30 días contados desde el de su publicación, a manifestar su voluntad de redimir la cantidad que reconozcan, entregando la parte de créditos correspondientes y una obligación de pagar la parte de numerario en los términos que expresa el mencionado artículo anterior.

Artículo 13.- Estas obligaciones serán al portador y conservarán la misma hipoteca del capital que ha de redimirse, haciéndose constar esta circunstancia en el documento y anotándose la escritura respectiva, la cual no se cancelará sino cuando se haga constar que ha sido cumplida en todas sus partes aquella obligación ante el jefe de la oficina de Hacienda respectiva, quien librará entonces la orden correspondiente para la cancelación.

Artículo 14.- En los lugares foráneos en donde no haya crédito de la deuda nacional, podrán los jefes de las oficinas de Hacienda a quienes corresponda, admitir una obligación de que serán entregados dentro de un término prudente, según la distancia, ya en la capital del estado a que pertenezcan o ya en la capital de la república, cuando aquélla vuelva al orden legal. Estas obligaciones se remitirán al jefe de Hacienda respectivo o a la oficina del Distrito Federal, para que sean recogidos o inutilizados los créditos en la forma que previene la ley.

Artículo 15.- Si transcurrieren los 30 días de que habla el artículo 12, sin que los actuales censatarios hayan ocurrido a hacer la redención de los capitales que reconocen, se tendrá por renunciado su derecho y se admitirá la redención al primero que la solicite dentro de los 10 días siguientes, subrogándose éste en lugar del erario. Para los efectos de artículo, la oficina especial del Distrito y las jefaturas superiores y demás oficinas de Hacienda encargadas de la ejecución de esta ley, publicarán

en los periódicos, si los hay, o en los lugares de costumbre, una relación de todas las imposiciones que deben redimirse en su respectiva demarcación, y cada semana publicarán también, del mismo modo, una noticia de las que durante ella se rediman. De ésta y de la otra se mandarán copias, por los conductos respectivos, al ministerio de Hacienda.

Artículo 16.- Los que, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se subroguen en lugar del erario, pagarán el capital que rediman en los mismos términos prevenidos para los actuales censatarios, con la sola diferencia de que su obligación, para cubrir la parte del numerario, deberá ser afianzada a satisfacción del jefe de la oficina de Hacienda respectiva.

Artículo 17.- Una vez transcurrido el plazo de los diez días, el jefe de la oficina especial del Distrito y los jefes de Hacienda, administradores o receptores de rentas en sus respectivas demarcaciones, procederán a vender en subasta pública, los capitales impuestos, observando para las almonedas las mismas prevenciones que contiene el artículo 7º. de esta ley.

Artículo 18.- En estas almonedas se tendrá por buena postura la que ofrezca entregar en numerario, en los plazos señalados en el artículo 11, las dos quintas partes del capital que se ponga en remate, y las otras tres quintas en créditos, debiendo hacerse las pujas sobre éstos y no sobre la parte de dinero efectivo.

Artículo 19.- Las obligaciones que sobre pago de numerario otorguen los que rematen capitales impuestos, conforme al artículo anterior, deberán ser afianzadas a satisfacción del jefe de la oficina de Hacienda respectiva, y la parte de créditos deberá exhibirse en el acto de otorgarse la escritura.

Artículo 20.- En la misma forma y términos que expresan los artículos anteriores, con la sola diferencia de que servirán de base para los remates, los avalúos o declaraciones hechas anteriormente para el pago de contribuciones, se procederá a vender, en subasta pública, todas las fincas que, con diversos títulos, ha administrado el clero regular y secular, y que a la fecha de la publicación de esta ley no hayan sido

desamortizadas porque no se haya formalizado ni pedido la adjudicación de ellas, conforme a la ley de 25 de junio de 1856.

Artículo 21.- En estas enajenaciones, lo mismo que en las que tratan los artículos 6º, 7º, 8º, y 9º, de esta ley, todos los gastos serán pagados por el comprador. Mas en ninguno de los casos de la redención, subrogación, remates u otro acto oficial, podrán los jefes de las oficinas de Hacienda de que habla esta ley, cobrar derechos a los interesados. Todas estas operaciones estarán libres del pago de alcabala.

Artículo 22.- Los actuales censatarios que dentro de los 30 días que les concede el artículo 12, hagan la redención de capitales que reconozcan, quedarán exentos de pagar los réditos que a la fecha estén adeudando. En el caso de no hacerlo así, el gobierno ejercerá directamente su acción contra ellos por las sumas adeudadas, o las cederá, en virtud de convenio, a los que adquieran dichos capitales.

Artículo 23.- Siempre que algunos de los que adquieran bienes de los que habla esta ley, ya por redención directa o ya por subrogación o remate, no quieran disfrutar de los plazos que concede el artículo 11 por la parte de dinero efectivo, el gobierno admitirá su pago al contado, haciéndoles el descuento correspondiente por tal anticipación.

Artículo 24.- Los que, por subrogación o remate, adquieran capitales impuestos de plazo cumplido o que haya de cumplirse antes de un año contado desde la fecha de esta ley, no podrán exigir su redención de los censatarios actuales, antes de dicho año. Respecto de las imposiciones que tengan estipulado para la redención del capital un plazo que exceda del año, los que las adquieran en virtud de esta ley, deberán respetar los contratos, no exigiendo la redención sino a la fecha convenida en ellos.

Artículo 25.- Los que, conforme al artículo 20, adquieran fincas de las que debieron desamortizarse con arreglo a la ley de 25 de junio de 1856, tendrán la obligación de respetar en sus actuales inquilinos los derechos que la misma ley les concedió.

Artículo 26.- Las fincas rústicas que, en virtud de haber sido devueltas al clero por los arrendatarios que aparentaron adjudicárselas conforme a la citada ley de 25 de junio, deben ser puestas en venta de

nuevo, se dividirán en lotes de la extensión que juzgue más conveniente el gobernador del estado respectivo. En la enajenación de estos lotes se preferirá a los actuales subarrendatarios y vecinos de la misma finca, y sólo en el caso de que éstos no hagan la adquisición en el término que para ello les fije el gobierno del estado, se venderán al mejor postor, según lo prevenido en esta ley.

Artículo 27.- Pasados los 30 días que por el artículo 11 se otorgan a los actuales censatarios para redimir por sí los capitales que reconozcan y los diez días que por el artículo 17 se conceden a los que quieran subrogarse, en lugar del erario todo el que denuncie una imposición no redimida y de que no tenga conocimiento la oficina de Hacienda respectiva, tendrá derecho a subrogarse en lugar del erario, entregando el 60% de su valor en títulos de la deuda pública y el resto en dinero a los plazos que establece el citado artículo 11.

Artículo 28.- Los que denuncien fincas que no hayan sido desamortizadas conforme a la ley de 25 de junio de 1856 y de que no tenga noticia la oficina de Hacienda respectiva, tendrán el derecho a que se les adjudique por el valor declarado para el pago de contribuciones o a falla de éste, por el que corresponda a la renta que actualmente ganen, entregando el 70% de su importe de créditos y el 30 en numerario, a los plazos que fija el repetido artículo 11 de esta ley.

Artículo 29.- La gracia que por los artículos anteriores se conceda a los denunciantes, sólo tendrá lugar en el caso de que dentro de los 20 días siguientes al de la denuncia, formalicen para sí o para la persona a quien representen, la subrogación o adjudicación, en la forma que ellos previenen. Pasado este término sin que así lo verifiquen, perderán sus derechos y la oficina respectiva procederá sin demora a vender en subasta pública los censos o fincas de que se trate, bajo las prescriptas en esta ley.

Artículo 30.- Dichas denuncias se presentarán por escrito, en el Distrito Federal, a la oficina que en él establezca el gobierno, y en los estados a los jefes de Hacienda, administradores o receptores de rentas en su respectiva demarcación.

Artículo 31.- Respecto de los bienes que, conforme a esta ley deben enajenarse en la parte de la república que se halla hoy bajo el dominio del gobierno usurpador de México, los actuales censatarios o los que quieran sustituir a éstos, en su caso, se dirigirán al supremo gobierno constitucional para hacer la redención, conforme a lo que esta misma ley dispone, y los contratos de estas operaciones se harán ante escribano público, reservando el anotar o cancelar las escrituras respectivas, para cuando vuelvan al orden las poblaciones en que se hallan los protocolos en que consten las imposiciones así redimidas. Transcurridos los plazos que para las redenciones conceden los artículos 12 y 15 de esta ley, el gobierno podrá disponer la venta de los bienes en subasta pública, cuando lo crea conveniente, en los términos prevenidos en el artículo 17.

Artículo 32.- Para fijar las cantidades de capitales impuestos que han de conservar las comunidades de religiosas, conforme a los artículos 8, 17 y 18 de la repetida ley de 12 del actual, si los mayordomos o capellanes de dichas comunidades no presentaren dentro de 15 días una noticia del número de religiosas que han introducido su dote y el nombre de dichas dotes, así como el presupuesto de los gastos anuales de que habla el citado artículo 18, la oficina de Hacienda a quien corresponda, en unión de la primera autoridad política del lugar, y con vista de los datos necesarios, fijará la suma en que deba quedar a cada comunidad para ambos objetos y señalará las imposiciones que a ellos hayan de aplicarse, poniéndolas a disposición del mayordomo o administrador de la comunidad con su respectivo inventario.

Artículo 33.- De la cantidad de numerario que produzcan al contado y a plazo las ventas y redenciones los bienes todos de que habla esta ley, corresponderá a los estados el 20% de lo vendido y redimido en sus respectivos territorios, quedando a su cargo el invertir este producto en la mejora de caminos y demás vías de comunicación así como en otros objetos de notoria utilidad pública. Para hacer efectiva esta disposición, las jefaturas de Hacienda en cada estado cuidarán de entregar al tesoro del mismo la porción del numerario y obligaciones que le correspondan, a medida que se vayan recaudando.

Artículo 34.- La oficina especial que se establezca en el Distrito y las jefaturas de Hacienda, administraciones y receptorías de rentas, disfrutarán el cinco por ciento del numerario que cada una de ellas colecte al contado o a plazos, en virtud de lo que dispone esta ley. El gobierno federal en el Distrito y los gobernadores de los estados en cada uno de ellos, dispondrán la distribución que ha de hacerse del cinco por ciento entre los empleados de dichas oficinas.

Artículo 35.- Para la admisión y amortización que ha de hacerse de la deuda nacional, por lo dispuesto en esta ley, se observarán todas las reglas establecidas en las leyes vigentes de la materia, quedando autorizado el supremo gobierno para dictar cuantas medidas crea convenientes, con objeto de asegurar los intereses de la nación en todas las operaciones que conforme a esta misma ley han de ejecutarse. En ninguna de las operaciones que emanen de esta ley se admitirán como créditos contra el erario los documentos expedidos por la tesorería general de México, después del 16 de diciembre de 1857, ni por ninguna de las oficinas que hayan estado o estén sometidas al llamado gobierno de la capital.

Artículo 36.- A fin de evitar las ocultaciones que con fraude de todo lo dispuesto en esta ley, pudieran verificarse, todos los escribanos públicos y los registradores de hipotecas deberán presentar a la oficina de Hacienda a quien corresponda, dentro de los 20 días contados desde la publicación de esta ley, una noticia nominal de las imposiciones de capitales que consten en sus protocolos, correspondientes a los bienes que ella menciona. La falta de cumplimiento de esta disposición será motivo de suspensión de oficio por uno o dos años, según la gravedad del caso.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del gobierno nacional en Veracruz, julio 13 de 1859.

Benito Juárez

Al ciudadano Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda y Crédito Público.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento.

Palacio del gobierno nacional en Veracruz, a 13 de julio de 1859.

Lerdo de Tejada

DA A CONOCER A VIDAURRI LOS PRIMEROS
DECRETOS DE LAS LEYES DE REFORMA

Veracruz, julio 14 de 1859

Excmo. Sr. don Santiago Vidaurri

Mi estimo amigo:

Tengo el gusto de remitir a usted el decreto que he expedido mandando que entren al dominio de la nación los bienes que administra el clero y de que abusa fomentando con ellos la guerra civil; lo más importante de ese decreto es el artículo 3°. que restablece la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa.

Es de suponerse que el enemigo haga esfuerzos desesperados, porque se ve herido de muerte; pero nosotros debemos ahora redoblar nuestros trabajos, establecer la unidad de nuestro ejército y fortificar la unión entre todos nuestros correligionarios. De este modo seremos invencibles y afianzaremos la paz y la libertad en nuestro país.

Celebro que haya marchado a los Estados Unidos el Sr. Galindo a proveerse de elementos de guerra. Se aprobará la refacción de que me habla usted en su grata de 6 de junio; pero conviene que, entretanto se reciban esos elementos, nuestras tropas no cesen de hostilizar al enemigo y de batirlo en detalle para debilitarlo.

El Sr. Lerdo⁶ marchó ayer para los Estados Unidos y espero que pronto consigamos algunos recursos.

Sea usted feliz y ordene lo que guste a su amigo, afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

Benito Juárez

⁶ Miguel Lerdo de Tejada.

INFORMA VIDAURRI SOBRE UN CONFUSO ARREGLO

Monterrey, julio 28 de 1859

Excmo. Sr. Presidente de la República,
don Benito Juárez
Excmo. Sr. don Manuel Ruiz
Excmo. Sr. don Melchor Ocampo
Excmo. Sr. don Miguel Lerdo de Tejada

Mi muy querido amigo:

Sin cosa alguna notable comunicar a usted por estar al parecer las hostilidades en el interior, voy a ocupar su atención un momento con un negocio que, aunque en la apariencia se presenta con el carácter de particular, no lo es en realidad porque en sí envuelve un interés público en bien de la constitucional.

El ciudadano español don Antonio Urrutia, administrador general de la negociación de las salinas del Peñón Blanco,⁷ hoy ha salido de esta ciudad con dirección a París, en donde se encuentra don Joaquín María Errazu, dueño de esa negociación, con el objeto de manifestarle a ese señor el estado guarda, y agenciar se le den recursos para que pueda continuar sus labores, porque con motivo de la revolución no puede expender las crecidas existencias que tiene.

Oficialmente me dirijo al ministro de Hacienda solicitando del gobierno se libren las órdenes a las aduanas de Tampico y Matamoros en favor del Sr. Urrutia. Sin exageración alguna si ocupara yo todo un día en hacer los elogios del comportamiento observado por el Sr. Urrutia. para

⁷ Región de San Luis Potosí colindante con Zacatecas.

con el ejército del norte y demás fuerzas constitucionalistas que han tocado las salinas del Peñón Blanco, creo que ni concluiría ni diría lo que este hombre merece y los sacrificios que ha hecho, así como los servicios que ha prestado en favor de la causa. Baste decir a usted que el Sr. Urrutia no ha tenido caballos, armas, víveres, dinero y cosa alguna que pudiera servir al ejército constitucional, sin reserva su propia existencia, que no haya puesto a disposición de sus jefes; y que creo podrá usted formarse una idea exacta de lo que le dejo dicho con referirle únicamente que cuando las fuerzas del ejército del norte se componían de 5,000 hombres, de la toma de San Luis, alojó y alimentó por mas de 15 días a esos hombres, poniéndoles diariamente mesa particular a toda la oficialidad, habiendo hecho esto mismo siempre que por las salinas pasado fuerzas ya triunfantes o derrotadas, siendo de notar que aun una bodega de vinos que tenía, valiosa en 12,000 pesos, se consumió toda. El Gral. Zaragoza debe su existencia al Sr. Urrutia, porque cuando iba a incorporarse al coronel Quiroga antes de la acción de Rincón de Ramos, sabiendo el enemigo que este jefe marchaba con una corta escolta, destacó 1,000 caballos con el objeto de aprehenderlo y sacrificarlo, pero el Sr. Urrutia, con la serenidad que correspondía, salió al encuentro a esa fuerza y entretuvo a los jefes y oficiales con un gran banquete, para dar tiempo a que se alejara el Sr. Zaragoza, estando resuelto a sacrificar cualquier suma por obtener la libertad del jefe de que se trata en el desgraciado evento de que hubiera caído en poder de los enemigos; cuando el Gral. Zuazua marchó últimamente para San Luis, confiado en las ofertas del gobernador de Zacatecas, que se comprometió a sostener las fuerzas de Nuevo León y Coahuila en el interior, habiendo faltado ese señor gobernador, y no pudiendo el Sr. Zuazua ocurrir al de San Luis para recursos, porque desempeñaba ese cargo don Eulalio Degollado, se le presentó el Sr. Urrutia y lo auxilió con numerario para atender a las necesidades del momento: en suma, el Sr. Urrutia ha sido verdaderamente una providencia para el ejército del norte, porque no ha habido una necesidad en nuestras tropas a la que no haya ocurrido violentamente para satisfacerla hasta donde le haya sido posible.

No será difícil que el Sr. Errazu no le pueda proporcionar al Sr. Urrutia recursos en numerario para atender esa gran negociación de las salinas, y se vea precisado a traer mercancías de Europa para con ellas proporcionarse aquéllas, y en este caso sus importaciones las tendría que hacer o por Tampico o por Matamoros; y en conciencia creo que se le haría un corto abono de lo mucho que se le debe, disponiendo el gobierno que los derechos que cause se liquiden y se le pase el cargo de ellos a la tesorería del estado de Nuevo León y Coahuila, para que cuando a esta oficina presente su cuenta el Sr. Urrutia se le haga la baja que corresponda por el valor de esos derechos.

Diversas veces he instado al referido Sr. Urrutia para que presente la cuenta de lo que ha ministrado al ejército y siempre me ha contestado que lo hará cuando triunfe la causa nacional, siendo tal el desinterés de este señor, que habiéndole encargado el que por su conducto se sacará de México y condujeran a esta ciudad los jóvenes del estado que se estaban educando en el colegio de agricultura, y tratando de pagarle los gastos que en esto hubiera erogado, se negó a recibir cantidad alguna en atención a las escaseces en que nos encontramos.

Recompensar el mérito y premiar los buenos servicios de ese señor creo que es un deber imprescindible para el gobierno, y por eso es que en su favor interpongo todo lo que valer pueda para obtener las órdenes de que hablo oficialmente, y que encarecidamente suplico se expidan en términos tales, que no den motivo a que en las aduanas de Tampico y Matamoros se pongan obstáculos para su cumplimiento, y sea necesario ocurrir de nuevo al gobierno para que tengan su efecto.

Ni un momento dudo en que por el ministerio respectivo se librarán las órdenes que recomiendo, y con esta convicción que me hacen adquirir las ideas que animan a los individuos que forman el gobierno, concluyo repitiéndome de usted afectísimo amigo y servidor que atento
b. s. m.

Aumento: Extenso he sido, pero usted conocerá que era indispensable ser así, porque se trata de hacer justicia al mérito y estoy

persuadido de que toda la influencia de usted la empleará para recomendar el negocio de que le hablo; pues tal es la idea, que tengo de los sentimientos que lo animan en favor de la causa y de los buenos que han sabido sacrificarse por el triunfo de la libertad de México.

Santiago Vidaurri

SE EXPLICA CÓMO EL MATRIMONIO ES UNA INSTITUCIÓN SOCIAL NO RELIGIOSA

Con esta fecha digo al Excmo., señor gobernador de ese estado lo siguiente:

Excmo. señor:

Independientes ya los asuntos civiles del Estado de los negocios eclesiásticos, retirada al clero la facultad que el soberano le concedió para que mediante su intervención en el matrimonio, éste produjera sus efectos civiles, es obligación y muy sagrada de la sociedad que para todo debe bastarse a sí misma, determinar la solemnidad y condiciones con que aquel contrato tan importante y trascendental haya de celebrarse y hacerse constar en lo sucesivo, para que produzca los mismos efectos civiles. Tal es el objeto de la ley que acompaño a V. E.

Al hacerlo, tengo el honor de manifestarle por acuerdo del Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, que con aquélla queda satisfecha una de las exigencias más apremiantes de la época y establecido el modo solemne de afianzar la legitimidad conyugal.

El matrimonio en su calidad de sacramento ha llegado a ser, en los pueblos oprimidos por la reacción, uno de los fuertes resortes que el clero ha desplegado para procurar la inobediencia a las leyes de la república. Mediante pretextos punibles, ha negado las bendiciones de la Iglesia a muchas personas, por el solo hecho de mostrarse fieles al juramento que prestaron a la Constitución y a las leyes. Sus exigencias han sido tan perentorias que ya era preciso olvidar el deber, faltarse a sí mismo y hasta cometer el delito de infidelidad retractando un juramento, para hacerse digno de recibir la gracia sacramental del matrimonio, no obstante que la Iglesia aconseja el estado de pureza.

Con semejante doctrina tan nueva como perniciosa en el sentido católico, tan funesta como ruinoso para el bien de la sociedad, se ha profanado la virtud espiritual del matrimonio por los mismos que están destinados a procurarla: se ha impedido la unión de los esposos por los mismos a quienes el soberano dio misión de testificarla, y se ha minado a la sociedad en su base más esencial que es la organización de las familias, por los mismos que tienen el estricto deber de predicar la moral y de procurar que los creyentes vivan en la santidad y en la justicia.

Han sido tales los abusos que se han hecho de la franqueza con que el soberano confió al clero el derecho de intervenir en el contrato matrimonial, que hasta los más creyentes han llegado a vacilar, a desconfiar de su doctrina en este punto. Todos han visto que con escándalo se ofrecía el cambio de un signo sensible de gracia, por una promesa solemne en favor de la reacción y aceptando este error por lo apremiante de la necesidad, buscaron el recurso de salvarlo sin detrimento de la pureza de su fe,

Por una parte se veía que muchos aparentemente se sujetaban a las extraviadas pretensiones del clero para poderse unir en matrimonio; pero una vez autorizado el contrato, revelaban públicamente, la ninguna voluntad, la ninguna intención con que habían dado semejante paso y ratificaban de nuevo y con más solemnidad sus juramentos de obediencia a la autoridad y a la ley.

Por otra parte, se veía también que los prometidos esposos respetando hasta donde podían las prescripciones de la misma Iglesia, se presentaban a sus párrocos acompañados del número conveniente de testigos y, pública y solemnemente, expresaban ante ellos la voluntad que tenían de unirse y vivir en uno; y sin embargo de ser esto un medio canónico para vencer la resistencia de los párrocos y celebrar a su pesar el contrato del matrimonio, es notorio que muchos párrocos haciendo más estimación de sus pasiones y de su interés en los progresos de la reacción, que de los sagrados cánones de su misma Iglesia, se han atrevido a declarar nulos estos matrimonios, a ciencia cierta de que son válidos.

Estos hechos de grave escándalo, de perniciosos resultados, reclamaban una medida bastante enérgica y capaz de impedir en el futuro su triste repetición. Esta medida es la que contiene el decreto a que me referí al principio.

Como V. E. observará, el gobierno ha procurado afianzar de un modo solemne el contrato del matrimonio, para que mediante la fe de testigos caracterizados, que en todo tiempo acrediten la unión legítima de las personas, estas y sus familias gocen el honor, derechos y consideraciones que la sociedad y la ley dispensan a los casados. Esencialmente se ha cuidado de conservar el lazo de unión entre los esposos, para que viviendo en la honorabilidad y en la justicia, procuren de consuno el bien de ellos mismos y de sus hijos.

En cuanto a los impedimentos para realizar el matrimonio, nada nuevo se establece; pero el gobierno ha cuidado de fijar los menores posibles, a fin de que sólo por la mejora y perfección de las generaciones, por la lealtad con que se deben cumplirse los compromisos solemnes, por el defecto de voluntad, por el error capital o la completo falta de juicio, se encuentren inhábiles las personas para contraer matrimonio. De este modo los enlaces legítimos serán más fáciles, más numerosos y tanto la menor dificultad como el mayor número, darán un resultado de gran utilidad para los pueblos.

Con relación al divorcio, el gobierno, amparando siempre la esencia de la unión conyugal, ha señalado como causa suficientes para la separación temporal de los esposos todas las que justamente hagan amarga, desesperada e insoportable la vida común de los casados, ora sea porque se deshonen o infamen, ora porque se dañen en su salud física o en su sentimiento moral; sin embargo, ha prohibido expresamente, como es de su deber, la realización de otro enlace mientras viva alguno de los divorciados. Garantizando el lazo conyugal hasta en estos casos, ciertamente graves, la familia conservará el amparo que le dio la naturaleza y que le consagró la sociedad.

A pesar de la filosofía del siglo y de los grandes progresos de la humanidad, la mujer, esta preciosa mitad del ser humano, todavía aparece degradada en la legislación antigua, que por desgracia en muchas partes

nos rige. El gobierno se ha formado el deber de levantarla de ese abatimiento, rompiendo las trabas indebidas que la tiranía ha puesto al ejercicio de sus legítimos derechos, para que tan honrada por la ley como enriquecida por la naturaleza, pueda llenar dignamente los sagrados deberes de la maternidad. La ley ha negado a la mujer casada, alguno de los derechos que le ha concedido al hombre, no obstante que por el matrimonio resulta compañera suya. Para evitar esta desigualdad injusta, para nivelar los derechos de personas unidas por un mismo sentimiento y consagradas a un fin, la ley ha cuidado de conceder a la esposa los mismos derechos y acciones que le otorga al esposo; ha hecho más, le ha proporcionado en sus padres y abuelos, protectores exentos de toda sospecha que robustezcan su natural debilidad y amporen la defensa de su causa.

Finalmente, el gobierno, conforme al deber que tiene de respetar las conciencias, ha dispuesto que una vez celebrado el matrimonio civil puedan después los esposos si quieren, recibir las bendiciones de los ministros de su culto, sin que por recibirlas o dejarlas de recibir, el enlace realizado ceda o aumente su validez.

Con estas determinaciones, el gobierno cree que ha llenado la obligación de ocurrir prontamente a la más apremiante de las necesidades que resultan de la independencia de los asuntos civiles, respecto de los negocios eclesiásticos. V. E. observará que al verificarlo ha usado de los legítimos derechos que le competen y que nadie puede disputarle, esencialmente cuando ha procurado el bien de la sociedad sin riesgo de las familias.

Acaso en esta materia habrá que hacer algo más que la experiencia enseñe; pero entretanto el Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, se complace en haber acordado determinación propia de sus sentimientos de justicia y conveniente a la felicidad y bienestar de la nación. Y en consecuencia, ha dispuesto que al comunicarlo a V. E. le recomiende, como tengo el honor de hacerlo, que cuide de su puntual cumplimiento y haga que en el estado de su mando se circule con la mayor profusión posible para que llegue a conocimiento de todos.

Cumplido el acuerdo del Excmo. señor Presidente, disfruto la satisfacción de protestar a V. E, las seguridades de mi particular aprecio.

Díos y Libertad, Veracruz, julio 28 de 1859

(Manuel) Ruiz

Excmo. señor gobernador del estado de..
Es copia. México, abril 30 de 1861.

(Manuel) Ruiz

LEY SOBRE EL MATRIMONIO

El Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a todos sus habitantes, hago saber, que considerando:

Que por la independencia declarada de los negocios civiles del Estado respecto de los eclesiásticos, ha cesado la delegación que el soberano había hecho al clero para que con sola su intervención en el matrimonio, este contrato surtiera todos sus efectos civiles.

Que reasumido todo el ejercicio del poder en el soberano, éste debe cuidar de que un contrato tan importante como el matrimonio, se celebre con todas las solemnidades que juzgue conveniente a su validez y firmeza y que el cumplimiento de éstas le conste de un modo directo y auténtico.

He tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícitamente y válidamente ante la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquélla y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio.

Artículo 2º.- Los que contraigan el matrimonio de la manera que expresa el artículo anterior, gozan todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles conceden a los casados.

Artículo 3º.- El matrimonio civil no puede celebrarse más que por un solo hombre con una sola mujer. La bigamia y la poligamia continúan prohibidas y sujetas a las mismas penas que les tienen señaladas las leyes vigentes.

Artículo 4º.- El matrimonio civil es indisoluble, por consiguiente, sólo la muerte de alguno de los cónyuges es el medio natural de disolverlo; pero podrán los casados separarse temporalmente por algunas de las causas expresadas en el artículo 20 de ley. Esta separación legal no los deja libres para casarse con otras personas.

Artículo 5º.- Ni el hombre antes de 14 años, ni la mujer antes de los 12 pueden contraer matrimonio. En casos muy graves y cuando el desarrollo de la naturaleza se anticipe a esta edad, podrán los gobernadores de los estados y el del Distrito en su caso, permitir el matrimonio entre estas personas.

Artículo 6º.- Se necesita para contraer matrimonio, la licencia de los padres, tutores o curadores, siempre que el hombre sea menor de 21 años, y la mujer de 20. Por padres para este efecto se entenderán también los abuelos paternos. A falta de padres, tutores o curadores, se ocurrirá a los hermanos mayores. Cuando los hijos sean mayores de 21 años, pueden casarse sin la licencia de las personas mencionadas.

Artículo 7º.- Para evitar el irracional disenso de los padres, tutores, curadores y hermanos, respectivamente, ocurrirán los interesados a las autoridades políticas, como lo dispone la ley de 20 de marzo de 1837, para que se les habilite la edad.

Artículo 8º.- Son impedimentos para celebrar el contrato civil del matrimonio los siguientes:

1º.- El error, cuando recae esencialmente sobre la persona.

2º.- El parentesco de consanguinidad legítimo o natural sin limitación de grado en la línea recta ascendente y descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la misma línea colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos o al contrario, siempre que estén en el tercer grado. La calificación de estos grados se hará siguiendo la computación civil.

3º.- El atentar contra la vida de alguno de los casados para casarse con el que quede libre.

4º.- La violencia o la fuerza, con tal que sea tan grave y notoria que baste para quitar la libertad del consentimiento.

5º.- Los esponsales legítimos, siempre que consten por escritura pública y no se disuelvan por el mutuo disenso de los mismos que los contrajeron.

6º.- La locura constante e incurable.

7º.- El matrimonio celebrado antes legítimamente con persona distinta de aquella con quien se pretenda contraer.

8º.- Cualquiera de estos impedimentos basta para que no se permita la celebración del matrimonio, o para dirimirlo, en el caso de que existiendo alguno de ellos se haya celebrado, menos el error sobre la persona que puede salvarse, ratificando el consentimiento después de conocido el error.

Artículo 9º.- Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán a manifestar su voluntad, al encargado del registro civil del lugar de su residencia. Este funcionario levantará una acta en que conste el nombre de los pretendientes, su edad y domicilio, el nombre de sus padres y abuelos de ambas líneas, haciendo constar que los interesados tienen deseo de contraer matrimonio. De esta acta que se sentará en un libro, se sacarán copias que se fijarán en los parajes públicos. Por quince días continuos permanecerá fijada la acta en los lugares públicos, a fin de que llegando a noticia del mayor número posible de personas, cualquiera pueda denunciar los impedimentos que sepa tienen los que pretenden el matrimonio. Cuando se trate de personas que no tienen domicilio fijo, la acta permanecerá en los parajes públicos por dos meses.

Artículo 10.- Pasados los términos que señala el artículo anterior y no habiéndose objetado impedimento alguno a los pretendientes, el oficial del registro civil lo hará constar así y a petición de las partes se señalará el lugar, día y hora en que deba celebrarse el matrimonio. Para este acto se asociará con el alcalde del lugar y procederá de la manera y forma que se expresa en el artículo 15.

Artículo 11.- Si dentro del término que señala el artículo anterior se denunciase algún impedimento de los expresados en el artículo 8º. el encargado del registro civil lo hará constar y ratificará simplemente a la persona que lo denunciare. Practicada esta diligencia remitirá la denuncia

ratificada al juez de 1ª. instancia del partido, para que haga la calificación correspondiente.

Artículo 12.- Luego que el juez de 1ª. instancia del partido reciba el expediente, ampliará la denuncia y recibirá en la forma legal cuantas pruebas estime convenientes para esclarecer la verdad, incluso las pruebas que la parte ofendida presente. La práctica de estas diligencias no deberá demorar más de tres días, a no ser que alguna prueba importante tenga que rendirse fuera del lugar, en cuyo caso el juez prudentemente concederá para rendirla el menor tiempo posible.

Artículo 13.- En caso de resultar por plena justificación, legítimo el impedimento alegado, declarará que las personas no pueden contraer matrimonio y así lo notificará a las partes. De esta declaración sólo habrá lugar al recurso de responsabilidad. Luego que se haga a las partes la notificación expresada, la comunicará también al encargado del registro civil de quien recibió el expediente, para que la haga constar al calce de la acta de presentación.

Artículo 14.- Cuando no resulte probado el impedimento, hará la declaración correspondiente, la notificará a las partes y la comunicará al encargado del registro civil para que proceda al matrimonio.

Artículo 15.- El día designado para celebrar el matrimonio ocurrirán los interesados al encargado del registro civil, y éste, asociado del alcalde del lugar y dos testigos más por parte de los contrayentes, preguntará a cada uno de ellos, expresándolo por su nombre, si es su voluntad unirse en matrimonio con el otro. Contestando ambos por la afirmativa, les leerá los artículos 1º., 2º., 3º., y 4º. de esta ley. y haciéndoles presente que formalizada ya la franca expresión del consentimiento y hecha la mutua tradición de las queda perfecto y concluido el matrimonio, les manifestará: que éste es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie de y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que este no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aun más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la

fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa, que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido, obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo, el uno y el otro se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con el, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonoran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección: ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistosa y mutua corrección de sus defectos, a la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos y amados lazos de su afecto, hará su suerte próspera o adversa; y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la ventura o desdicha de los padres. Que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos y, la misma, censura y desprecia debidamente a los que por abandono, por mal entendido cariño, o por su mal ejemplo corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió, concediéndoles tales hijos. Y, por último, cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevadas a la dignidad de padres, sino que sólo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer que no han sabido ser libres, y dirigirse por sí mismos hacia el bien.

Artículo 16.- Cuando alguno de los contrayentes negare su consentimiento en el acto de ser interrogado, todo se suspenderá, haciéndose constar así.

Artículo 17.- Concluido el acto del matrimonio, se levantará el acta correspondiente que firmarán los esposos y sus testigos, y que autorizará el encargado del registro civil y el alcalde asociado, asentándola en el libro correspondiente. De esta acta dará a los esposos, si lo pidiesen, testimonio en forma legal.

Artículo 18.- Este documento tiene fuerza legal para probar plenamente en juicio y fuera de él, el matrimonio legítimamente celebrado.

Artículo 19.- Siempre que pasen seis meses del acta de presentación al acta de matrimonio, se practicarán nuevamente todas las diligencias, quedando sin valor las que antes se hubieren practicado.

Artículo 20.- El divorcio es temporal y en ningún caso deja hábiles a las personas para contraer nuevo matrimonio mientras viva alguno de los divorciados.

Artículo 21.- Son causas legítimas para el divorcio:

1º.- El adulterio, menos cuando ambos esposos se hayan hecho de este crimen, o cuando el esposo prostituya a la esposa con su consentimiento; más en caso de que lo haga por la fuerza, la mujer podrá separarse del marido por decisión judicial sin perjuicio de que éste sea castigado conforme a las leyes. Este caso, así como el de concubinato público del marido, dan derecho a la mujer la acción de divorcio por causa de adulterio.

2º.- La acusación de adulterio hecha por el marido a la mujer o por esta a aquél, siempre que no la justifiquen en juicio.

3º.- El concubito con la mujer, tal que resulte contra el fin esencial del matrimonio.

4º.- La inducción con pertinacia al crimen, ya sea que el marido induzca a la mujer o ésta a aquél.

5º.- La crueldad excesiva del marido con la mujer o de ésta con aquél.

6º.- La enfermedad grave y contagiosa de alguno de los esposos.

7º.- La demencia de uno de los esposos, cuando ésta sea tal que fundadamente se tema por la vida del otro. En todos estos casos, el ofendido justificará en la forma legal su acción ante el juez de 1ª. instancia competente; y éste, conociendo en juicio sumario, fallará inmediatamente que el juicio esté perfecto, quedando en todo caso a la parte agraviada el recurso de apelación y súplica.

Artículo 22.- El tribunal superior a quien corresponda, sustanciará la apelación con citación de las partes e informará a la vista; y ya sea que confirme o revoque la sentencia del inferior, siempre tendrá lugar la súplica que se sustanciará del mismo modo que la apelación.

Artículo 23.- La acción de adulterio es común al marido y a la mujer en su caso. A ninguna otra persona le será lícito ni aun la denuncia.

Artículo 24.- La acción de divorcio es igualmente común al marido y a la mujer, en su caso. Cuando la mujer intente esta acción o la del adulterio contra el marido, podrá ser amparada por sus padres o abuelos de ambas líneas.

Artículo 25.- Todos los juicios sobre validez o nulidad de matrimonio, sobre alimentos, comunidad de intereses, gananciales, restitución de dote, divorcio y cuantas acciones tengan que entablar los casados, se ventilarán ante el juez de 1ª. instancia competente. Los jueces, para la sustanciación y decisión de estos juicios, se arreglarán a las leyes vigentes.

Artículo 26.- Los testigos que declaren con falsedad en la información de que trata el artículo 12 de esta ley, serán castigados con la pena de dos años de presidio. Los denunciadores que no justifiquen la denuncia, serán castigados con un año de presidio, y si la denuncia resultare calumniosa sufrirán tres años de presidio.

Artículo 27.- En la imposición de las penas que el artículo anterior, nunca se usará del arbitrio judicial.

Artículo 28.- Los juicios que se sigan contra las personas que expresa el artículo 26, serán sumarios. De la sentencia que en ellos pronuncien los tribunales competentes habrá lugar a la apelación, que se sustanciará con citación y audiencia de los reos. Si la sentencia de vista fuere conforme de toda conformidad con la de primera instancia, causará

ejecutoria. En caso contrario habrá lugar a la súplica que se sustanciará como la apelación.

Artículo 29.- El juicio de responsabilidad intentado contra el juez de 1ª. instancia, por las declaraciones que haga en materia de impedimentos conforme a las facultades que le concede el artículo 13, se seguirá del modo que lo mandan las leyes vigentes, y la que se imponga la de destitución de empleo e inhabilidad perpetua para ejercer cargo alguno del ramo judicial en toda la república.

Artículo 30.- Ningún matrimonio celebrado sin las formalidades que prescribe esta ley será reconocido como legítimo para todos los efectos civiles; pero los casados conforme a ella podrán, si lo quieren, recibir las bendiciones de los ministros de su culto.

Artículo 31.- Esta ley comenzará a tener efecto en cada lugar, luego que en él se establezca la oficina del registro civil.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del gobierno general en la heroica Veracruz julio 23 de 1859.

Benito Juárez

Al ciudadano [C.] Lic. Manuel Ruiz, ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Y lo comunico a usted para, su inteligencia y cumplimiento.
Palacio del gobierno general en Veracruz, julio 23 de 1859.

(Manuel) Ruiz

Es copia. México abril 30 de 1861

Manuel Ruiz

DECRETO DEL GOBIERNO DECLARANDO QUE CESA
TODA INTERVENCIÓN DEL CLERO EN LOS
CEMENTERIOS Y CAMPOSANTOS

El Excmo. señor Presidente interino constitucional de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República: Considerando: que sería imposible ejercer por la autoridad la inmediata inspección que es necesaria sobre los casos de fallecimientos e inhumación, si cuanto a ellos concierne no estuviera en manos de sus funcionarios.

He tenido a bien decretar:

Artículo 1º.- Cesa en toda la república la intervención que en la economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepultura aun las bóvedas de las iglesias, catedrales y de los monasterios de señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la autoridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos no se podrá hacer ninguna inhumación. Se renueva la prohibición de enterrar cadáveres en los templos.

Artículo 2º.- A medida que se vayan nombrando los jueces del estado civil, mandados establecer por la ley de 28 de julio de 1859, se irán encargando de los cementerios, camposantos, panteones y criptas o bóvedas mortuorias que haya en la circunscripción que a cada uno de ellos se haya señalado.

Artículo 3º.- A petición de los interesados y con aprobación de la autoridad local, podrán formarse campos mortuorios, necrópolis o panteones para entierros especiales. La administración de estos

establecimientos estará a cargo de quien o quienes los erijan; pero su inspección de policía, lo mismo que sus partidas o registro, estarán a cargo del juez del estado civil, sin cuyo conocimiento no podrá hacerse en ellos ninguna inhumación.

Artículo 4º.- En todos estos puntos se dará fácil acceso a los ministros de los cultos respectivos; y los administradores, o inmediatos encargados de todas estas localidades, facilitarán cuanto esté en su poder para las ceremonias del culto que los interesados se verifiquen en esos lugares.

Artículo 5º.- Los ministros del culto respectivo convendrán con los interesados la remuneración que por estos oficios deba conforme al artículo 4º de la ley de 12 de julio de 1859.

Artículo 6º.- Será de la inspección y cargo de los jueces del estado civil, administradores, guardianes o sepultureros, cada uno en su caso, conservar y hacer que se conserve la medida y decoro que todos deben guardar en estos lugares. Cualquiera infracción de esta prevención hace merecedor al autor y cómplices de una de cinco hasta 50 pesos, o de una prisión desde uno hasta 15 días a juicio del juez del estado civil, a quien se dará cuenta con el caso, por el encargado del establecimiento o por cualquiera de los vecinos: deberá también impedirlo de oficio, cuando llegue a saberlo.

Artículo 7º.- Los gobernadores de los estados y de Distrito, y el jefe del territorio cuidarán mandar establecer, en las poblaciones que no los tengan o los necesiten nuevos campos mortuorios y, donde sea posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de las poblaciones, pero a una distancia corta: que se hallen situados, en tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante; que estén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta que haga difícil la entrada a ellos; y que estén plantados, en cuanto se pueda, de los arbustos y árboles indígenas o exóticos que más fácilmente en el terreno. En todos habrá un departamento separado, sin ningún carácter religioso, para los que no puedan ser enterrados en la parte principal.

Artículo 8º.- El espacio que en todos se conceda para la sepultura, será a perpetuidad para un individuo o para familias -por cinco años la

sepultura de los demás- por el mismo tiempo y contigua a las otras, sea sobre el terreno, o sea en nichos o en fosa común para los casos de gran mortandad. También se concederán espacios para urnas, osarios y aun para sólo cenotafios.

Artículo 9º.- Pasados los cinco años de las concesiones temporales, se hará, si fuere necesarios la exhumación de los huesos que se conservarán en osario general o en las urnas de que habla el artículo anterior, o fuera del local y en el punto que designen los interesados a quienes se entregarán, si los piden, sin exigirles más remuneración por ello que el costo ordinario de la exhumación. Exceptuándose los casos en que los interesados quieran renovar por otros cinco años la conservación de la localidad, que darán nueva, pero menor retribución.

Artículo 10.- Los gobernadores de los estados y Distritos y jefe de territorio, con presencia de las necesidades y recursos locales, reglamentarán la remuneración los interesados deban dar por estas diversas concesiones. Todos los que no las pidan serán enterrados gratis en la fosa general.

Artículo 11.- De todas las graduaciones de sepulturas de que hablan los artículos anteriores, se hará arancel que se imprimirá en caracteres de fácil lectura; un ejemplar de él, se fijará en el interior y otro en el del cementerio, campo mortuorio, panteón o cripta; otro ejemplar se fijará en lugar aparente de la municipal y otro en la del juez del estado civil, donde lo haya.

Artículo 12.- El juez del estado civil o, en los pueblos en que no lo hubiere, la autoridad designada por el gobernador del estado o distrito o el jefe político del territorio, recaudará y administrará fondos que se destinarán a la conservación, mejora y embellecimiento de estos lugares sagrados y a la dotación, en la parte que los gobernadores designen, de los jueces del estado civil y de sus gastos de oficio, así como de los empleados de los mismos establecimientos. Se aplicaran en lo remanente a los objetos para que ahora sirven, en los cuyos ayuntamientos los erigieron y administraban.

Artículo 13.- Cuidarán asimismo los gobernadores de dictar todas las medidas que fueren necesarias para la conservación, decoro, salubridad, limpieza y adorno de estos establecimientos.

Artículo 14.- Ninguna inhumación podrá hacerse sin autorización escrita del juez del estado civil, o conocimiento de la autoridad local en los pueblos en donde no haya aquel funcionario. Ninguna inhumación podrá hacerse sino 24 horas después del fallecimiento. Ninguna inhumación podrá hacerse, sin la presencia de dos testigos, por lo menos, tomándose de estos actos nota escrita por la autoridad local de los lugares donde no hubiere juez del estado civil y remitiéndose copia de esta nota al encargado del registro civil. Ninguna inhumación se hará si fuere en terreno nuevo, sino a la profundidad cuando menos de cuatro pies, siendo el terreno muy duro, y de seis en los terrenos comunes; ni en sepultura antigua, sino después de que hayan pasado cinco años; ni en fosa común, sino con un intermedio, cuando menos, de un pie de tierra entre los diversos cadáveres.

Artículo 15.- Cualquiera que violare un sepulcro, sea cual fuere el motivo o pretexto, sufrirá de seis meses a un año de prisión. Si el violador fuese el sepulturero, sufrirá pena doble y será despedido de su encargo. Si no fuere el autor del delito, estará obligado a probar que no fue. Si sólo fuese simple cómplice, el juez graduará, con presencia de las circunstancias, la pena que debe imponerse entre las ya señaladas para el sepulturero y el común violador. Podrán también concederse permisos por el juez del estado civil a los deudos o interesados en la conservación de algún cadáver, para que lo inhumen en otros puntos fuera de los lugares destinados a esto; pero será para ello condición precisa que la inhumación se verifique a presencia o satisfacción de la autoridad y que el cadáver se encuentre en condiciones que no perjudique al vecindario.

Por tales excepciones de las reglas comunes se pagarán cuotas mas elevadas que por todas las otras.

Artículo 16.- Cualquiera que entierre un cadáver sin conocimiento de la autoridad, se vuelve por ese solo hecho sospechoso de homicidio, digno de un juicio en que se averigüe su conducta, y responsable de los daños y perjuicios que los interesados en tal inhumación clandestina

prueben que se les han seguido. Se abrirá el juicio, y si no resultare reo ni cómplice de homicidio, se le impondrá siempre la pena de una multa de 10 a 50 pesos, o de 8 días a un mes de prisión.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del gobierno general en la heroica Veracruz a 31 de julio de 1859.

Benito Juárez

Al ciudadano Melchor Ocampo, ministro de Gobernación.

Y lo comunico a usted para su inteligencia y cumplimiento.
Palacio de gobierno general en Veracruz, etc.

(Melchor) Ocampo

DECRETO DEL GOBIERNO EN QUE DECLARA QUÉ
DÍAS DEBEN TENERSE COMO FESTIVOS Y
PROHIBE LA ASISTENCIA OFICIAL A LAS
FUNCIONES DE IGLESIA

El Excmo. señor Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El ciudadano Benito Juárez, Presidente interino constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º.- Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los tribunales, oficinas y comercio, todos los que no queden comprendidos en la especificación siguiente: los domingos, el día de año nuevo, el jueves y viernes de la semana mayor, el jueves de corpus, el 16 de septiembre, el primero y dos de noviembre y los días 12 y 24 de diciembre.

Artículo 2º.- En sólo estos días dejarán de despachar habitualmente los tribunales, oficinas y comercio, exceptuándose las cosas urgentes, que sin necesidad de previo auto de habilitación de horas, pero sí expresando la razón por qué se declaró urgente el negocio, podrán despacharse.

Artículo 3º.- Se derogan todas las leyes, circulares, disposiciones, cualesquiera que sean, emanadas del legislador, de institución testamentaria o de simple costumbre, por las cuales había de concurrir en cuerpo oficial a las funciones públicas de las iglesias.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del gobierno general en la heroica Veracruz, a 11 de agosto de 1859.

Benito Juárez

Al ciudadano Melchor Ocampo, secretario de Estado y del despacho de Gobernación.

Y lo comunico a vuestra superioridad [V. S.] para su inteligencia y fines consiguientes. Dios y Libertad, heroica Veracruz, etc.

(Melchor Ocampo)

VIDAURRI SATISFECHO CON LA EXPEDICIÓN DE LAS
LEYES DE REFORMA

Monterrey, agosto 10 de 1859

Excmo. Sr. don Benito Juárez

Mi muy querido amigo;

¿Qué podré decir a usted en contestación a su apreciable fecha 14 del último julio, para manifestarle los sentimientos que me animan por la expedición del decreto que nacionaliza los bienes del clero, fija la independencia del Estado y de la Iglesia, y establece la tolerancia de cultos? Mis ideas y los principios que siempre he profesado se encuentran consignados en ese importante paso que ha dado usted.

Más si ese decreto me ha llenado de satisfacción, el manifiesto que ha dirigido usted a la república ha causado en mí una sensación extraordinaria e inexplicable, porque en él no sólo se encuentra la enunciación de un verdadero programa de progreso, sino que se revela el hombre que con su carácter firme y resuelto sabrá llevarlo hasta su completo desarrollo.

Las circunstancias porque ha tenido que pasar Zuazua en el interior y el estado de completa desorganización en que recibió las fuerzas que operaban por esa parte de la república, no menos que la anarquía que dominaba a los jefes, son cosas que lo obligaron a limitarse mantener la situación y a hostilizar en cuanto le fuere posible al enemigo, como lo ha estado haciendo incesantemente; sirviendo la cantidad que se sacó de Guanajuato restablecer la disciplina y poner orden en cuanto fuera posible en el espantoso caos en que se encontraba. Hinojosa no sólo molestó sino que atacó formalmente a Márquez en Guanajuato, y siendo

amagado por fuerzas superiores se retiró en buen orden haciendo en todo esto un movimiento atrevido, en el que no tuvo más pérdida que una pieza que se le desbarrancó. En la Calera y otros diversos puntos ha sido incesantemente molestado el enemigo, y nuestras fuerzas han llegado hasta La Luz, haciendo que los reaccionarios se replieguen despavoridos a la plaza de Guanajuato, y todo esto se ha hecho cuando las fuerzas de Tamaulipas han desertado del frente enemigo, y cuando las fuerzas de Zacatecas, retiradas a su estado para reorganizarse, aún no han vuelto al cuartel general, no obstante de haberse pasado con exceso el tiempo que para ese objeto pidió su gobernador.

La presencia de mi buen amigo el Sr. Degollado mejorará nuestra posición en el interior, más, como se lo he dicho por escrito, por no haber podido concurrir a la cita que me hizo, en mi concepto, debe limitarse a mantener la situación, aprovechando el tiempo en organizar y disciplinar bien nuestras fuerzas, mientras viene Galindo con el armamento y puedo volar para el interior con 3 ó 4,000 hombres, si, como lo espero, el gobierno me auxilia con los recursos necesarios para poder mover esa fuerza y dejar asegurada la subsistencia de las familias. Si no se mantiene la situación y desde luego se trata de abrir una campaña decisiva, me temo con sobrado fundamento que nuestro amigo el Sr. Degollado tendrá que sufrir otro golpe del que con mucha dificultad podremos reponernos. A ese amigo le he escrito con extensión y hablándole con la franqueza que me permiten las buenas relaciones que llevamos, y no dudo que me escuchará y se convencerá de cuanto le digo.

Agradezco a usted su buena disposición para que se apruebe el uso que debe haber hecho el Sr. Galindo del crédito de 20,000 pesos que facilitaron los Sres. Walsh y compañía, con la condición de que se lea pagara en los mismos términos que a don Bruno Lozano se le mandó pagar la refacción que hizo a su contrato, por haberlo exigido así el Sr. Prieto. Deseo y suplico a usted que así se haga, el que las órdenes que se libren para el pago de ese crédito de 25,000 vengán en tales términos que no den motivo a interpretaciones ni a la multitud de chicanas con que en Tamaulipas se eluden las disposiciones del gobierno, y muy

particularmente las que tienen relación a negocios que hacen con el estado de mi mando.

Deseándole a usted todo género de felicidades, me repito suyo amigo y servidor q. b. s. m.

Santiago Vidaurri

LA CONSTITUCIÓN DE 1857, PASO PREVIO
DE MÉXICO PARA SU REGENERACIÓN

Cuartel general en Tampico, julio 17 de 1859

Santos Degollado, general en jefe
del ejército federal, a sus subordinados

Compañeros de armas:

Lleno de júbilo y de esperanzas risueñas vuelvo de un viaje penoso que he procurado abreviar. Fiel a mi palabra y a mis invariables propósitos, vengo a colocarme a vuestro frente y a conducirlos de nuevo al campo del honor, para continuar peleando con vosotros por la santa causa del pueblo y de la civilización.

Con más ardor que el primer día, desnudo ahora la espada para combatir contra los infames esbirros de la tiranía y del fanatismo cien veces perdonados, favorecidos, tratados como hermanos y siempre desleales y pérfidos, apagando su sed de matanza en la sangre liberal.

Y ¿recordáis como la han prodigado en los campos de batalla y en los patíbulos, desde nuestra independencia hasta hoy? ¿Habéis olvidado los saqueos, los incendios, los cobardes asesinatos que inhumanos han cometido cuando han dominado o pretendido esclavizar al país? Ahí tenéis la historia, y en ella el catálogo de los bárbaros atentados que ha producido el consorcio diabólico del centro y la sotana.

Desde los tiempos de la edad media dijo un papa a un rey: "Juntemos nuestras diestras y nuestros aceros, para dominar y oprimir a la humanidad". No pudiendo reunir a todos los hombres en una cabeza sola para cortarla de un revés, los han diezmado durante siglos, en nombre de la religión y de los principios que llaman tradicionales. Pero la

humanidad, renaciendo sin cesar, se ilustra, crece y marcha a la perfección social, que es su verdadera tradición y el mandato paternal de Dios.

La Constitución de 1857, fue un paso preparatorio que dio México para destruir los abusos y comenzar su regeneración. Un clero estúpido y apasionado agita las conciencias y con sus tesoros enciende la guerra civil; rehúsa las garantías que le aseguraba la ley de desamortización, emplea toda la fuerza de su poder espiritual y evoca las furias del infierno sobre los amigos de la Constitución.

Esta conducta torpemente obcecada, destruye los compromisos firmados por la timidez, uniforma las opiniones y obliga por fin al gobierno legítimo a enarbolar el hermoso pendón de la reforma.

La terquedad y los crímenes de la reacción han venido en nuestro auxilio, aproximando las épocas y haciendo madurar para nosotros un fruto que la marcha natural del tiempo había reservado para nuestros descendientes. ¡Feliz rebeldía! ¡Dichoso el pecado que produce tal redención!

Soldados: soy el nuncio de la buena nueva y os traigo las leyes salvadoras de la república para que las defendamos.

Ya las riquezas inmensas del clero no servirán para la matanza de hermanos, pues han pasado al dominio de la nación, como en tiempo de Jesucristo.

Ya los claustros no aprisionarán víctimas del fanatismo y de la avaricia, ni servirán de guarida a los enemigos del trabajo y, como en tiempo de Jesucristo, los hombres y las mujeres se consagrarán a Dios en medio del mundo y de las ocupaciones de la vida civil.

Ya no serán arrojados a los campos nuestros cadáveres porque respetamos la Constitución, ni quedarán prohibidos los dulces lazos del matrimonio para el que la hubiera jurado, pues los hombres de todas las creencias tendrán honrosa sepultura y podrán huir de las uniones ilegítimas y de la prostitución a que conduce la resistencia del clero, para la administración de los sacramentos. Así volveremos al tiempo de Jesucristo, al registro civil.

Miles de brazos vigorosos y de cabezas inteligentes, vendrán de todas partes a poblar y enriquecer nuestros campos desiertos, por que hallarán seguridad y protección a la libertad política, civil y religiosa que predica el evangelio de Jesucristo.

En suma, habrá una reforma completa en lo moral y en lo material, con la vuelta “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, como enseñó Jesucristo con su doctrina y ejemplo.

¡Un impulso más, valientes defensores de la Constitución! Y la feroz teocracia se desplomará.

¡Otra vez a las armas, soldados del pueblo! Que el triunfo nos aguarda en la capital.

Y si os falta entusiasmo, recordad que a sus puertas llamé hace poco con el lenguaje de la razón; recordad que propuse a nuestros enemigos la común sumisión al fallo de la representación nacional, para que la sangre no corriese ya y, entonces, a la fraternal dulzura de mis palabras respondieron los gritos salvajes de exterminio y cien cadalsos se alzaron y fueron inmolados el patriotismo, la humanidad, la juventud y hasta la inocencia en nuestros soldados, en nuestros médicos y en nuestros amigos,

¡Los mártires de Tacubaya piden venganza! Y señalando a sus asesinos para que los castigue la ley.

La sangre preciosa de otras mil víctimas, sacrificadas en menos visibles patíbulos, demandan justicia y reparación.

¡Marchemos, pues, contra viles traidores, contra esbirros carniceros, contra bandidos cobardes y contra verdaderos impíos!

¡Guerra hasta vencer o morir! Que el mundo civilizado aplaudirá y vosotros recogeréis el amor de nuestros conciudadanos, si protegéis la propiedad y el honor de las familias, si respetáis las garantías debidas al hombre, si guardáis disciplina, subordinación y moralidad, y si dejáis consumada la grande obra de reforma social. En todos los peligros y dificultades de la campaña, estará siempre con vosotros y hasta su último día, vuestro compañero y amigo.

Santos Degollado

EZEQUIEL MONTES SOLICITA RECURSOS
PARA SU REPATRIACIÓN

Aix-la-chapelle, julio 25 de 1859

Excmo. Sr. don Benito Juárez

Mi muy querido amigo:

Contesto la apreciable carta de usted, de 8 del próximo pasado junio, diciéndole que recibí en Londres a principios de mayo una comunicación del ministerio de Relaciones en que consta la admisión de mi renuncia. En el mismo mes dirigí a usted una carta particular, después de haber contestado oficialmente, dándole las gracias por la admisión de mi renuncia. Supongo que usted recibiría esa correspondencia a principios de junio, la mandé por la vía de los Estados Unidos; yo todavía no tengo respuesta.

No habiendo podido irme cuando recibí la admisión de mi renuncia, por haber entrado ya la estación del vómito, he venido a esta ciudad a tomar sus aguas, que se dice son muy eficaces para el reumatismo, A principios de agosto volveré a París, de donde regresaré a México en el próximo invierno si, como lo espera, usted contesta favorablemente mi carta, citada de principios de mayo. Yo empeño de nuevo toda nuestra amistad a que usted considere mi situación: más de un año viví como ministro, sin haber recibido del supremo gobierno más que \$1,000,00. El secretario de la legación que fue a mi cargo, me debe más de \$600,00 en consecuencia se puede decir recibí \$400,00. No me obligue usted a contraer deudas para poder volver a mi casa, hoy a lo menos cuento con el capital de no deber a nadie nada.

Deseo que la situación de su gobierno haya mejorado, las noticias que hasta ahora circulan por aquí suponen que las cosas se mantienen como estaban en fin de mayo.

Ruego a usted que me dirija sus cartas por conducto de los "Sres. J. P. de Lizardi y compañía, Londres".

Deseo a usted todo género de bienes como su amigo y compañero que b. s. m.

Ezequiel Montes

OLAGUÍBEL SE PONE A LAS ÓRDENES DEL
GOBIERNO CONSTITUCIONAL

París, julio 30 de 1859

Excmo. Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
Veracruz

Mi querido amigo y compañero:

El mes pasado escribí a usted infiriéndole una nueva molestia. Si no pudiera usted servirme, no por eso dudaré nunca de su buena voluntad y mejor disposición.

Lo cierto es que estoy decidido a salir de aquí y que no puedo hacerlo sin pagar una parte de lo que debo y tener lo precisamente necesario para el viaje.

Sin embargo, si en algo me considera usted útil y de cualquiera manera, con tal que sea por muy poco tiempo, puede usted disponer de mí como guste.

Deseo a usted mil prosperidades y el final y completo triunfo, debido a su carácter y a la justicia de nuestra causa y, saludando a los amigos, quedo como siempre suyo afectísimo, muy reconocido amigo, compañero y atento deseoso seguro servidor.

Francisco M. de Olaguíbel

ESTÁN LISTAS LAS ARMAS QUE VAN
PARA MICHOACÁN

Washington, agosto 10 de 1859

Excmo. Sr. don Benito Juárez,
Veracruz

Mi apreciable amigo y señor:

El Sr. Lerdo continúa en Nueva York a donde lo veré mañana y después volveremos aquí juntos. No sé si habrá adelantado algo en su negocio, pero creo que escribirá a usted por el mismo conducto que va la presente e informará a usted de lo que haya hecho.

Están listas las armas que (el) Sr. Bravo ha de llevar para el estado de Michoacán.

En el contrato relativo a las que se han de mandar al Sr. Vidaurri, ha habido alguna dificultad y para allanarla voy a Nueva York.

Se han publicado algunas noticias de México venidas por la vía de Minatitlán, pero son tan confusas que poco se puede sacar en limpio. Lo único claro es que Miramón vuelve al lado del clero y que la reacción más bien retrocede que avanza.

Sin otra cosa por hoy, me repito de usted afectísimo amigo y servidor q. b. s. m.

José María Mata

DOBLADO SE LANZA NUEVAMENTE A LA LUCHA

Veracruz, agosto 18 de 1859

Sr. Lic. don Manuel Doblado

Estimable amigo y compañero:

Quedo impuesto con satisfacción de que cuenta usted ya con más de 3,000 hombres de guerra, para sostener en los estados del interior las leyes progresistas que acaba de expedir mi gobierno, estas leyes salvadoras, que por los temores infundados del apóstata Comonfort no se publicaron a su debido tiempo, cuando la gran familia liberal dominaba en toda la república, van a hacer época en los anales de nuestra historia. El partido del retroceso, enemigo jurado de la ilustración de los pueblos, en vano nos llamará ladrones y herejes, porque con autoridad legítima declaramos bienes del gobierno constitucional los bienes de la Iglesia, y disolutos y libertinos porque, echando abajo rancias preocupaciones, retiramos al clero la facultad de celebrar matrimonios, estableciendo a la vez los matrimonios civiles, necesidad imperiosa en el siglo en que vivimos.

La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, va a proporcionarnos cuantiosos recursos y con ellos el desarrollo en toda su plenitud de la idea liberal. La de matrimonios civiles, aunque no tan perfecta como la anterior, porque no autoriza a los divorciados a casarse en segundas y terceras nupcias en vida de los cónyuges, se reformará a su debido tiempo, pues ya sabe usted que opino con los revolucionarios del 93, cuyas ideas humanitarias nos cabe la honra de estar planteando en México, a pesar de esos búhos del retroceso que se aferran en negar que la indisolubilidad del matrimonio es una tiranía espantosa. Libertad,

libertad en todo y para todos es nuestro programa y hemos de llevarlo al cabo, así nos amenacen con excomuniones, con la muerte y el martirio, ¿Está usted resuelto a sostenerlo a todo trance? Pregunta inútil, cuando *motu proprio* se ha lanzado usted de nuevo a la campaña y merced a sus patrióticos esfuerzos tiene ya 3,000 valientes progresistas a sus órdenes.

Los Sres. Degollado y Vidaurri aspiran al mando de general en jefe del ejército federal; los dos lo han ejercido y lo ejercerían todavía alternativamente, si por una desgracia lamentable no hubiesen caído en descrédito. Las continuas derrotas del primero y el fracaso del segundo en Ahualulco, los han puesto fuera de combate. Usted y sólo usted puede llenar hoy esa vacante y de buena gana le extendería el despacho de general en jefe del ejército federal, si no temiera que los Sres. Degollado y Vidaurri se creyesen agraviados con esta providencia. De consiguiente, con toda reserva haga usted lo mejor le parezca, pase usted por segundo en jefe, pues lo primero es la armonía y mucho nos conviene que los retrógrados nos vean unidos. Cuando obtenga usted la primera victoria, los mismos Sres. Degollado y Vidaurri le cederán la palma. Espero que muy pronto nos dará usted un día de gloria con la toma de Guanajuato.

Aquí seguimos bien, no obstante la guerra que nos hace Robles Pezuela, porque ha de saber usted que en este puerto tiene el hombre sus simpatías; pero la vigilancia del Sr. (Gutiérrez) Zamora tiene a raya a los roblistas.

Siento mucho terminar carta sin poder adjuntar a usted una libranza de \$30,000 ó \$40,000; esta aduana marítima no produce tanto como cree el Sr. Vidaurri; hay que Ocampo y yo sólo recibimos medio sueldo. Los veracruzanos están bien pagados y es muy justo, porque están en su casa.

Discúlpeme usted y mande lo que fuere de su agrado a quien se repite suyo afectísimo amigo q. b. s. m.

Benito Juárez

GONZALEZ ORTEGA INDISCIPLINADO SE COMUNICA CON EL MINISTRO ESPAÑOL

Excmo. Sr. embajador de su majestad católica [S. M. C.], don Joaquín F. Pacheco
México

El infrascrito ha tenido la honra de recibir la nota de S. E. el embajador de S. M. C. de 24 del corriente. Mas como esta clase de documentos sirven muchas veces para poner bajo su verdadero punto de vista las cuestiones internacionales y, sobre todo, debiendo recogerlos la historia para presentar a la revolución actual como ella es en sí, el infrascrito de su deber, por honor de las fuerzas que manda y del gobierno legítimo que defiende, entrar en algunas explicaciones con S. E. el embajador de S. M. C.

Agradece el infrascrito a S. E. los deseos que manifiesta por la conclusión de la lucha fratricida que está desgarrando a la República Mexicana, así como la generosa mediación que ofrece para la consecución de la paz por medio de un arreglo amistoso entre las partes beligerantes, cuya mediación no acepta el infrascrito por carecer de facultades para entrar en convenios; más si le es permitido emitir su opinión respecto de este negocio, manifestará: que cree imposible que avenimiento alguno establezca sólidamente la paz en México, si se barrena bajo algún aspecto el principio constitucional, por cuyo sostenimiento han empuñado las armas, casi todos los pueblos de la República Mexicana y como éstas son las tendencias del partido conservador, de las que no cederá por motivo alguno, según lo ha manifestado en las conferencias habidas antes de la acción de la Estancia de las Vacas y del asedio que sufriera la plaza de Veracruz, cree, repite,

que por estos medios no podrá conseguirse la paz de que tanto necesita para rehacerse de los quebrantos que ha sufrido la República Mexicana.

Si las fuerzas constitucionalistas observan o no en la presente lucha los principios del derecho de gentes y, principalmente en la última época de la revolución, los hechos pueden hablar respecto de esto muy alto. Derrotados completamente en Loma Alta las fuerzas del gobierno de México, por el valiente y humanitario Gral. (López) Uruga, los señores generales, jefes y oficiales que se hicieron prisioneros en aquella jornada, fueron remitidos en carruajes y con todas las consideraciones necesarias por el general vencedor a Zacatecas, donde el gobierno constitucional de aquel estado se esmeró también en guardarles las mismas consideraciones, haciendo que sufrieran la prisión dentro y fuera de la ciudad bajo su palabra de honor y, habiendo caído prisionero en el ataque de Guadalajara el Gral. (López) Uruga y otros dos o tres oficiales, el infrascrito, autorizado por el Excmo. señor general en jefe del ejército federal, propuso un canje a todos los prisioneros de Loma Alta por los tres o cuatro que fueron hechos por el enemigo en el citado ataque de Guadalajara y habiéndose denegado el canje por don Miguel Miramón, Presidente del gobierno de México, el infrascrito puso en libertad sin restricción alguna a todos los prisioneros que se hallaban en su poder.

Derrotados poco después por el infrascrito en la hacienda de Peñuelas las fuerzas de don Silverio Ramírez, propuso de nuevo el canje en los términos anteriores y, denegado otra vez por don Miguel Miramón, volvió el infrascrito a poner en libertad absoluta y sin restricción alguna a más de 50 jefes y oficiales que fueron hechos prisioneros en aquella función de armas.

Aun no hace 20 días que fue derrotado en las puertas de Silao el mismo don Miguel Miramón por las fuerzas que manda el infrascrito, quien puso en libertad absoluta a 63 generales, jefes y oficiales que fueron hechos prisioneros, incluso algunos de los que se pusieron en libertad después de las acciones de Loma Alta y Peñuelas. En cambio de todo esto, el valiente Gral. (López) Uruga, mutilado y enfermo, continúa preso en Guadalajara; la misma suerte corren el Sr. Gral. Tapia y centenares de ciudadanos que, sin haber sido hechos prisioneros en los

campos de batalla, han sido arrojados por sus opiniones políticas a las prisiones de la Acordada, Santiago Tlaltelolco y otras. Todos estos hechos que ha palpado la nación, probarán a S. E. el embajador de S. M. C. y a los demás extranjeros residentes en la República Mexicana, si las fuerzas que obran de esta manera, defendiendo al gobierno legítimo de su país, conculcan los principios del derecho de gentes y si son capaces de pisotear los tratados celebrados por los legítimos representantes de este país en las naciones de Europa, faltando así a los preceptos del derecho internacional.

El infrascrito tiene también la honra de remitir en copia a S. E. el embajador de S. M. C. un certificado del señor vicecónsul español que prueba la moralidad de los actos del general en jefe del ejército de operaciones sobre México y la de las fuerzas que manda, así como las garantías que ha dado el mismo general en jefe a los intereses ya las personas de todos los extranjeros, incluso la multitud de súbditos de S. M. C. residentes en esta ciudad y conducta ha observado el infrascrito en los mismos días en que S. E. el embajador de S. M. C. acababa de presentar una nueva dificultad para la pacificación de la república y un obstáculo más para el triunfo de las armas que defienden la legalidad, reconociendo a un gobierno cuyo personal acaba de sufrir una derrota que ha tenido por consecuencia la pérdida de los pocos estados que poseía, a un gobierno que sólo lo obedecen las ciudades de México, Guadalajara y Puebla, ocupadas por sus tropas; a un gobierno a quien por honor de sus respectivas naciones y como prueba de neutralidad no ha reconocido el cuerpo diplomático y a un gobierno, en fin, que no debe su existencia ni a la Constitución de 1857 ni al plan de Tacubaya que creó la presente revolución, sino al escandaloso e inmoral nombramiento que han hecho 23 cortesanos de la ciudad de México, sin otros títulos ni poderes poner arbitrariamente en manos de un hombre los destinos de la República Mexicana, que el de ser notables de la ciudad de México.

Lo expuesto probará a S. E. el embajador de S. M. C. que el general en jefe del ejército de operaciones, lo mismo que su gobierno, llevan por guía en todos sus actos los principios de justicia y de

moralidad, sin dar cabida en ellos a ruines pasiones ni a innobles represalias.

El infrascrito, al manifestar con pena lo expuesto a S. E. el embajador de S. M. C. le asegura que, por el honor de la República Mexicana, por el buen nombre de las armas que defienden la legalidad y como una prueba de respeto a la civilización y al derecho internacional, todos sus esfuerzos los dedicará, como lo ha hecho hasta aquí, a garantizar la vida e intereses de todos los neutrales, ya extranjeros o nacionales.

El infrascrito vuelve a tener la honra de manifestar a S. E., el embajador de S. M. C. su aprecio y alta consideración.

Dios, Libertad y Reforma. Querétaro, agosto 30 de 1859.

Jesús González Ortega

PACHECO, MINISTRO ESPAÑOL, CONTESTA A
GONZÁLEZ ORTEGA

Embajada de España en México

Excmo. Sr. Gral. en jefe don Jesús González Ortega:

El infrascrito, embajador de S. M. C., ha recibido la comunicación del Excmo. Sr., Gral. en jefe don Jesús González Ortega, fechada en Querétaro a 30 del próximo mes de agosto.

El infrascrito deplora que su oferta de mediación no haya sido aceptada por el mencionado señor general. Respeta las causas que para ello manifiesta tener, pero siente la negativa. Cada día que pasa convence más al infrascrito de que esta guerra civil no puede terminar sino por una avenencia. Y será además una ilusión suya; pero cree que para tal avenencia, no es imposible encontrar una base.

Si uno de los partidos que luchan sustenta la Constitución de 1857 y el otro la combate, tanto el uno como el otro admiten el principio de la soberanía nacional, origen y fundamento de todas las Constituciones. ¡Por qué no acudir franca y sinceramente a ella, a esa soberanía, para que ella resuelva el conflicto que divide al país!

Si éste quiere hoy algo semejante a dicha Constitución, él lo proclamaría con su omnipotente voluntad y nadie podría resistirlo; si quiere una cosa distinta, el infrascrito cree que su derecho no debería coartarse por leyes anteriores que siempre fueron ocasión de disturbios y querellas.

El infrascrito abandona estas ideas al buen juicio del Sr. Gral. González Ortega. Las ha expuesto, aunque sin instrucciones hasta ahora del gobierno de S. M. C., inspirado por un vivo de para un país que respeta y ama. Las volverá a proponer siempre que la ocasión se le

presente, porque son el fruto de su experiencia y sus convicciones. También los españoles tuvimos en nuestra patria una guerra civil de siete años, que no terminó sino por el convenio de Vergara.

Sea lo que fuese de esta indicación, el infrascrito ha tenido mucho gusto en recibir las seguridades que le da el Sr. González Ortega acerca de su comportamiento en la lucha y sobre todo respecto a las personas e intereses de los españoles. El infrascrito ve con placer su conducta prudente y mesurada y le da las gracias por ella. No era necesario que el señor general enviase un certificado del cónsul; entre hombres de esta línea es suficiente la aseveración y la palabra. Si el infrascrito le escribió en los términos que lo hizo en su despacho del 24, el Sr. Gral. González Ortega no puede desconocer que había motivos para ello. No todos los jefes de fuerzas constitucionalistas se habían conducido del mismo modo. Sólo en lo que va del año se cuentan más de seis asesinatos de súbditos inermes y pacíficos de S. M. C.; y los hechos han sido tan públicos que el gobierno del Sr. Juárez ha comunicado órdenes a consecuencia de reclamaciones del que suscribe, para poner en prisión a los jefes Leyva y Carbajal. Vea pues, el Sr. Gral. González Ortega cómo el infrascrito, que no tenía la honra de conocerle, pudo abrigar temores y hallarse en el caso de dirigirle protestas. Satisfecho ahora con la contestación que sobre este punto recibe, reitera las gracias al señor general y descansa en las seguridades de su palabra de honor.

Alguna expresión contiene el despacho del Sr. Gral. González Ortega, a la cual la dignidad del infrascrito y la del gobierno que representa no le permiten que conteste detenidamente. En el acto a que el señor general alude, el embajador de España no ha hecho sino patentizar su carácter y seguir la necesaria conducta de los enviados de otras naciones de Europa. Nada ha estado más lejos de su ánimo que el de aumentar las dificultades para la pacificación de la República Mexicana; y la prueba de ello está en las palabras que empleó en ese acto mismo, no fueron otras sino las que podían conducir a tal pacificación.

El infrascrito aprovecha la ocasión presente para reiterar al Excmo. Sr. Gral. González Ortega las seguridades de su consideración y aprecio.

México, septiembre 4 de 1860.

Joaquín F. Pacheco

EMPIEZA A GESTARSE LA IDEA DE UN IMPERIO
EN MÉXICO

París, septiembre 11 de 1859

Reservada

Excmo. Sr. don José María Mata,
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la
República Mexicana cerca del gobierno de Washington

Excmo. señor:

Para conocimiento del Excmo. señor Presidente de la República, si es que por otros conductos no ha llegado a su excelencia [S. E.] la noticia, tengo la honra de comunicar a V. E. que don José María Gutiérrez Estrada, prosiguiendo en su temática idea de monarquía y conforme con su plan ya conocido y concertado con el presbítero Miranda, no ha desaprovechado la coyuntura de sus relaciones con el príncipe de Metternich, para hacerse escuchar, durante la corta mansión de su majestad [S. M.] el emperador de los franceses, en su residencia habitual de *Saint Sauveur*.

Es probable que todos los puntos tratados en la carta reservada que él dirigió a Miranda con fecha 14 de diciembre de 1858, fueran discutidos entre él y S. M. imperial o, por lo menos, expuestos; y es más probable todavía que haya renunciado a la idea de enviarnos un Borbón para ceñirle la corona del imperio mexicano, puesto que los Barbones no serán del agrado de S. M. Napoleón III.

Lo natural es, conociendo yo sus tendencias austriacas, el suponer como supongo, que el señor plenipotenciario secreto habrá propuesto al

soberano de Francia, para desinteresar al Austria de sus pretendidos derechos sobre la Toscana, Módena, etc., erigir un trono en México a favor del gran duque heredero del expresado ducado.

Los italianos están resueltos y se arman para repeler toda restauración monárquica, austriaca y borbónica en la península; la Inglaterra piensa hoy favorecer el movimiento italiano y, por consiguiente, si se reúne un Congreso europeo para arreglar esa cuestión insoluble, atendiendo a las bases de Villaflaca y a la revolución italiana, si se reúne ese Congreso, repito, bien podrá suceder que se proponga indemnizar a cualquiera de los archiduques austriacos estableciéndolo en nuestro país como soberano constitucional, si no absoluto,⁸ que es lo que más cuadra con las ideas del Sr. Gutiérrez Estrada y con las del mismo emperador de los franceses.

V. E. está en actitud de contrariar desde hoy ese proyecto, tratando dicha hipótesis con el gobierno de Washington, quien podría protestar también desde hoy contra toda ingerencia europea en nuestro continente.

Ruego a V. E. tenga a bien comunicar esta nota al Excmo. señor ministro de Relaciones por el primer conducto; yo me propongo trasladársela por el paquete de 1º. de octubre a fin de que por cuantos medios nos sean posibles, contrariemos sin descanso un proyecto tan liberticida y fatal a nuestra misma independencia.

Reitero a V. E. con la mayor consideración las protestas de mi respeto.

Andrés Oseguera

⁸ Subrayado en el manuscrito.

SE DESCONOCE EL GOBIERNO DE VIDAURRI EN NUEVO LEÓN

ACTA

Levantada en la ciudad de Monterrey el día 25 de septiembre de 1859

En la ciudad de Monterrey, capital del estado libre y soberano de Nuevo León y Coahuila, a los 26 días del mes de septiembre de 1859; reunidos los que suscriben y considerando que don Santiago Vidaurri con su decreto de 5 de...⁹ en que llamó al ejército del norte, se separó abiertamente de la defensa de la causa que con tantos sacrificios han sostenido y sostienen los pueblos de la república y muy particularmente los del estado; que la voluntad de éste, manifestada por sus legítimos representantes fue y es la de que se restablezca la Constitución de 1857, para lo cual se le concedieron las facultades extraordinarias de que ha estado haciendo uso; que en el decreto número 34 del honorable Congreso se dice que el estado reasume su soberanía e independencia en toda su plenitud, "mientras permanezca la república acéfala e imposibilitados los supremos poderes federales para ejercer sus funciones en el orden constitucional"; que, habiéndose establecido el gobierno supremo general y reconocido expresamente por el mismo Sr. Vidaurri ya no se puede decir, como se ha dicho, que el estado es independiente en toda su plenitud, lo mismo que una nación o potencia soberana; que, por consiguiente, el Excmo. Sr. don Santos Degollado debe considerarse legítimamente autorizado para mandar exclusivamente las fuerzas nacionales; que, considerando en estado de sitio estos pueblos, no puede desconocerse su autoridad militar en virtud de la cual ha expedido su

⁹ El periódico está roto en esa parte.

decreto de 11 de mismo mes; que los pueblos han manifestado de una manera bastante clara que están muy descontentos, tanto por el paso escandaloso que dio don Santiago Vidaurri, pretendiendo que las fuerzas de los estados abandonen la defensa de los sagrados intereses del pueblo mexicano, exponiendo así el éxito de la lucha que sostiene contra la reacción, como por muchos actos de su administración notoriamente ilegales y atentatorios a las garantías individuales y derechos del pueblo; se ha tenido a bien acordar lo siguiente:

Artículo 1.- Se desconoce completamente la autoridad de don Santiago Vidaurri en el estado de Nuevo León y Coahuila.

Artículo 2.- Mientras que se nombre constitucionalmente por los pueblos la persona que haya de desempeñar el cargo de gobernador, se reconoce como tal al Sr. Gral. don José Silvestre Aramberri, de la manera que expresa el decreto citado de 11 del presente mes.

Artículo 3.- Invítese a los demás pueblos del estado para que secunden, si ha bien lo tienen, lo que se ha acordado hoy en bien de la república y con especialidad del estado.

Ignacio Zaragoza, Bruno Lozano, Antonio Charles, José Flores, Manuel G, Rodríguez, Vicente Molina, José Ángel Sierra, Antonio Salinas, Jesús F, Treviño, Francisco Garza Treviño, Jesús María Ayala, siguen las firmas.

DEGOLLADO HACE PRUDENTES
SUS GESTIONES A JUÁREZ

San Luis Potosí, octubre 10 de 1859

Excmo. Sr. Presidente Lic. don Benito Juárez
Heroica Veracruz

Mi respetable y muy amado amigo y señor:

Hasta anteayer llegó a mis manos la grata de usted de 27 de septiembre último, y por eso en el correo anterior me limité a felicitar a usted por el pronto y pacífico término de la rebelión de Vidaurri, quien cayó en el albañal en que se rehuye Comonfort por su mala cabeza y peor gusto.

Mucho celebro que mi conducta haya merecido la aprobación de usted y me complazco en que ninguna dificultad haya resultado de este incidente de que nos debemos alegrar. El alentó mucho a la reacción y por eso con noticia de él se dieron órdenes para que se formalice la expedición sobre esta plaza, lo cual hasta ahora no se verifica.

Yo también tengo noticia de que la conspiración que debió estallar en México el 5 de septiembre, quedó organizada, a pesar de la prisión de 28 jefes y oficiales de la guarnición, que fueron capturados, Miramón tuvo al fin que capitular con el clero y se ha comprometido a restablecer en la Presidencia, del distrito a Zuloaga y a salir él a dirigir la campaña en el interior. Con motivo de ese arreglo hubo comilonas y brindis en México, según cartas que recibió don Francisco Verduzco.

Muy importante es la especie que usted me comunica respecto a don Severo Castillo, la cual aprovecharé en la primera oportunidad que se presente para atraerlo al buen camino. Como las garantías que él quiere para sí y para los suyos, supongo que versarán sobre

aseguramiento de empleos militares, sin perjuicio alguno de la Constitución ni de la Reforma, opino que se las debemos conceder en ahorro de sangre y de tiempo y también para evitar que los Vidaurris, de que por desgracia tenemos muchos, nos desnaturalicen la revolución y nos lleven a una anarquía entre los mismos liberales, que haga imposible el triunfo y la consolidación de los principios que defendemos.

Sea enhorabuena por la expedición de Iniestra, que nos hará muy útil contrapeso, llamando la atención del enemigo por Tehuacan, Orizaba, etc. Si tuviéramos recursos pecuniarios bastantes, yo podría concentrar ya 15,000 hombres para limpiar el Bajío, tomar Guadalajara y marchar sobre México, con más de 20,000 soldados, que no encontrarían resistencia.

Doblado me da oficialmente parte de un triunfo obtenido por una sección de sus fuerzas sobre 300 reaccionarios mandados por el bandolero español Máximo González, quien pretendía tomar la capital de Aguascalientes; la derrota fue cerca de Villita y se hicieron veintitantos prisioneros y un oficial, se recogieron armas y caballos que menciona el parte que mandaré impreso al ministerio de la Guerra.

El Sr. González Ortega logró aprehender a un Gral. Jiménez y otros que iban para Chihuahua vestidos de frailes a insurreccionar al estado. El comité de salud pública sentenció a muerte al primero y ya debe haber sido ejecutado, Se le encontraron despachos y cartas de Zuloaga que justifican la prueba del delito y la guerra que iba a hacer Jiménez a Miramón por encargo del mismo Zuloaga. Yo mandaré esos documentos a México, para que los reciba Miramón y se sople al tallador.

La nota del ministerio de la Guerra en que se aprueba la destitución de Vidaurri y el nombramiento de Aramberri, la mandé transcribir a éste y a los jefes de las divisiones en campaña para que se comuniquen a las tropas por las órdenes del día. Doy a usted mil gracias por la deferencia y bondad con mis disposiciones.

Para que vea el Sr. Ocampo, sin repetirle yo, las noticias aquí contenidas, suplico a usted le enseñe la presente.

El Gral. Álvarez está en el Jaral, al frente de una brigada. Benito y Joaquín retornan con afecto a las bondadosas expresiones de usted.

Deseo que usted se mantenga muy bueno, que Dios le de mucho acierto y felicidad en su gobierno y que mande lo que guste a esté su afectísimo y reconocido amigo y muy atento servidor q. s. m. b.

Santos Degollado

COMUNICACIÓN DE LAFRAGUA DIRIGIDA AL GENERAL
ALMONTE CONTRA EL TRATADO QUE FIRMÓ

Legación de México cerca de su majestad católica
París

París, octubre 4 de 1859

Excmo. Sr. Gral. de división, don Juan Almonte

Excmo. señor:

La Prensa, el Diario de los Debates, la Opinión Nacional y otros periódicos de esta capital, copiando un párrafo de la correspondencia autógrafa de Madrid, han anunciado que V. E. y el Sr. Mon, han firmado una convención que termina las diferencias entre México y España. Cumpliendo con las órdenes del supremo gobierno constitucional, protesto en nombre de la república contra ese arreglo, sea el que fuere, dejando enteramente a salvo los derechos y los intereses de la nación y reproduciendo todas las razones alegadas en mis protestas de 16 de marzo de 1858 y 8 de junio del presente año; de las cuales remito a V. E. nuevamente un ejemplar.

Reitero a V. E. mi muy distinguida consideración.

José María Lafragua

LAFRAGUA COMENTA EL TRATADO MON-ALMONTE

París, octubre 5 de 1869

Excmo. señor ministro de Relaciones
del gobierno constitucional

Excmo. señor:

Tengo la honra de acompañar a V. E. copia de la comunicación que ayer he dirigido al Sr. Gral. don Juan N. Almonte con motivo de la noticia, ya tan solemnemente publicada, del arreglo hecho con el gobierno español. Acaso, y yo lo deseo para honor del país, habrá alguna inexactitud en las bases que se han fijado al convenio y que V. E. verá en la tira de *La Opinión Nacional*, que incluyo; mas si así no fuere, sí el arreglo es tal como se anuncia, preciso es convenir en que el gobierno reaccionario ha puesto el sello del vilipendio en un negocio tan esencialmente perjudicial a los derechos y a los derechos y a los intereses de la nación.

¿Qué es de la independencia, si se ha de indemnizar por cualquier delito privado? ¿Qué es del decoro de la república, sino sólo se pagan créditos indebidos, sino que se indemniza a los que abusivamente los introdujeron en la convención? Doy mil gracias a la providencia por haberme librado de tener parte en tan injusto convenio; pero como mexicano deploraré siempre que haya habido un gobierno, aunque no sea legítimo, que así haya abierto una nueva fuente de males y de compromisos para la nación.

No sé lo que responderá el Sr. Almonte a mí nota; pero, sea cual fuere su contestación, puede V. E. estar seguro de que no comprometeré en una sola línea la gran responsabilidad que consigo trae tan importante negocio.

Si algo grave ocurriere, volveré a escribir a V. E. por los Estados Unidos.

En mi concepto las dos protestas solemnes que he impreso y circulado, bastan para dejar libre al gobierno constitucional cuando llegue el caso de obrar. Sin embargo, será útil que ese ministerio dirigiera una nota al gobierno americano o que por medio de un formal decreto desaprobara el convenio, a fin de que no quedara duda de su resolución. El primer medio nos aseguraría el apoyo de los Estados Unidos cuando llegara el caso; por cuya razón debería hacerse otro tanto con Inglaterra y Francia luego que reconozcan al gobierno constitucional.

Reitero a V. E. mi muy distinguida consideración.

José María Lafragua

LAFRAGUA INFORMA DE SUS GESTIONES CONTRA EL
TRATADO MON-ALMONTE

París, octubre 22 de 1859

Excmo. señor ministro de Relaciones
del gobierno constitucional

Excmo. señor:

Tengo la honra de remitir a V. E. copia de la comunicación que el día cuatro dirigí al Sr. Gral. Almonte y de la que el día cinco dirigí a V. E. por los Estados Unidos.

Hasta hoy nada me ha contestado el Sr. Almonte como tampoco lo ha hecho a las protestas de 16 de mayo y seis de junio del año pasado y a la de ocho de junio del presente. De la primera y de la última remito a V. E. ejemplares, no haciéndolo de la segunda, porque ésta fue una simple nota en que reproduje la de marzo.

Por más diligencias que he hecho, no he conseguido conocer el texto del convenio; pero, según todas las noticias que tengo, es indudable que se ha celebrado accediendo a todas las pretensiones de España.

El País, en un artículo decididamente encomiástico del gobierno reaccionario, entra en algunos pormenores, que creo muy graves, y que por lo mismo referiré a V. E., aunque no se dicen tomados de una fuente oficial.

Afirmase, pues, que México se ha obligado a castigar a los culpables que aún falten y que concede la indemnización a España, sin reconocer el principio de indemnidad y sin que este hecho pueda nunca citarse como un precedente; de donde infiere el autor del artículo que el

convenio es muy bueno, porque España recibe una satisfacción y México nada hace contrario a su dignidad.

Si tales son los términos del convenio, puede creerse por los que examinen someramente el negocio que, en efecto, se han salvado los derechos, ya que no los intereses de la república, y como el desprendimiento es la base del carácter mexicano, se dirá también: que el gobierno, salvando el decoro nacional, ha sido generoso con la antigua madre patria.

Más, sobre esto me permitiré hacer a V. E. algunas reflexiones. En primer lugar; las naciones no son como los individuos. Éstos pueden consentir en pagar lo que no deben, sin que por esa generosidad les resulte ni mengua ni perjuicio; pues no porque un hombre pague lo que no debe, se establece un principio que pueda servir después de argumento contra los demás, ni aun contra él mismo. Pero las naciones no pueden obrar de esa manera; porque lo que una vez han concedido a otra, es reclamado a su turno por las demás; ya porque en el derecho internacional siempre los hechos obran contra el que los ejecuta, ya porque en todo caso se hace valer el para nosotros tan funesto axioma de conceder a todas lo que a la nación más privilegiada.

En consecuencia: nada importa que México indemnice sin reconocer el principio de indemnidad en términos absolutos porque siempre se presentará el hecho como una prueba; resultando de ahí, que queda establecido el precedente que ya resistí con tanto empeño, por más que el texto del convenio diga que queda establecido.

Más aún: permitiendo que este falso supuesto fuera una verdad, lo más que podría sostenerse sería que España no podría en lo venidero fundar otras reclamaciones en el último convenio. Pero ¿podremos responder con éste a las demás naciones? El día que tengan algo que reclamarnos, en vano les diremos que al pagar a España, no reconocimos el principio; porque nos instarán alegrando el hecho y tendremos que pagar a todas, sin justicia, sin obligación y sólo por generosidad, ¿Cómo, en efecto, a la Francia, a la Inglaterra, a los Estados Unidos, lo hemos concedido a España? ¿Vale más esta nación aquéllas? ¿No son todas iguales ante la razón y la justicia? ¿No está justamente escrito en nuestros

tratados que debemos a todos los extranjeros, protección y amparo? ¿Cómo pues, nos salvará de una reclamación la frase escrita en el convenio, ajustado sólo por los representantes de México y España, cuando de hecho hemos indemnizado sin encontrarnos en los casos que señala el derecho de gentes?

Creo, por lo mismo, que esa reserva diplomática, que más bien merece el nombre de torpe subterfugio para travestir en hidalguía la debilidad, es un germen tristemente fecundo en disgustos, perjuicios y desdoro de la república, que indudablemente tiene que agregar un principio de todo punto inicuo a su derecho internacional y que registrar en sus anales un hecho mas funesto que otros de los que forman el largo catálogo de nuestros errores.

Se dice que el convenio es honroso; en mí concepto es poco digno ambos países. Lo es para España porque recibe de gracia lo que reclamó de justicia; porque acepta como favor lo que sostuvo como, derecho. Lo es para México, porque paga sin deber; porque satisface sin haber ofendido; puesto que no reconocido el principio de indemnidad, España ha confesado que el crimen de San Vicente fue un delito común y México, sin conciencia, ha hecho suya la causa de los asesinos. ¿Dónde y cómo está salvado el decoro nacional? Menos malo habría sido confesar que nos hallábamos en los casos señalados por el derecho de gentes; porque en esa confesión había habido franqueza y porque ni es nuevo en el mundo, ni degradante para un pueblo que haya algunos funcionarios suyos que no cumplan sus deberes, Pero establecer que no nos encontramos en aquellos casos y sin embargo indemnizar, es un acto que no puede explicarse más que al espíritu de partido, para el cual se pierden los principios en el torbellino de las pasiones.

Y sí a esta parte tan poco satisfactoria del convenio, se agrega la relativa a la convención pura y simplemente reconocida, según parece; ¿qué queda de la justicia, de la honra, del nombre de México? ¿Para qué hemos luchado 11 años en la cuestión de créditos indebidamente cobrados y cerca de tres en la de crímenes indebidamente juzgados? Si aquellos de hecho no se revisan y éstos de hecho se califican, pagamos el dinero que no debemos y la sangre que no derramamos, dilapidando en

ambos casos los intereses y conculcando en ambos los derechos de la república.

He creído de mi deber presentar al supremo gobierno estas observaciones, porque aunque no tengo seguridad de que el arreglo se haya celebrado en los términos que he referido, sí es muy probable que contenga las ideas que expresa *El País*, en cuyo caso es muy conveniente que se pongan las cosas bajo su verdadero aspecto, a fin de evitar trascendentales errores en la apreciación de los hechos.

Reitero a usted mi muy distinguida consideración.

José María Lafragua

EL OBISPO DE CHIAPAS Y EL GENERAL VIDAURRI

Veracruz, octubre 13 de 1859

Sr. don Ángel Albino Corzo

Mi estimado amigo:

Ya se da orden al Sr. Dueñas para que auxilie a usted con fuerza armada y además se remitirán a usted algunas armas y cápsulas. Recomiendo al Sr. Dueñas que proceda con toda actividad. Creo que obrando usted con la actividad y energía de que tantas pruebas ha dado, logrará dominar la situación, en el concepto de que los reaccionarios de ésa no pueden ser auxiliados por nadie de los gobernantes de Tacubaya, porque éstos están ya a la defensiva y próximos a sucumbir. Al obispo debe usted mandarlo prender y remitirlo para este puerto, por la vía de Tabasco, lo mismo que a los demás cabecillas y revoltosos, pues no es bueno mandarlos a Centroamérica.

Vidaurri, quería hacer su voluntad en Nuevo León y que porque se le quiso hacer entender que había un gobierno cuyas órdenes debía obedecer, se declaró neutral, ha caído ya para no levantarse jamás. La paz se ha restablecido en la frontera del norte y en nuestras fuerzas, sin el obstáculo de Vidaurri, operan ya eficazmente contra los reaccionarios del interior, lo que imposibilita que triunfe la reacción. Esfuerzo y constancia y con otro poco de tiempo y cantaremos victoria completa. Obre usted dictando cuantas medidas demanden las circunstancias en el concepto de que se aprobará cuanto usted hiciere.

Nada de transacción con los enemigos, nada de impunidad para los culpables; la Constitución y los decretos de Reforma deben cumplirse al pie de la letra.

No deje usted de escribirme ordenando cuanto guste a su amigo afectísimo q. b. s. m.

Benito Juárez

DEPLORABLE SITUACIÓN DE LA BAJA CALIFORNIA

Rancho Samuel, California, noviembre 19 de 1860

(Capitán H, S. Barton):

En junio último Castro salió del Sauzal de Camacho para San Francisco, dejando a Esparza encargado del mando durante su ausencia. En el mes de septiembre Castro escribió a Esparza que celebrase una junta de los habitantes y tratase de anexar la frontera a los Estados Unidos. Esparza expidió en consecuencia una proclama oficial, convocando a todos los ciudadanos de la frontera a que se reuniesen en Santo Tomás el primero de octubre. La reunión se verificó pero, habiéndose conocido accidentalmente el objeto de ella, Esparza fue aprehendido y juzgado como traidor. Ryesson funcionó como primer comandante de la fuerza. Esparza fue declarado criminal y enviado a La Paz pero, en lugar de enviarlo bien escoltado, sólo un hombre fue destinado a custodiarlo. Cerca de las islas Elide se encontraron con un famoso criminal, llamado Cipriano Castro, quien venía huyendo de La Paz a consecuencia de los crímenes que allí había cometido. Juntos los dos, Castro y Esparza, se desembarazaron del guarda ya sea porque lo mataron o lo dejaron a pie y se volvieron a la frontera en donde se mantuvieron ocultos hasta que el padre francés tuvo tiempo de reunir unos cuantos partidarios de Esparza y entonces, durante el silencio de la noche, atacaron la casa de José Sáenz e hicieron prisionero a éste. Toda la propiedad de Sáenz fue confiscada, y como a consecuencia de esto Esparza tuvo a su disposición gran cantidad de ganado vacuno, su fuerza aumentó considerablemente. Se dice que estuvo recibiendo considerable refuerzos de indios. Esparza marchó después con toda su y tomó posesión de la casa de Guadalupe, la cual fortificó y conserva como su cuartel general. Envío una partida para que

arrease todos los animales de cualquiera clase pertenecientes a Ryesson, cuya propiedad ha declarado confiscada y al mismo Ryesson lo ha declarado rebelde. También se ha apoderado de todo el ganado de Rivas, cosa de 1,200 a 1,500 cabezas, 200 mulas de José Sáenz y ha confiscado las propiedades de todos los que se le oponen. Ryesson está Dios sabe dónde y su familia completamente desamparada. Nadie sabe el resultado que esto tendrá. Porter, un comerciante de Sauzal de Camacho, está cogiendo una cosecha dorada con motivo de esta revolución, pues Esparza le compra cuanto necesita para sí y para su valiente brigada y le paga con los animales de los vecinos de posta y los cuales envía al otro lado de la línea en California, a medida que los reciba.

Sin firma¹⁰

¹⁰ Véase carta del ministro José María Mata en este tomo, en la que, sin dar el nombre, considera “persona fidedigna” a quien firma el original.

SIGUE LA TRATA DE INDIOS MAYAS

Gobierno del estado de Yucatán

Sr. don Manuel Dondé:

Estimulado por el celo patriótico con que se ha servido usted acreditar su deseo de cooperar con este gobierno a la consolidación del orden público y a remover los inconvenientes que se le presentan en la marcha que se ha propuesto seguir para corresponder dignamente a la confianza de los pueblos, sobre todo respecto del vital asunto de poner término a la asoladora guerra de castas, me dirijo a usted con la mayor confianza de obtener la acogida más satisfactoria poniendo en su conocimiento que por haber faltado don José Jesús Madrazo al cumplimiento de las condiciones con que se le concedió permiso para contratar y extraer a los indígenas que cayeron prisioneros en otra guerra, he declarado hoy en libertad al gobierno para concederlo a cualquiera otra persona o sociedad, previniendo a la jefatura de Hacienda que no reciba cantidad alguna en cuenta del permiso expresado.

Por esta circunstancia a que me ha obligado la falta de pago de las mensualidades ofrecidas por el referido Madrazo, en ocasión de haberse multiplicado los gastos con motivo de estarse ya revistando las tropas que van a formar la expedición que debe salir de Valladolid en el próximo mes de diciembre sobre el campo enemigo, me encuentro en la imperiosa necesidad de arbitrar recursos extraordinarios con la mayor prontitud para no malograr los gastos y trabajos adelantados en la reunión de otras tropas.

En este concepto y convencido de la imposibilidad de imponer contribución ni préstamo alguno forzoso, así como de la eficacia con que usted en unión de los señores [Sres.] don Manuel José Peón y don Juan

de Regil pueden conseguir del comercio o de los propietarios reunir 8,000 pesos mensuales por tres meses para sacar a este gobierno del conflicto en que se encuentra, he tenido a bien nombrarles con este objeto, esperando que a la mayor brevedad posible se servirán practicar las diligencias convenientes y reunirse en la de mi habitación llevando las proposiciones que hagan o les sean hechas para que tenga efecto aquel suplemento urgentísimo.

Por la convicción en que estoy del satisfactorio resultado que ha de tener esta importante comisión, tengo el gusto de anticipar a usted la más expresivas gracias y de asegurarle mi particular aprecio.

Dios y Libertad. Mérida, noviembre 24 de 1859

S. Rendón
Secretario

Agustín Azarate

LIQUIDACIÓN DE LOS SUELDOS DEL PRESIDENTE JUÁREZ

Cuenta de las cantidad de que ha vencido y recibido el ciudadano señor Presidente constitucional de la República, Lic. don Benito Juárez, desde el 19 de enero de 1858, hasta la fecha, y de las cuales han sido sacadas por el que suscribe las ministradas por la jefatura de Hacienda del estado.

Vencido

Por su sueldo del 19 al 31 de enero de 1858, ambos días inclusive	\$ 1,224.69
Por íd. íd de un año transcurrido del 1º. de febrero de 1858 al 31 de enero de 1858, ambas fechas inclusive	36,000.00
Por íd. íd. de 10 meses transcurridos del 1º. de febrero de 1859 a la fecha	30.000.00
	\$ 67,224.69

Recibido

En Guanajuato	\$ 4,000.00
En Guadalajara	100.00
“ “ del Sr. Aguilar	100.00
“ “ del Sr. Parrodi	...480.00
“ “ para el viaje de Colima	160.00

Entregado en oro abordo del <i>Stephens</i>	958.00
Pasaje del Manzanillo a Nueva Orleáns	227.50
Por cuatro mesadas de \$200.00 cada una ministradas en Oaxaca en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1858 a la señora del Excmo. señor Presidente, según oficio del Excmo. señor gobernador de aquel estado, fecha 22 del mismo septiembre	800.00
En Veracruz del Sr. Garmendia	356.00
“ “ de la jefatura de Hacienda el 31 de mayo de 1858	1,000.00
“ “ 30 de junio de 1858	1,000.00
“ “ 24 de julio de 1858	350.00
“ “ 18 de diciembre de 1858	100.00
“ “ 24 de diciembre de 1858	350.00
	\$ <u>9,981.50</u>

En Veracruz de la jefatura de Hacienda el 31 de enero en un libranza sobre Nueva Orleáns	\$ 165.38
“ “ la misma oficina el 28 de febrero de 1859	3,000.00
“ “ 31 de mayo de 1859	2,000.00
“ “ 30 de junio de 1859	3,000.00
“ “ 30 de julio de 1859	3,100.00
“ “ 31 de agosto de 1859	3,000.00
“ “ 30 de septiembre de 1859	2,500.00
“ “ 31 de octubre de 1859	3,100.00
“ “ 30 de noviembre de 1859	2,800.00
	<u> </u>

\$ 38,177.81

Veracruz, noviembre 30 de 1859.

Matías Romero

UNA CORBETA ESTADOUNIDENSE
COMETE ATROPELLOS EN GUAYMAS

República Mexicana, gobierno del estado de Sonora

Excmo. señor ministro plenipotenciario de la república mexicana en Washington

Excmo. señor:

Al Excmo. señor ministro de Relaciones Exteriores de la República digo con esta fecha lo siguiente:

Excmo. señor:

Ocurrencias de seria consideración, acaecidas en el estado de mi mando con motivo del arribo a este puerto de la corbeta de los Estados Unidos *St. Mary's* su comandante W. O. Porter, motivan la presente comunicación a la que acompaño todos los documentos justificativos para que V. E. se penetre mejor de la situación que guarda el país y peligros a que se halla expuesto. El día cinco del mes pasado fondeó en este puerto de corbeta antes dicha y su comandante el Sr. Porter dirigió al gobierno en Hermosillo la protesta -documento número 1- de que acompaño copia, al señor prefecto del distrito de Guaymas a cuyo empleado, así como a los otros que ocupan los diferentes destinos de este puerto, mostró desde luego una prevención muy marcada por considerarlos, según privadamente ha dicho, autores del destierro del señor comisionado de deslinde don Carlos P. Stone, sin atender a que las autoridades de este

puerto no podían dictar una providencia semejante sin que ella emanara de la superioridad.

Adjunto a V. E. -documento número dos- mi contestación a la protesta del Sr. Porter redactada con toda la moderación necesaria, atendido el carácter insultante que sus conceptos encierra, tanto para el estado de Sonora cuanto para todos los demás que componen la confederación mexicana.

Antes de que el Sr. Porter recibiera la contestación del gobierno y cuando el prefecto de este distrito estaba fuera del puerto, ocupado de la persecución de los indios yaquis, que habían invadido la población de San José de Guaymas, asesinando a sus habitantes y robando cuanto allí encontraron, mandó el mismo comandante enarbolar en una casa particular, la del ciudadano americano Fawelly Allden, la bandera de los Estados Unidos, fijando en una ventana de la misma casa el escudo de armas de su nación y proclamándolo por sí, ante sí y sin el conocimiento respectivo de la autoridad competente, vicecónsul de los Unidos de América en este puerto, V. E., sin que me esfuerce en persuadirlo, conocerá lo impropio e insultante de tal conducta, que no fue reprimida por el señor prefecto del distrito a su cargo por las recomendaciones que de mí tenía para no dictar una providencia que pudiera comprometer la situación, sin dar antes conocimiento de ella al gobierno.

Considerando por lo antes expuesto y que por extraordinario se me comunicó, que la presencia del gobierno en este puerto se cada vez más y más necesaria, inmediatamente me puse en camino para él, a donde llegué y después de las visitas de ceremonia que en tales casos se acostumbran, tanto la del Sr. Porter como la mía, acordamos tener una conferencia privada para en ella zanjar amistosamente las diferencias que se habían suscitado respecto del vicecónsul, su bandera y cualquiera otra que tuviera entonces o después el señor comandante americano.

La conferencia tuvo lugar el 31 del mes pasado; en ella exigió el Sr. Porter que fuera reconocido el Sr. Fawelly Allden como vicecónsul de los Estados Unidos y que pudiera enarbolar su bandera consular cuando gustara, concluyendo con pedir una explicación al gobierno sobre la conducta observada con el ciudadano americano Carlos P. Stone y los de su comisión, quienes pedía fueran admitidos nuevamente en el estado y permitiéndoles ejercieran su comisión de deslinde.

Fawelly Allden es un ciudadano americano que hace más de un año reside en este puerto ejerciendo la profesión de fabricante de ladrillos, muy propio por sus conocimientos de esa ocupación u otra semejante, pero sin los suficientes para desempeñar el encargo de vicecónsul en el que nunca será mas que un instrumento que se doblegue fácilmente a insinuaciones. Sin embargo, Fawelly Allden deriva su nombramiento del Sr. don Roberto Rose, cónsul de este puerto, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, quien en mayo del corriente año a su patria, delegando su destino en el expresado Allden, quien lo ejerce hoy por exigencia del comandante Porter.

El gobierno, no obstante que reconoce la ilegalidad de tal sustitución, a la que de ninguna manera podía, convenirle el *exequátur* general dado por el supremo gobierno en 23 de abril anterior; no obstante que sabe que por muchas leyes está prohibido a los cónsules extranjeros enarbolar en nuestros puertos los pabellones de sus respectivas naciones, considerando que el comandante Porter no cejaría de sus pretensiones y que comprometería atropelladamente la situación -pues tal hasta ahora creo que sea su intento- convino con el Sr. Porter en reconocer a Fawelly Allden interinamente como vicecónsul y permitirle enarbolar su bandera que para ambos se solicitara por el interesado el correspondiente permiso y sujetando todo a la aprobación del gobierno constitucional de la república.

Respecto al Sr. don Carlos P. Stone y su comisión, el gobierno declaró terminantemente al comandante de la *St. Mary's* que el ciudadano Carlos P. Stone y los de la misma nación que lo acompañan, no habían sido lanzados del estado como ciudadanos americanos sino como empleados en una comisión de mensura propia y exclusiva del gobierno de la república, a cuya decisión se sujetaría el asunto, que como súbditos de una nación amiga, como la de los Estados Unidos, podían regresar a Sonora y ejercer dentro de él las ocupaciones que mas a sus intereses convinieran. Convino el Sr. Porter en que la decisión del asunto de deslinde aplazada hasta que de él tuvieran conocimiento los gobiernos de ambas repúblicas, conformándose con que se permitiera el regreso de Stone y ciudadanos americanos que lo acompañaron fuera del estado sin obstáculo ni oposición alguna.

Bajo la carpeta número tres, acompaso a V. E. los documentos relativos al reconocimiento de Fawelly Allden, ciudadano americano, como vicecónsul de los Estados Unidos de América, permitiendo en su casa consular el uso de la bandera. Por lo expuesto y por los documentos relativos observará V. E. que ha sido necesaria toda la circunspección del gobierno y todo el deseo vehemente que lo anima, para evitar un rompimiento entre nuestra república y la vecina del norte, permitiendo que se le impusiera la obligación de reconocer un vicecónsul que ninguna misión legal puede ejercer, tanto porque esa misión no deriva de autoridad legal, cuanto porque el *exequátur* general a que se aludes no puede alcanzarle a él ni tampoco a su antecesor delegante, el Sr. Rose, quien a la fecha de la circular de 23 de abril no ejercía función consular alguna, no siéndole por consiguiente aplicables las prevenciones de ella. En la misma carpeta de los documentos relativos al vicecónsul Aliden encontrará V. E. una comunicación de este individuo, anterior a su reconocimiento, en que perentoriamente pide al juez de 1ª. instancia de este lugar la

excarcelación y relevo de toda fianza al ciudadano americano José María Vincent, bígamo, a quien aquella autoridad juzga con arreglo a las leyes, cuyos trámites quiere que se festinen en obsequio de aquel criminal.

Después de la conferencia privada de que anteriormente me he ocupado, ningún nuevo incidente vino a turbar las relaciones amistosas existentes entre este gobierno y el comandante de la *St. Mary's* hasta la venida de este puerto del Sr. capitán del ejército de los Estados Unidos, R. S. Ewell, quien, procedente del fuerte Buchanan, se presentó en este puerto con la misión de su gobierno, privadamente se me dijo, de protestar contra la expulsión de *mister* [Mr.] Stone, misión que creyó no deber ya desempeñar, atendido a lo que el particular había ya tratado el Sr. Porter. La llegada de este nuevo personaje americano, digno por su circunspección y miramientos de respeto y a quien el gobierno debidamente atendió, reanudo más las relaciones entabladas con el señor comandante americano y, cuando creía que éstas no se turbarían fácilmente, la vuelta del Sr. capitán Ewell a Hermosillo, de tránsito para las posesiones de la república vecina, vino a ser causa de una nueva diferencia, que estuvo a pique de turbar la paz que reinaba y que aún a trueque de diferencias tal vez humillante para el país, me había esforzado en conserva.

La noche del 17 del actual se presentó el Sr. Porter a este gobierno, manifestándole por medio de su intérprete que un asunto de la mayor importancia y de graves consecuencias si no era atendido lo hacia presentarse, reclamándome que inmediatamente le diera órdenes que las autoridades de Hermosillo dejaran en libertad al Sr. capitán de los dragones de los Estados Unidos R. S. Ewell, restituyéndole una mula de su propiedad que allí se le había quitado, relevándolo de toda responsabilidad en el asunto y proporcionándole a más una escolta competente pagada por el estado, para llevarlo con seguridad e inmediatamente fuera de las posesiones

mexicanas; previniendo al juez que lo detenía lo dejara seguir libremente su camino.

El gobierno, faltó hasta aquella hora de los antecedentes relativos a un suceso tan extraño como inesperado, contestó al Sr. Porter que en espera de los informes que de un momento a otro deberían llegarle, nada podía contestarle definitivamente ni podía darle las ordenes que se exigían pero que aseguraba que el Sr. Ewell sería debidamente atendido por las autoridades con toda la justicia que tuviera, la cual el gobierno cuidaría de que se impartiera en toda su plenitud castigando, en caso contrario, a los que la desatendieran conforme a las leyes del país a las que todos debíamos someternos. El Sr. Porter se manifestó disgustado de una negativa tan justa como legal, salió de la casa de gobierno donde teníamos la conferencia y con escándalo de toda la población de Guaymas, nacionales y extranjeros aun de su misma nación, entre 9 y 10 de la noche mando alistar 100 hombres de la corbeta *St. Mary's* que en cinco embarcaciones del mismo buque, armadas de dos obuses, se dirigían a esta plaza a tomar posesión de ella según después privadamente he sabido por algunos de la tripulación suya. Afortunadamente para los que componían esa fuerza el Sr. Porter entró sin duda más tarde en reflexiones más pacíficas y, cuando ya sus embarcaciones estaban a menos de un tiro de pistola del muelle, recibieron de él orden de suspender su marcha y de regresar a suelo, lo que verificaron. Dejo a la calificación de V. E. la conducta de ese funcionario americano y el resultado que le hubiera dado una expedición tan descabellada en la que indudablemente hubiera sacrificado los 100 hombres de su tripulación, teniendo como yo tenía en tierra, a doble fuerza a la suya exaltada toda por los sucesos que presenciaba. El desembarco de esa fuerza y su destrucción hubiera comprometido desde luego las buenas relaciones que yo había procurado conservar y, lo que es más sensible, hubiera sido causa de innumerables víctimas sacrificadas al

capricho y exaltación de un solo hombre que, según él mismo públicamente dice, quiere hacerse célebre con un atentado de esa clase que, a semejanza de los hechos de su padre, llame la atención del mundo, sin considerar que esos hechos de su antepasado estaban sellados de la justicia que asistía a la nación americana para emanciparse de una dominación extraña, para recobrar su independencia y libertad.

A las ocho de la mañana siguiente, 18 del actual, el cónsul americano Fawelly Allden, personalmente, fijó en las esquinas y públicas de este lugar el aviso que verá V. E. en el legajo numero cuatro relativo a este asunto, amenazando a la población, con un bombardeo inmediato que tendría lugar pasadas las 12 del día: la *St. Mary's* inmediatamente levó sus anclas y aproximándose más a los muelles de la bahía se apoderó a corta distancia de ellos para indicar que las amenazas se llevarían a puro y debido efecto. El gobierno, constante siempre en llevar las cosas al extremo sin provocar por su parte un conflicto, dirigió al señor comandante la nota, que verá V. E. en que le acompañaba los informes que por extraordinario había esa mañana mismo recibido de las autoridades de Hermosillo referentes a la cuestión del Sr. Ewell con ellas, probándole que ningún acto arbitrario se había cometido y contestando a otra nota por él pasada diciéndole que si el Sr. Ewell necesitaba bestias, escoltas u otros auxilios del gobierno, este tendría mucho gusto en facilitárselos a su pedimento. La actitud firme aunque conciliadora del gobierno impuso sin eluda al Sr. Porter, quien vio burlada su esperanza de que la cuestión Ewell motivara el conflicto que desea y esta suposición mía es tanto más verosímil cuanto que la misma mañana a la diez de ella en que fueron los señores cónsules de Francia y España a conferenciar con el expresado comandante, sin duda para informarse de la realidad del bombardeo, el Sr. Porter les aseguró que si antes de las 12 del día no recibía del gobierno las satisfacciones por él pedidas a las tres de la tarde

comenzaría irremisiblemente el bombardeo de la población que no cesaría hasta que quedaran reducidas a cenizas todas sus casas, respetando únicamente aquellas que pertenecieran a súbditos extranjeros, encargándoles en consecuencia que a esa hora sus nacionales y familias tomaran refugio en los consulados o fuera de la ciudad, para que sobre ellas no recayera inmediatamente por su parte una desgracia. Difícil es de concebir, Excmo. señor, la alarma que tales amenazas, unidas a la actitud hostil, infundo en las familias de este puerto; los hombres se presentaron a la autoridad pidiendo armas con qué defenderla, mientras que sus familias solas, a pie y con sus tiernos hijos en los brazos, abandonaban sus casas y salían a los caminos y cerros que circundan la bahía en medio de un sol abrasador. El Sr. Porter no pagaría con su vida los daños, perjuicios y desgracias que estos habitantes han sufrido en ese aciago día. Si es lastimoso referir a V. E. ese cuadro me es muy grato decirle que nunca como entonces se ha mostrado más claramente el patriotismo sonorense hombres, ancianos, niños todos victoreaban la independencia e integridad de su nación y todos, a porfía, pedían armas a la autoridad con qué defenderla, llegando la exaltación en aquel momento al extremo de dirigirse una gran parte del pueblo a la casa consular, escalarla, arriar la bandera americana de el asta en que estaba izada y hacer pedazos el escudo de armas de la misma nación, que estaba clavado en una ventana. Esta exaltación fue luego reprimida por la guardia nacional, la bandera americana fue recogida del pueblo y el gobierno inmediatamente mandó un comisionado a bordo de la corbeta *St. Mary's*, quien la entregó a su comandante dándole las debidas explicaciones sobre el hecho, las que fueron bien atendidas quedando el expresado señor satisfecho con ellas. La actitud imponente del gobierno y esa exaltación extrema del pueblo en el más crítico momento, que presencié el vicecónsul americano, quien inmediatamente se refugió a bordo del buque

de guerra de su nación, probó al Sr. Porter que a todo estaban resueltos el gobierno y los habitantes de este puerto y que si bien bombardearía a mansalva, no por eso sucumbiría sino después de haberlo en efecto reducido a cenizas; en consecuencia difirió sus amenazas hasta el día siguiente, en cuyo día recibió el gobierno un extraordinario de Hermosillo con carta abierta del Sr. Ewell para él, de que tengo el honor de acompañar una copia. La ocurrencia antes dicha y sin duda la carta venida de Hermosillo han cambiado de tal manera la disposición del Sr. Porter, que ayer solicitó una conferencia que le fue otorgada y en la que se redujo a presentar sus respetos a mí autoridad sin siquiera darse por entendido de las ocurrencias anteriores pasadas en los días viernes y sábado de la otra semana.

Sin embargo, el Sr. Porter y el señor vicecónsul americano no desisten en provocar un conflicto que este gobierno evitará hasta donde sea posible. Ayer el mismo señor comandante acompañado del cónsul y de un hijo suyo, a pretexto, de que no entendía y según, se me ha dicho, premeditadamente, con riesgo de su persona, atropelló un centinela que estaba de guardia el que ha sido debidamente por haberlo dejado pasar pegado al banco de armas que custodiaba, atendiendo a las recomendaciones terminantes de esta superioridad para que ni él ni los súbditos de su nación ni otros sean en lo más mínimo molestados o ultrajados en sus intereses o personas.

El Sr. Allden, con la impunidad del atropellamiento de ayer, quiso de nuevo atropellarlo hoy; pero ya advertidos los centinelas de la obligación en que están de cumplir en todo tiempo con su deber y advertidos ellos mismos de lo mal que hacían, le previno el centinela que no pasara por aquel lugar e insistiendo él hasta querer atropellar echando mano del arma que le impedía el paso se le dio con ella en la cabeza obligándolo a seguir el camino que debía llevar. Inmediatamente mandé un comisionado para que explicara la

ocurrencia al Sr. Porter quien aprobó, como era debido, la conducta del centinela, reprobando la del señor cónsul de su nación.

Por todas las ocurrencias que tan extensa como verídicamente he detallado, se persuadirá V. E. que un estado tan violento de cosas no puede ser duradero, por grandes que los empeños de este gobierno dominarlo; el señor comandante de la corbeta de los Estados Unidos, W. D. Porter y el cónsul de la misma república. Fawelly Allden, trabajan sin descanso en provocar un conflicto y esos trabajos que conoce el pueblo lo exasperan y se hace cada día más y más difícil contenerlo. No se me ocultan las miras que llevan estos agentes americanos para seguir adelante su propósito, que no es otro más que la adquisición de este estado, o conseguir de él o su gobierno privilegios o concesiones incompatibles con su bienestar y con el honor de la nación. Estoy resuelto y todo Sonora lo está con su gobierno, a defender la integridad de la república y conservar su honor ileso y mientras me quede un soplo de vida defenderé una y otra sin admitir del gobierno americano más que aquello que sea compatible con nuestro bienestar y que no deprima en lo más mínimo nuestro carácter nacional. Los agentes del Sr. Porter y otros han hecho diferentes propuestas al gobierno de concesiones, privilegios, derechos de tránsito y otros, hasta ofrecer recompensas públicas y privadas si se admitían, creyendo con ellas halagar los generales del estado y los particulares del que lo gobierna. Ninguna cabida han tenido en mí tales ofrecimientos, porque tras del velo que los cubre y dora, encuentro la ruina de mi país y la destrucción de nuestra nacionalidad y no seré yo quien la venda. Desengáñese V. E. y persuádase que al gobierno americano le conviene la posesión de Sonora., porque de ella depende la dominación del continente en el mar pacífico y es preciso que la política de nuestro gobierno tan previsora cuanto más astuta es la de él: es preciso que nos anticipemos a satisfacer las necesidades que

ellos creen tener para posesionarse de este país, concediéndoles en este estado los puertos de depósito, derechos de tránsito, etc., que ellos solicitan, en tanto que su solicitud sea compatible con nuestro honor y bienestar, porque de lo contrario por cualquier pretexto nos declaran la guerra y aprovechándose de nuestras disensiones interiores, de nuestra debilidad, pedirán a la conclusión de ella nueva desmembración del territorio nacional. Este gobierno, que está al tanto de las miras del americano, está resuelto a tener con él y sus agentes una política circunspecta, evitando hasta donde sea posible todo motivo de queja, todo pretexto para un rompimiento hostil, proporcionando a los ciudadanos de aquella nación, así como a los demás de las potencias amigas, todas las franquicias que pueda legalmente otorgarles, dándoles seguridad en sus personas e intereses para que transiten libremente en el estado y se ocupen en él de aquello que más les convenga. Acompaño a V. E., bajo los números cinco y seis, la orden que dicté a las autoridades de Hermosillo respecto al Sr. capitán Ewell y la que he dado el 19 del actual, encargando el respeto debido a los cónsules y ciudadanos extranjeros residentes en el país. Ambos documentos probarán a V. E. con cuánto empeño trata este gobierno de evitar reclamaciones exteriores que tan mal resultado han dado en otros tiempos a la república. Este gobierno cree que si bien a él toca observar la conducta expuesta en las actuales circunstancias, al de la república corresponde reclamar con energía y dignidad la conducta observada por los oficiales del gobierno de los Estados Unidos en este estado, pidiendo la destitución de los Sres. Porter y Allden, que tan indignamente se han portado y seguirán portándose, a no dudarlo, remplazándolos con hombres de honradez y representación social, debe igualmente exigir una indemnización al mismo gobierno por los daños y perjuicios que tan injustamente han sufrido los habitantes de este puerto, quienes tan violentamente

amenazados de un bombardeo, abandonaron y perdieron gran parte de sus intereses en los momentos del conflicto.

Me tomo la libertad de mandar copia directamente de esta comunicación al Excmo. señor ministro plenipotenciario de la república en Washington, suplicándole que desde luego trabaje para obtener lo que este gobierno desea y que tan justo me parece.

Sírvase V. E. elevar lo expuesta al conocimiento del Excmo. señor Presidente de la República, admitiendo con tal motivo mi distinguida consideración y aprecio.

Y tengo el honor de transcribirlo a V. E. para que penetrado de la urgencia del caso y de la necesidad en que nos hallamos de reclamar sin demora tantos desmanes, se sirva interponer su influencia y respetos ante ese gobierno, a fin de obtener sin demora una reparación a los males que se han causado y que es probable seguirán causando los agentes de esa república en el estado de mi mando.

Protesto a V. E. con tal motivo las seguridades de mí distinguida consideración y particular aprecio.

Dios y Libertad. Guaymas, noviembre 21 de 1859.

Manuel Monteverde
Secretario

Ignacio Pesqueira

EL GENERAL SUÁREZ Y NAVARRO DESEA REGRESAR DE
EUROPA CON LA BANDERA LIBERAL EN LA MANO

París, 28 de noviembre de 1859
Avenida Jacob número 98

Excmo. Sr. Presidente don Benito Juárez

Muy señor mío de todo mi respeto:

Por la vía de los Estados Unidos, escribí al Sr. don Ezequiel Montes, el mes pasado, remitiéndole una larga carta que me tomé la libertad de dirigir a usted, por si aquella carta no hubiere llegado oportunamente. Vuelvo hoy a repetir en extracto y sustancialmente el contenido de mi anterior.

Decía a usted que por conducto del Sr. Montes, había recibido la buena noticia de que podía regresar a la patria, de donde sin justicia y sin razón se me arrancó en 1856. Manifestaba mi agradecimiento por este acto de usted y le protestaba mi eterno agradecimiento.

También manifestaba el ardiente deseo que tengo de verificarlo, para de este modo poner término a mis penas y sufrimientos, porque carezco de todo recurso con qué poder vivir en el extranjero. Dije a usted también -y hoy lo repito- que cuando yo he insistido por regresar, no es para volver a mi casa, como lo desearía si lo permitieran las circunstancias. Una dolorosa experiencia me ha enseñado que cuando una vez se tomó parte en los vaivenes de nuestra desgraciada patria, los partidos, los enemigos y los amigos, se empeñan en no dejarlo a uno tranquilo.

Yo estoy seguro que si regreso a México, sin llevar en la mano una bandera y llegando a mi casa me ocupo en rezar el rosario y leer vidas de

santos, sin pensar en nuestras cosas y hombres, de esa tranquilidad me saca la calumnia, me perturba el odio de los partidos y me arranca, tercera vez, lanzándome a perecer en el extranjero.

Tal convicción, señor Presidente, me hace dirigirme a usted para rogarle se digne manifestarme si yo puedo regresar, para tomar parte en la guerra contra los enemigos que usted combate, destinándome a las órdenes del general que usted juzgue conveniente. Yo no pretendo mando ni repugno que se me emplee aun a las órdenes de un subalterno. Quiero cooperar a la guerra contra los serviles; mi conducta durante siete años, mis desengaños, mi edad y la garantía y palabra empeñada por mis amigos Montes y Lafragua, es el fiador de mi futuro proceder.

Si por razones de política o de circunstancias, usted no tiene posibilidad de ocuparme en algo y yo estoy condenado a la dolorosa cuanto horrible disyuntiva de ponerme a las órdenes de Miramón o perecer de hambre en el extranjero, yo sin vacilar prefiero la muerte de inanición, a servir bajo un orden de cosas que detesto.

Sin los favores del Sr. Montes, yo habría perecido; habiéndose ido a México, no tengo nada, ni a quien volver los ojos; mi porvenir es terrible aquí, pero mi resolución está tomada. Si yo no entro a mi patria por la puerta y si yo no puedo regresar con la bandera liberal en la mano, no me moveré de Europa y pereceré sin remedio.

Esta franqueza que me tomo (la) libertad de usar, manifestará a usted que yo estoy resuelto a aprovechar el beneficio que se me hace de restituirme a la patria; pero para hacerlo con alguna utilidad, quiero antes la postrera resolución de usted. Yo necesito ocasión de vindicarme; necesito manifestar por los hechos que no soy lo que dicen mis enemigos y, además, quiero cooperar a enmendar los males que, sin quererlo, ocasioné a mi patria en 1852.

En espera de la resolución de usted, he hecho alto aquí, desde donde me repito su afectísimo servidor que atento b. s m.

José Suárez y Navarro

LAFRAGUA INFORMA SOBRE EL TRATADO
MON-ALMONTE

París, diciembre 14 de 1859

Excmo. señor ministro de Relaciones
del gobierno constitucional

Excmo. señor:

Al fin he conseguido una noticia, si no plenamente oficial, a lo menos enteramente segura, de los términos en que se han arreglado las diferencias con España por parte del gobierno reaccionario.

El día 26 de septiembre el Gral. Almonte, como ministro de la República en París, y especialmente autorizado *ad hoc*, ha firmado con el Sr. Mon, embajador de su majestad católica en esta corte, un convenio cuyas principales bases son: castigo de los culpables que hayan podido hasta hoy eludir la acción de la justicia; indemnización a las familias de los españoles muertos en San Vicente, Chiconcuaque y San Dimas; indemnización cuya suma será fijada por los gobiernos de Inglaterra y Francia, y que se concede sólo por el deseo de terminar las diferencias, sin que sirva de base ni de antecedente para otros casos de igual de naturaleza; cumplimiento del tratado del 12 de noviembre de 1853, en tanto que por ambas partes no se altere ni modifique; arreglo ulterior de los demás puntos pendientes. Este convenio será ratificado dentro de cuatro meses contados desde el día de su fecha.

Como V. E. verá, se han aceptado literalmente las proposiciones que el marqués de Pidal me presentó en 23 de junio de 1857. Aunque aparentemente se ha modificado una de ellas, es indudable el perjuicio de los intereses y sobre todo de los derechos de la nación; pues la reserva

puesta, respecto de la indemnización., no puede salvar a la república de los males que el convenio debe producir, según manifesté a V. E. en mi nota de 22 de octubre, tanto menos cuanto que el arreglo se ha hecho sin intervención de las potencias mediadoras y sólo por los representantes de México y España. Si las primeras hubieran tenido parte en el arreglo, la reserva podría hacerse valer en cualquier caso ante ellas mismas; pero tal como se ha celebrado el convenio, apenas puede servir para contestar a otras reclamaciones de España, quedando siempre vivo y consumado el hecho de que indemnizamos en los que casos señala el derecho de gentes; puesto que la indemnización se ha concedido sólo por el deseo de terminar las diferencias y no por principios de intrínseca justicia. México al conceder, y España al aceptar la indemnización en los términos acordados, han convenido en que los asesinatos fueran delitos comunes y han confesado que no regía en caso la ley de las naciones. Por consiguiente, el gobierno reaccionario ha hecho pública la que es responsabilidad privada, y el gobierno español ha renunciado a todo derecho, pagando México sin obligación lo España recibe sin justicia.

Grande es el gravamen que por este pago van a sufrir los intereses nacionales; pero es incalculable el perjuicio que él causa a los derechos de la nación; porque dígame lo que se quiera en el convenio, ha quedado establecido un precedente, cuyas funestas consecuencias deplorarán y sufrirán las generaciones venideras. Malísimo es prescindir de la revisión de los créditos; pero a lo menos este acto no establece precedente alguno. Ese pago no da derecho a nadie: más la indemnización da derechos, que en el porvenir haré valer las naciones menoscabo de los intereses y de la honra de la república.

Durante dos años la prensa española ha agotado contra nosotros el diccionario de los dicterios; no ha habido cargo, siquiera fuese absurdo, siquiera ridículo que durante dos años no se haya hecho al gobierno y al pueblo de México; de lo alto de la tribuna que han lanzado en el parlamento de España acusaciones tan graves como infundadas, cerrándose, intencionalmente, los ojos para no ver la realidad de los hechos y llevándose la exageración hasta el extremo de no considerarse bastante prueba la confesión de los mismos reos, ni expiación suficiente

la muerte que cinco de ellos sufrieron hace más de un año. Y los ministros y los diputados y los escritores, empeñados en hacer nacional la causa de unos cuantos españoles, no han esquivado medio, desde la calumnia hasta la burla, para presentar a la república como una horda de bandidos indigna de pertenecer a la gran familia de los pueblos civilizados.

Ahora bien y el único fundamento de tan inconsiderada conducta era la convicción que tenía el gobierno español de que los crímenes de San Vicente, eran, como decía el Sr. Pidal, un sistema de persecución contra los españoles en cuyo caso la nación debía ser responsable. Mas al aceptar la indemnización en los términos convenidos España ha declarado que aquellos hechos fueron delitos comunes, echando por tierra en un momento el baluarte que el interés privado de unos, la ignorancia de otros y el espíritu de partido de algunos habían levantado y desde el cual se ha hecho una guerra terrible, al buen nombre, a la dicha, al progreso y a caso a la independencia de la república.

Por lo mismo, era muy difícil para mí, creer que el gobierno de la ciudad de México, que más que el de España debía estar convencido de la injusticia de la indemnización haciendo a un lado todo derecho y desentendiéndose de tanto agravio, causado no a mexicanos sino a la nación, consintiera en un convenio en que no se decida otra cuestión de dinero, sino cuestión de principios y no se decide por justicia por favor. Muy bueno es conservar la amistad de España; pero es mejor salvar la honra nacional y esto sólo puede lograrse conforme indemnizando conforme al derecho de gentes. Hacerlo de gracia es ofender a México y a España porque es calificar a aquél de débil y a de injusta.

No sé si el convenio ha sido ratificado en México; pero lo creo seguro. El supremo gobierno determinará lo que crea conveniente.

Reitero a V. E. mi muy distinguida consideración.

José María Lafragua

MATA PLANTEA AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE LOS ACONTECIMIENTOS DE GUAYMAS

Legación mexicana en los Estados Unidos de América

Washington, diciembre 80 de 1859

A su excelencia [A S. E.] el Sr. Gral. Lewis Cass
Ministro de Estado de los Estados Unidos de América

El infrascrito, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Mexicana, tiene la honra de dirigirse a S. E. el Sr. Gral. Lewis Cass, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, para poner en conocimiento de S. E. que hoy ha recibido noticia oficial de la conducta observada en el puerto de Guaymas, estado de Sonora, por Mr. W. D. Porter, comandante de la corbeta de los Estados Unidos *St. Mary's* y Mr. Fawelly Allden, que funciona en el mismo puerto como vicecónsul americano.

S. E. el Sr. Gral. Cass encontrará la relación a los hechos a que el infrascrito se refiere en el extracto adjunto de la comunicación que el Excmo., señor gobernador del estado de Sonora ha dirigido al infrascrito con fecha 21 del próximo pasado.

Los hechos que en este documento se refieren son de tal naturaleza que el infrascrito cree de su deber someterlos al conocimiento de S. E. el señor secretario de Estado de los Estados Unidos, absteniéndose de hacer petición alguna mientras para ello no reciba instrucción del gobierno que tiene el honor de representar.

Es posible que los hechos referidos no hayan llegado todavía a conocimiento de S. E. y por eso el infrascrito se apresura a comunicárselos con la plena confianza de que la alta inteligencia de S. E.

el señor secretario de Estado, los apreciará en cuanto valen y de que se penetraré del peligro que hay de ver resultar por un acto de impremeditación un conflicto entre ambos países, conflicto que será tanto más lamentable cuanto es patente no sólo la justificación y aun benevolencia que caracterizan los actos del gobierno de los Estados Unidos hacia México en las crisis porque atraviesa el último país, sino la decidida voluntad con que los gobiernos de ambas repúblicas trabajan por fundar las relaciones futuras de las mismas sobre bases de la más cordial amistad y de la satisfacción de sus intereses recíprocos.

El infrascrito se complace en aprovechar esta oportunidad para renovar a S. E. el Sr. Gral. Cass, las seguridades de su muy distinguida consideración.

José María Mata

A MATA LE PREOCUPA LA SITUACIÓN DE LA
BAJA CALIFORNIA

Legación mexicana en los Estados Unidos de América

Washington, diciembre 31 de 1859

Número 98

Excmo. señor ministro de Relaciones Exteriores
Heroica Veracruz

Excmo. señor:

Tengo la honra de remitir a V. E. copia en lo conducente de una carta escrita por persona fidedigna que reside en California a otra de esta ciudad -el capitán H. S. Barton- en la que se manifiesta el estado deplorable que actualmente guarda el territorio de la Baja California y el peligro que hay de que lo pierda la república para que impuesto de ello el Excmo. señor Presidente, se sirva tomar las medidas que creyere convenientes.

Aprovecho esta ocasión para reproducir a V. E. las seguridades de mi muy distinguida consideración.

Dios y Libertad.

José María Mata

MATÍAS ACOSTA INFORMA DE LA DERROTA
DE DEGOLLADO POR LAS FUERZAS DE MIRAMÓN

México, noviembre 19 de 1859

Excmo. Sr. Presidente don Benito Juárez
Veracruz

Mi muy querido amigo:

Al escribir a usted el día 11 estaba yo casi completamente seguro de poder dar a usted al día siguiente muy buenas noticias, pues la madrugada del 1º. estaba señalada para el movimiento y las órdenes de nuestro general en jefe todo lo habían previsto. Un accidente ha retardado el suceso y digo retardado porque el negocio no puede darse por frustrado. Contamos con la mayor parte de esta guarnición y, creyendo débiles las fuerzas que tenemos en Palacio, uno de nuestros jefes habló y compró a tres oficiales del cuerpo que manda Pérez Gómez. Parece que uno de estos oficiales denunció al jefe a última hora. El jefe fue reducido a prisión y la ciudadela fue reforzada desde muy temprano por el único cuerpo que nos es hostil. Uno de los jefes de este cuerpo había estado engañando al Sr. Parra y, para entregarlo, sólo esperaba recibir el dinero que le había prometido, pero con la denuncia de los oficiales se hicieron numerosas prisiones. De todos los presos sólo son nuestros el jefe de un cuerpo y uno de nuestros principales agentes. El denunciante no estaba en los pormenores y así sólo ha podido entregar a la persona que le habló. Nada, pues, se ha traslucido de la combinación y ningún otro militar de los comprometidos ha sido aprehendido, estando libres el general en jefe y sus agentes principales, de los que todos tienen algún mando, pues jefes sin soldados de nada sirven.

Por más esfuerzos que hicimos, hemos tenido que retardar el negocio y, tanto la derrota de las fuerzas de Oaxaca como las malas noticias del interior, nos han obligado a prolongar esta demora, aunque seguimos trabajando sin cesar y mantenemos en pie todos los elementos, exigiendo el cumplimiento de sus compromisos a jefes que, en su mayor parte, están ya pagados, pues por triste que sea es preciso que usted sepa que de los soldados no hay uno solo que proceda por opinión, sino sólo por interés de dinero o ascensos.

En una y otra cosa hemos procedido con mucha parsimonia, reduciendo los gastos hasta donde ha sido posible y rebajando todas las exigencias que al principio pasaban de 100 mil pesos. Uno de los jefes principales ha tenido que salir para Querétaro, debe volver muy pronto y, aunque su regreso nos es indispensable, nos ocupamos ahora de activar las cosas sin él.

Crea usted que no omitimos esfuerzo, que para estar en relaciones con la guarnición no nos hemos parado en dificultades y que seguiremos trabajando sin descanso. Nada se ha traslucido, contamos con los mismos elementos y, a pesar del cambio de la situación, espero llegar, pronto a un buen resultado y no desmayo en mis trabajos. La demora es para mí una terrible mortificación y he pasado por ella contra toda mi voluntad.

Estos jefes contaban en que nuestras tropas de Oaxaca hostilizarían a Puebla y participaban de la esperanza de que triunfáramos en el interior. Usted comprenderá fácilmente la mala influencia moral de nuestros desgraciados descalabros, aunque ahora, como antes, todos conocen que las ventajas de la reacción no pueden conducirla a un triunfo decisivo.

El mismo Miramón se creía perdido y solicitó una entrevista de don Santos, quien le propuso que jurara la Constitución y le ofreció dejarlo al frente del ejército. Sin la primera exigencia, él hubiera preferido salir del paso mediante ventajas pecuniarias. Don Santos tenía 6,200 hombres en buenas posiciones, Miramón las flanqueó con menos de 3,000 hombres y nuestra derrota ha sido completa e increíble. Nuestro ejército se dispersó y sólo quedan en las secciones, las de Doblado y Arteaga. Perdimos toda nuestra artillería, los trenes, muchas armas,

etcétera [etc.]. Murió en la acción el Gral. Tapia el Gral. Álvarez ha perdido una pierna, Chesniar cayó prisionero y ha sido fusilado. Miramón debe estar en Guanajuato. Don Santos pasó con su estado mayor por Celaya y no sabemos qué rumbo ha tomado. Es probable que Woll, que no había salido de Zacatecas, marche sobre San Luis y que se intente algo sobre Morelia. Estamos, pues, pésimamente en el interior y es de temer que se redoblen los esfuerzos para hacer estallar una defección en Tampico.

Las fuerzas de Alatríste, Soto y Carbajal han sido rechazadas de Tulancingo después de sufrir muchas pérdidas.

Es probable que Márquez se vuelva a unir con Miramón y que entonces se piense seriamente en la campaña de Veracruz.

Esta situación no debe hacernos desmayar, pues ya otras veces hemos estado en el mismo estado. Seguiremos trabajando aquí con constancia y actividad. Del interior habrá que esperar algunos meses para que don Santos vuelva a organizar nuestras fuerzas. Entretanto es menester decidir a Robles a que se una a los liberales y, en mi concepto, es llegada, la hora de tomar medidas extremas que aconsejan la experiencia, la imperiosa necesidad y los mismos sacrificios del país, que no es justo prolongar.

Aun es tiempo de contratar cuatro o cinco mil soldados extranjeros que, en dos o tres meses, pacificarían todo el país y serían después el apoyo de la Reforma y de la legalidad. Esta fuerza obrará como las legiones extranjeras que hay en los ejércitos de las primeras naciones del mundo y, de ningún modo, sería una degradación para la república. En contra de este proyecto no veo más que las declaraciones de la prensa conservadora.

También creo que es tiempo de terminar la negociación del tratado con los Estados Unidos no sólo para tener recursos, sino para evitar más serias complicaciones. Sé de muy buena tinta que, en el gabinete, Muñoz Ledo ha propuesto ya hacer grandes esfuerzos para tratar con los Estados Unidos y ofrecer, en último caso, la ratificación del tratado pendiente, sin pararse en ningún escrúpulo; Gabriac anda en este asunto. Los Estados

Unidos no verán más que su interés y los últimos descalabros que hemos sufrido tendrán malísima influencia.

Si no se apela a estos dos medios, la lucha seguiría y, al fin, si no triunfamos nosotros, triunfarán más tarde nuestros principios, pero no debemos conformarnos con esta esperanza. En mi opinión es urgente acelerar este triunfo y no debe desperdiciarse ningún arbitrio. Usted ha dado ya pruebas incontestables de su respeto a la dignidad nacional y a la integridad del territorio. Los medios que se nos ofrecen no atacan ni la una ni la otra y si pueden servir para la pronta pacificación del país.

No crea usted que estas indicaciones nacen del desaliento, sino del deseo de que cuanto antes triunfe la legalidad. Por lo demás, nunca abandonaré mis ideas y seguiré la suerte que toque a usted, trabajando hasta el fin.

El Sr., M... no ha vuelto a verme y creo que espera ver si cambian algo las cosas.

Repito a usted que aún podemos esperar mucho en esta capital e insisto en recomendar a usted las ideas que dejó indicadas, para terminar la lucha que está acabando con el país.

Me repito de usted afectísimo amigo.

Matías Acosta

El 11 nos fue preciso librar contra usted por \$6,200 al plazo del 4 de diciembre para completar lo rigurosamente indispensable. Un amigo nos proporcionó esa suma y, como en este negocio no hay gravamen, le ruego que acepte nuestra letra. Si la combinación se realiza pronto, cumpliremos aquí ésta y los compromisos anteriores.

ES NECESARIO QUE EN EL EXTRANJERO SE
RECONOZCA LA LEGITIMIDAD DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL

México, diciembre 19 de 1859

Excmo. Sr. don Benito Juárez

Mi muy querido amigo:

Sea cual fuere el éxito de la expedición contra Colima, parece cosa resuelta que Miramón esté aquí el día 24, dejando el mando de las tropas en el interior a Woll, Vélez y Alfaro. Esto nos hace activar nuestros trabajos para que puedan realizarse cuando esté aquí el personaje principal.

Se han hecho aquí numerosas prisiones de gentes inofensivas, entre las que están varios cocineros franceses de algunas fondas. Creemos que ésta es una de tantas invenciones de Lagarde que se hace pagar caros todos sus descubrimientos.

Lo único notable es la protesta dirigida por Muñoz Ledo al Gral. Cass contra el tratado. Este documento está escrito con moderación y no entra en la cuestión de legitimidad. La única razón de algún peso que acaso explotarán los que hacen la oposición a Buchanan, es la falta de aprobación por el Congreso conforme la Constitución. Yo creo muy conveniente que el Sr. Ocampo, en una nota a McLane, repita la protesta de Muñoz Ledo, sosteniendo sobre todo la legitimidad del gobierno constitucional y pintando lo de México como el resultado de un mero motín militar. En cuanto a la formalidad de la aprobación del Congreso tenemos un precedente favorable y es que Mata ha sido recibido como ministro plenipotenciario, nombrado solamente por el Ejecutivo, cuando

conforme a la Constitución su nombramiento tenía que ser aprobado por el cuerpo Legislativo.

Así pues, el mismo gobierno americano ha reconocido que tenemos que ceder a la ley imperiosa de la necesidad y se debe hacer valer que el Congreso fue disuelto por la reacción; que muchos de sus miembros, incluso su Presidente, fueron encarcelados; que es imposible reunir la Cámara porque no hay libertad de tránsito, porque no pueden hacerse nuevas elecciones, porque las costas son insolubles, etc. y que no es justo ni fundado que porque no hay Congreso, el Ejecutivo deje perecer al país y no atienda a las relaciones exteriores. Tengo mucha esperanza en que Mata salga airoso en la defensa del gobierno constitucional.

Me parece conveniente que usted proteste contra el arreglo en España y creo que es tiempo de enviar directamente a los otros gobiernos extranjeros un memorando acerca del estado del país, demostrando que existe el gobierno legal de *jure* y que la facción establecida en México es sólo un poder de facto que está muy lejos de conceder a los extranjeros las franquicias y derechos que les otorgan la Constitución y las últimas leyes de Reforma.

Que tenga ésta por suya el señor...¹¹ a quien lo mismo que a usted someto...¹² indicaciones.

Sé que ya está aquí Arriaga y que anda censurando cuanto pasa en esa.

Recomiendo a usted el pronto y favorable despacho de la adjunta solicitud sobre redención de un capital. Atendiendo a los servicios que en todas épocas prestó el Sr. Eloriaga y que fueron causa de que su familia quedara sin recursos, me atrevo a suplicar a usted que conceda el plazo de los 80 meses y le suplico me mande por duplicado el certificado respectivo para mandar un tanto a las autoridades de Durango y evitar que se haga la denuncia por un tercero.

Hemos seguido ministrando algunos auxilios a los presos más necesitados y comprometidos.

¹¹ Destruido en el original.

Me repito de usted afectísimo amigo.

Matías Acosta

No puedo escribir a usted, me he estado ocupando de un asunto importante de que verá los resultados. Reciba usted ésta como mía, Su afectísimo servidor.

F. A. y P.

BUCHANAN SOLICITA AL CONGRESO, ABIERTAMENTE,
PERMISO PARA INVADIR MÉXICO

Desde su advenimiento al poder, el Presidente norteamericano James Buchanan fijó en su mente la idea de invadir nuestro país, como parte de su programa. Ponía como pretexto ayudar al gobierno liberal, proteger los derechos de los ciudadanos americanos, corregir errores como buenos vecinos, y otras zarandajas. Esto, a pesar de que había reconocido al gobierno constitucional de Juárez, acreditando como ministro a *mister* [Mr.] Robert H. McLane, quien en su discurso de presentación oficial, dijo al Presidente que el gobierno de los Estados Unidos había llegado a comprender que la mayor parte de la nación estaba con el gobierno liberal.

El mensaje que en el otoño de 1859 dirigió al Congreso, resume admirablemente su modo de pensar sobre nuestros asuntos. En ese mensaje, (tomado de *Messages and Papers of the President*, vol. V, 1849-1861), pidió al Congreso que dictara una ley autorizándolo para que pudiera emplear una fuerza militar suficiente para invadir México. La parte conducente dice así:

El caso presentado no es, sin embargo, únicamente un caso de reclamaciones individuales, bien que nuestras justas reclamaciones contra México han alcanzado un valor muy grande; ni tampoco es meramente el caso de la protección a las vidas y propiedad de los pocos americanos que todavía puedan quedar en México, no obstante que la vida y la propiedad de todo ciudadano americano debe ser religiosamente protegida en cada una de las cuatro partes del mundo, sino que es una cuestión que se refiere al futuro, tanto como al presente y al pasado, y que complica, indirectamente a lo menos, todo cuanto se refiere a nuestro deber para con México como Estado

vecino. El ejercicio del poder de los Estados Unidos en aquel país para corregir los errores, y proteger los derechos de nuestros conciudadanos es lo menos que debemos desear, por razón de que la ayuda eficiente y necesaria puede, de este modo, dar por resultado al mismo tiempo el restablecimiento de la paz y del orden en México mismo. El pueblo de los Estados Unidos debe tener un interés profundo y ardiente en la realización de este resultado. México debe ser una república rica, próspera y poderosa. Posee un territorio extenso, un suelo fértil y un depósito considerable de riqueza mineral. Ocupa una posición importante entre el golfo y el océano para rutas de tránsito y para el comercio. ¿Es posible que un país como éste pueda estar entregado a la anarquía y a la ruina sin un esfuerzo por parte de alguna vecindad por libertad y seguridad? ¿Permanecerán las naciones comerciales del mundo, que tienen tantos intereses conectados con él, enteramente indiferentes a un resultado semejante? ¿Pueden especialmente los Estados Unidos, que deben participar más ampliamente de esa vida comercial, permitir a su vecino inmediato que de tal modo se destruya asimismo y los ofenda? Además, sin el apoyo de alguna nación, es imposible comprender como pueda México recuperar su posición entre las naciones y seguir una carrera que le prometa algunos buenos resultados. La ayuda que necesita, y que los intereses de todos los países comerciales exigen que tenga, le corresponde a este gobierno dársela no solo en virtud de nuestra vecindad con México a lo largo de cuyo territorio tenemos una frontera interrumpida de cerca de mil millas, sino también en virtud de nuestra política establecida, que es incompatible con la intervención de cualquier potencia europea en los asuntos domésticos de esa república...

Los males que hemos sufrido de México están ante el mundo y deben impresionar más hondamente a todo ciudadano americano. Un gobierno que, por ineptitud o mala voluntad,

deja de corregir tales males, no puede ocuparse en sus deberes superiores. La dificultad consiste en seleccionar y reforzar el remedio. Es en vano que podamos recurrir al gobierno constitucional en Veracruz, por más que esté bien dispuesto para hacernos justicia por medio de un desagravio conveniente; mientras su autoridad es reconocida en todos los puertos importantes y en todo el litoral de la república, no domina en la ciudad de México y en todos los Estados vecinos a ella en donde se han cometido casi todos los ultrajes a ciudadanos americanos. DEBEMOS PENETRAR AL INTERIOR PARA ALCANZAR A LOS OFENSORES Y ESTO ÚNICAMENTE PUEDE HACERSE PASANDO POR EL TERRITORIO OCUPADO POR GOBIERNO EL CONSTITUCIONAL. El modo más aceptable y menos difícil para realizar el objeto, sería obrar de concierto con ese gobierno. Su consentimiento y su ayuda creo que podrían obtenerse; pero SI NO, NUESTRA OBLIGACIÓN PARA PROTEGER A NUESTROS CIUDADANOS EN SUS JUSTOS DERECHOS POR MEDIO DE UN TRATADO NO SERIA MENOS IMPERATIVO. Por estas razones RECOMIENDO AL CONGRESO QUE DICTE UNA LEY AUTORIZANDO AL PRESIDENTE, BAJO LAS CONDICIONES QUE PAREZCAN MÁS CONVENIENTES, PARA QUE EMPLEE UNA FUERZA MILITAR SUFICIENTE PARA INVADIR MÉXICO CON EL PROPOSITO DE OBTENER INDEMNIZACIÓN POR LO PASADO Y SEGURIDAD PARA LO FUTURO. Intencionalmente evito toda sugestión respecto a la composición de esta fuerza, si deberá formarse de tropas regulares o voluntarias o de ambas. Esta cuestión debe dejarse más propiamente a la decisión del Congreso. Yo únicamente observaría que los voluntarios deberían elegirse reclutando una fuerza, lo que sería fácil en este país, de entre los que simpatizan con los sufrimientos de nuestros infortunados conciudadanos en México y con la condición desdichada de

esa república. Un acrecentamiento semejante a las fuerzas del gobierno constitucional le permitirá llegar pronto a la ciudad de México y extender su dominio SOBRE TODA LA REPÚBLICA. En ese caso no hay razón para dudar de que las justas quejas de nuestros conciudadanos serían satisfechas y de que se obtendría un desagravio adecuado por las ofensas recibidas. El gobierno constitucional siempre ha manifestado un gran deseo de hacer justicia, y esto debe asegurarse por medio de un tratado preliminar. Pudiera decirse que estas medidas, a lo menos indirectamente, son incompatibles con nuestra política prudente y firme de no intervenir en los asuntos domésticos de naciones extranjeras. Pero ¿no constituye claramente el presente caso una excepción? Una república vecina está en un estado de anarquía y confusión de la que ha probado ser totalmente incapaz de salir por sí misma. Está enteramente destituida de poder para mantener la paz en sus fronteras o para prevenir las incursiones de bandidos en nuestro territorio. Tenemos el mayor interés (mucho más que cualquiera otra nación), tanto social y comercial, como político, en que, por sus destinos, por su fortuna, y por su poder, logre establecer y mantener un gobierno firme. Es ella, ahora, un buque náufrago en el océano, arrastrado a donde quiera que es impelido por las diferentes facciones. Como, buenos vecinos ¿no debemos tenderle una mano que le ayude a salvarse? Si no lo hacemos, no sería sorprendente que alguna otra nación emprendiese la tarea y, nos forzara a intervenir a lo último bajo circunstancias que aumentarían las dificultades para el mantenimiento de nuestra política establecida.

BUCHANAN INSISTE EN SU PROGRAMA DE INVADIR MÉXICO

Diciembre 19 de 1859

Siento informaros que ningún adelanto ha habido en los negocios de México desde mi último mensaje anual y me veo de nuevo obligado a llamar la interesante atención del Congreso a la desgraciada condición de aquella república.

El Congreso Constituyente de México, que cerró sus sesiones el 17 de febrero de 1857, expidió una Constitución y decretó una elección popular. Esta tuvo lugar en el siguiente julio –1857- y el Gral. Comonfort fue elegido Presidente, casi sin oposición. En la misma elección se eligió un nuevo Congreso, cuya primera sesión se verificó el 16 de septiembre -1857-.

Con arreglo a la Constitución de 1857, el término presidencial debía empezar el 1º. de diciembre –1857- y continuar por cuatro años. En aquel día el Gral. Comonfort se presentó ante el Congreso reunido en la ciudad de México, prestó el juramento de cumplir la nueva Constitución y fue debidamente inaugurado como presidente. Un mes después había sido arrojado de la capital y una rebelión militar había conferido el poder supremo de la república al Gral. Zuloaga. La Constitución disponía que, en ausencia del Presidente, sus funciones serían desempeñadas por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, habiendo salido del país el Gral. Comonfort, aquel funcionario, Juárez, procedió a formar en Guanajuato un gobierno constitucional. Antes de que esto fuese sabido oficialmente en la capital, el gobierno de Zuloaga había sido reconocido por todo el cuerpo diplomático, incluso el ministro de los Estados Unidos, como gobierno de facto de México. El Presidente Constitucional, sin embargo, mantuvo su posición con firmeza y se estableció pronto en

Veracruz con su gabinete. Entretanto, el gobierno de Zuloaga fue vivamente resistido en muchas partes de la república y aun en la capital una parte del ejército se pronunció contra él, declarando que habían terminado sus funciones y convocó a una asamblea de ciudadanos para la elección de un nuevo Presidente. Esta asamblea eligió al Gral. Miramón; pero este jefe desconoció el plan bajo el cual había sido elegido y Zuloaga fue entonces restaurado a su primitiva posición. La asumió sin embargo solamente para dejarla y, habiendo llegado a ser Miramón, por su nombramiento, "Presidente sustituto", continúa con este título a la cabeza del partido insurgente.

En mi último mensaje anual comuniqué al Congreso las circunstancias bajo las cuales el último ministro de los Estados Unidos suspendió sus relaciones oficiales con el gobierno central y salió del país. Era imposible mantener relaciones amistosas con un gobierno como el de la capital, bajo cuya usurpada autoridad se cometían injusticias constantemente, sin repararlas nunca. Si éste hubiera sido un gobierno establecido, que extendiera su poder por el consentimiento del pueblo, sobre todo México, habría sido, no sólo justificable, sino necesario recurrir a las hostilidades contra él. Pero el país era presa de la guerra civil y se esperaba que el triunfo del Presidente constitucional pudiese conducir a un estado de cosas menos injuriosos para los Estados Unidos. Este triunfo llegó a ser tan probable que, en enero último, envié a un agente fidedigno a visitar a México, para que me informase de la condición anual y aspecto futuro de los partidos contendientes. En consecuencia de su informe y por otros que me llegaron de distintas fuentes, favorables a la condición de la causa constitucional, creí de mí deber nombrar un nuevo ministro para México que pudiese aprovechar la primera oportunidad conveniente para reanudar nuestras relaciones diplomáticas con aquella república. Para este objeto fue elegido un distinguido ciudadano de Maryland, que comenzó a desempeñar su misión el 8 de marzo, para reconocer al gobierno del Presidente Juárez, si a su llegada a México lo encontraba digno de tal reconocimiento. Según la práctica establecida de los Estados Unidos, el 7 de abril siguiente presentó Mr. McLane sus credenciales al Presidente Juárez y, no vacilando “en llamar al gobierno de Juárez el

único gobierno existente en la república”, fue cordialmente reconocido por las autoridades en Veracruz, quienes han manifestado desde entonces la más amistosa disposición hacia los Estados Unidos. Desgraciadamente, sin embargo, el gobierno constitucional no ha podido establecer su poder sobre toda la república. Está sostenido por una gran mayoría del pueblo y de los estados; pero hay importantes partes del país en que no puede conseguir ser obedecido.

El Gral. Miramón se mantiene en la capital y en algunas de las provincias distante, hay gobernadores militares que respetan poco los decretos de cualquiera de los dos gobiernos. Al mismo tiempo, los excesos que trae consigo la guerra civil, especialmente en México, están ocurriendo constantemente. Ultrajes de la peor condición se han cometido, tanto contra las personas como contra las propiedades. Apenas hay una clase de agravio que no haya sido sufrido por nuestros ciudadanos en México durante los últimos años. Hemos estado nominalmente en paz con aquella república; pero tanto cuanto afecta a los intereses de nuestro comercio o de nuestros ciudadanos que han visitado el país como comerciantes, capitanes de buques o con otro carácter, ha sido lo que si hubiésemos estado en guerra. Las vidas han estado inseguras, la propiedad sin protección y el comercio no ha sido posible, sino con riesgo de pérdidas que los hombres prudentes no quieren exponerse a sufrir. Contratos importantes, hechos con el gobierno central, que importan grandes desembolsos, han sido despreciados por los gobiernos locales. Americanos pacíficos, ocupados en sus legítimas posiciones, han sido expedidos súbitamente del país con violación de los tratados y por la mera fuerza del poder arbitrario. Ni aun el curso de la justicia ha estado libre de la arbitrariedad y un decreto reciente de Miramón, permite la intervención del gobierno en todos los litigios en que una de las partes sea extranjero. Los buques de los Estados Unidos han sido secuestrados sin derecho y un agente consular que protestó contra tal secuestro ha sido multado y aprisionado por irrespetuoso a las autoridades.

Se han impuesto contribuciones militares en violación de todo principio de derecho y, los americanos que resistieron la demanda ilegal, han sido privados de sus bienes por la fuerza y aun desterrados.

Por un conflicto de autoridad en diferentes partes del país, los derechos aduanales que habían sido pagados en un lugar, han sido exigidos de nuevo en otro. Gran número de nuestros ciudadanos han sido arrestados y reducidos a prisión sin ninguna forma de justicia y aun sin oportunidad de ser oídos y, cuando se han visto ya en libertad, únicamente han obtenido después muchos sufrimientos y perjuicios y sin ninguna esperanza de reparación.

Los asesinatos por mayor de Crable y de sus compañeros, sin juicio, en Sonora, lo mismo que la prisión y asesinato de cuatro americanos enfermos que se habían refugiado en la casa de un americano, sobre el suelo de los Estados Unidos, fueron comunicados al Congreso en su última sesión. Asesinatos de un carácter todavía más atroz se han cometido en el mero corazón de México, bajo la autoridad del gobierno de Miramón durante el presente año. Algunos de estos fueron dignos solamente de una edad de barbarie y, si no estuvieran claramente probados, habrían parecido imposibles en un país que pretende ser civilizado. De esta clase fue el brutal asesinato cometido en abril último por orden del Gral. Márquez: tres médicos americanos que fueron cogidos en el hospital de Tacubaya, mientras que atendían a enfermos y moribundos de ambas partes y, sin juicio, como sin crimen, fueron arrastrados a una violenta ejecución, Poco menos fue el reciente hecho de Osmond Chase, que fue muerto en Tepic el 7 de agosto por orden del mismo general mexicano, no solamente sin juicio, sino sin conjetura ninguna de sus amigos sobre la causa de su arresto. Se le representa como un joven de buen carácter e inteligencia, que se había granjeado numerosos amigos por el valor y humanidad que había manifestado en varias ocasiones difíciles y su muerte fue tan inesperada como tan horrorosa para todos. Otros ultrajes pudieran enumerarse; pero estos son suficientes para conocer el calamitoso estado del país y la falta de protección de las personas y propiedades de nuestros ciudadanos en México.

En todos estos casos nuestros ministros han sido constantes y fieles en sus demandas de reparación; pero tanto ellos como este gobierno, al que sucesivamente han representado, no han podido hacer efectivas sus

relaciones. Su testimonio en este respecto y con referencia al único remedio que a su juicio podría encontrarse para esta exigencia ha sido tan uniforme como enfático.

Únicamente una manifestación del poder del gobierno de los Estados Unidos -escribía nuestro último ministro en 1856-, y de su propósito de castigar estos ultrajes, sería eficaz. Aseguro a usted que la creencia universal es aquí, que nada se debe temer del gobierno de los Estados Unidos y que los oficiales locales mexicanos pueden cometer estos ultrajes contra los ciudadanos americanos con absoluta impunidad. Espero que el Presidente -escribía nuestro ministro actual en agosto último- se consideraría autorizado para pedir al Congreso el poder de entrar a México con fuerzas militares de los Estados Unidos por el llamado de las autoridades constitucionales, con el objeto de proteger los ciudadanos y los derechos de los Estados Unidos adquiridos por tratados. Si no le concede tal poder, ni los unos ni los otros serán respetados en el presente estado de anarquía y desorden y los ultrajes ya cometidos nunca serán castigados y, como aseguré a usted en mi número 23, todos estos perjuicios deben crecer hasta que todo vestigio de orden y gobierno desaparezca en el país.

A mi pesar me veo obligado a adoptar la misma opinión y, por justicia a mis compatriotas que han sufrido perjuicios de México y a los que pueden todavía sufrirlos, juzgo de mi deber anunciar esta conclusión al Congreso.

El presente caso, sin embargo, no es uno simplemente; reclamaciones individuales, aunque nuestras justas quejas contra México ascienden a una gran suma. Ni es tampoco simplemente el caso de protección a las vidas y propiedades de los pocos americanos que puedan todavía permanecer en México, aunque la vida y propiedad de cada ciudadano americano deba ser eficazmente protegida en cualquiera parte del mundo. Esta es una cuestión que afecta a lo futuro, lo mismo que al presente y al pasado y que envuelve indirectamente por lo menos el conjunto de nuestros deberes hacia México, como un Estado vecino. El ejercicio del poder de los Estados Unidos en aquel país para reparar los perjuicios sufridos y proteger los derechos de nuestros propios ciudadanos, no es lo

menos que debe desearse, porque un auxilio suficiente y necesario se puede dar al propio tiempo para establecer la paz y el orden en México mismo. En la consecución de este objeto el pueblo de los Estados Unidos debe tener necesariamente un profundo y grande interés. México debe ser una república rica, próspera y poderosa. Posee un territorio extenso, un suelo fértil y una riqueza mineral incalculable. Ocupa una importante posición entre el Golfo y el Océano para vía de tránsito y para el comercio, ¿Es posible que un país como éste pueda ser abandonado a la anarquía y a la ruina sin que nadie haga un esfuerzo por su recobro y seguridad? ¿Permanecerán las naciones comerciales del mundo que tienen tantos intereses enlazados con él del todo indiferentes a tal resultado? ¿Pueden los Estados Unidos, especialmente, que deben participar más ampliamente de sus relaciones comerciales, permitir a su vecino inmediato que se destruya a si mismo y que los perjudique a ellos? Pues bien sin auxilio extraño no es posible comprender cómo pueda México reasumir su posición entre las naciones y entrar en una senda que prometa buenos resultados. El auxilio que se requiere y que el interés de todas las naciones comerciales exige que tenga, le corresponde darlo a este gobierno, no sólo en virtud de nuestra vecindad con México, a lo largo de cuyo territorio tenemos una frontera de cerca de mil millas, sino en virtud también de nuestra política establecida que no consiente la intervención de ninguna potencia europea en los negocios domésticos de aquella república.

Los agravios que hemos sufrido de México están patentes al mundo y deben causar profunda impresión a todo ciudadano americano. Un gobierno que, o no quiere o no puede satisfacer tales agravios, falta a sus más altos deberes. La dificultad consiste en elegir y aplicar el remedio. En vano acudimos al gobierno constitucional en Veracruz pidiendo la debida reparación a que está bien dispuesto a hacer justicia. Mientras que su autoridad está reconocida en todos los puertos importantes y en las costas de la república, su poder no se extiende a la ciudad de México ni a los estados que le son vecinos, en donde han sido cometidos los ultrajes recientes contra los ciudadanos americanos. Debemos penetrar en el interior para poder llegar a donde están los que nos han ofendido y esto

sólo puede hacerse pasando al través del territorio que ocupa el gobierno constitucional. El modo más aceptable y menos difícil de llenar tal objeto, sería obrar de concierto con aquel gobierno. Creo que su consentimiento y ayuda se podría obtener; pero, si no fuese así, nuestra obligación de proteger a nuestros propios ciudadanos en sus derechos, asegurados por tratados, no sería menos imperiosa. Por estas razones recomiendo al Congreso que expida una ley que autorice al Presidente, bajo las condiciones que parezcan convenientes, para emplear la fuerza militar suficiente para entrar en México, con objeto de obtener una indemnización para lo pasado y seguridad para lo futuro. Me abstengo de hacer cualquiera indicación sobre si estas fuerzas deben consistir en tropas regulares, en voluntarios o en ambas a la vez; esta cuestión debe dejarse más propiamente a la resolución del Congreso. Quisiera solamente hacer notar que, si se eligen los voluntarios, tal fuerza podría levantarse fácilmente en este país entre los que simpatizan con los sufrimientos de nuestros infortunados conciudadanos en México y con la desgraciada condición de aquella república. Tal auxilio a las fuerzas constitucionales las pondría en aptitud de llegar pronto a la ciudad de México y de extender su poder sobre toda la república. No hay motivo para dudar que en ese caso serían satisfechas las justas quejas de nuestros ciudadanos y se obtendría completa reparación por los agravios que se les han inferido. El gobierno constitucional ha manifestado siempre un grande deseo de hacernos justicia y esto puede asegurarse por un tratado preliminar.

Puede decirse que estas medidas serán, cuando menos indirectamente, contrarias a nuestra sabia y establecida política de no intervenir en los asuntos domésticos de las naciones extranjeras. Pero ¿no constituye el caso presente una excepción? La república vecina está en un estado de anarquía y confusión, del que ha probado que es enteramente impotente para salir por sí misma. Está enteramente destituida de poder para mantener la paz en sus fronteras o para prevenir las incursiones de los bandidos en nuestro territorio. En su suerte y en su fortuna, en su poder para establecer y mantiene un gobierno constituido, tenemos mayor interés social, comercial y político, que ninguna otra nación. Es ahora un

náufrago en el océano, sumergido al impulso de las diferentes facciones. ¿No le extenderemos como buenos vecinos una mano amiga para salvarlo? Si nosotros no lo hacemos, no será sorprendente que alguna otra nación acometiese la empresa y entonces se nos obligaría a intervenir al fin bajo circunstancias de crecientes dificultades, para mantener nuestra política establecida.

Repito la recomendación hecha en mi último mensaje anual para que se dé al Presidente facultad de establecer uno o más puestos militares temporales a lo largo de la línea americana de Sonora y Chihuahua, en donde puedan ser necesarios para proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos americanos y mexicanos contra las incursiones y depredaciones de los indios y de los ladrones de aquella remota región. El establecimiento de tal puesto en un punto llamado Arizpe, en Sonora, en un país casi despoblado ahora por las incursiones de los indios de nuestro lado de la línea, se cree que habría evitado muchos daños y muchas crueldades durante la estación pasada. Un estado de desorden y de violencia prevalece en aquella distante frontera. La vida y la propiedad están enteramente inseguras. La población de Arizona, que ahora tiene más de 10 mil habitantes, está de hecho destituida de gobierno, de leyes y de una regular administración de justicia. El asesinato, la rapiña y otros crímenes se cometen con impunidad. Por lo mismo, llamo la atención del Congreso sobre la necesidad de establecer un gobierno territorial en Arizona.